

Clarems Endara

TEJIDO REGIONAL

Integración y desarrollo
en América Latina y el Caribe

Clarems Endara

TEJIDO REGIONAL

INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

**TEJIDO REGIONAL
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE**

Autor:

Clarems Endara

Edición:

Yeimy Ramirez Avila

Maquetación y Diseño de portada:

Mauricio Gaitán

Impreso en:

MACRO SRL. La Paz – Bolivia

ISBN: 978-980-6458-30-7

Depósito Legal: DL DC20240011707

Todos los derechos reservados. Prohibida su venta. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del autor.

Índice

Prólogo	7
Introducción	11
Panorama regional	13
Una perspectiva humanista	16
1 - Perspectivas de integración regional	20
Beneficios de la integración regional	21
La experiencia europea como modelo de integración	26
Repaso de experiencias de integración en América Latina y el Caribe	28
Perspectivas futuras	32
2 - Cooperación regional: lecciones aprendidas	35
Algunas experiencias exitosas de cooperación	36
Los obstáculos y desafíos en la cooperación regional	39
Influencias, motivaciones y desafíos: el rol de los actores internacionales en la cooperación	43
Tipos y dinámicas de cooperación regional	45
Cooperación sur-sur versus cooperación tradicional	50
3 - Dinámicas de gobernanza regional	56
El rol de los organismos internacionales	57
Posibilidades y límites de la gobernanza regional	59
Hacia una gobernanza migratoria integral	62
Gobernanza energética y estrategias para un futuro sostenible	67
Geoestrategia climática: hacia la resiliencia y la justicia	70
Algunas consideraciones finales	74
4 - Hacia un desarrollo sostenible	76
Tendencias y desafíos para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe	77

Desarrollo sostenible e integración regional: tejiendo compromisos	81
Dimensiones del desarrollo sostenible	85
5 - Trayectorias de convergencia regional en América Latina y el Caribe	90
Convergencia, complementariedad y concertación	92
El impulso de la convergencia regional al desarrollo económico	97
Perspectivas de la convergencia regional en América Latina y el Caribe	99
6 - La relevancia del multilateralismo en la integración regional	110
Instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe	111
Rasgos del multilateralismo en el siglo XXI	113
La crisis de la cooperación multilateral y las perspectivas futuras	116
El rol de la educación y la cultura en el fortalecimiento del multilateralismo en América Latina y el Caribe	121
7 - Vías digitales: integración tecnológica y digital en América Latina y el Caribe	124
Tejido digital y conexión <i>tech</i> en la región	125
La tecnología como motor de integración y desarrollo en América Latina y el Caribe	130
El impacto social de la integración tecnológica	134
8 - Tejido cultural: el rol de la cultura en la integración	140
La diversidad, la creatividad y la educación como puentes culturales	142
Tejidos digitales y cultura interconectada	147
Geopolítica de la diversidad cultural	150
9 - Tejiendo alianzas: estrategias regionales de integración	157
Modelos de integración y organismos internacionales	158
Fomentando la integración sectorial para el desarrollo regional	162

Relaciones con otros bloques regionales y colaboración extrarregional	168
Complejidades internas y externas en el camino hacia una integración sólida	173
10 - Conexiones estratégicas: dinámicas de encadenamientos productivos en América Latina y el Caribe	176
Encadenamientos productivos y cadena de valor público	177
Identificación y desarrollo de nichos productivos	181
Integración logística y de puertos	186
Resiliencia y recuperación económica	188
Cooperación financiera y remesas	190
11 - Ciberdiplomacia: la diplomacia en la era digital	193
La relevancia de la ciberdiplomacia en el siglo XXI y su contribución a la integración regional	195
Desarrollo de normas y regulaciones en el ciberespacio y su impacto en la integración regional	198
La ciberseguridad y su importancia para la integración regional	200
Protección de datos y derechos humanos en el ciberespacio	202
Las redes sociales en la diplomacia digital	203
Gobernanza de datos y su impacto en la integración regional	204
12 - Integración física en América Latina y el Caribe	208
Integración energética: potenciando la cooperación regional	209
Geoestrategia del litio y la electricidad: perspectivas para un futuro sostenible en la región	213
Integración vial y portuaria: conectando a la región	219
Referencias bibliográficas	222

Prólogo

Ernesto Samper Pizano
Expresidente de Colombia y exsecretario general de
UNASUR

Clarems Endara es un asiduo defensor de la integración regional, cumpliendo una encomiable tarea de revisión de la historia y la realidad de la integración de América Latina al proponer nuevos enfoques como los contenidos que se encuentran plasmados en este libro. Un ejemplo de esto es la necesidad impostergable de que la región ingrese en la era digital para ocuparse de temas como la conectividad de internet, la interconexión de la telefonía móvil, la digitalización de procesos productivos y de Gobierno, la computación en la nube o el manejo de la desafiante inteligencia artificial.

Para articular propuestas como las recogidas en este libro se precisa desarrollar una visión colectiva sobre la región que identifique hacia dónde vamos, para qué parte tenemos que remar juntos y cómo manejarnos frente a su futuro, entre otras cuestiones. Una visión compartida que sirva de agenda para adelantar una convergencia institucional entre los distintos organismos subregionales de integración que hoy trabajan, de manera poco coordinada, en múltiples frentes de actividad.

La historia nos puede ayudar a entender la importancia de una reflexión de este tipo. En los años 70, la región estaba

invadida por dictaduras militares que violaban de manera sistemática los derechos humanos y su única preocupación era la seguridad. En los años 80, las dictaduras militares fueron rechazadas y los países iniciaron el camino de regreso a las democracias apoyadas por una nueva ola de constituciones garantistas y comprometidas con la paz y la preservación de los derechos humanos. En los 90, se privilegió la integración económica a través de acuerdos de mercado para abrir nuevos espacios comerciales bilaterales y subregionales; fueron los tiempos de los acuerdos de libre comercio donde se privilegió la iniciativa privada frente al protagonismo del Estado.

A comienzos del presente siglo, entre los años 2004 y 2014, se consiguieron avances importantes en materia de inclusión social y aparecieron procesos más complejos de integración, como en los casos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En este escenario se priorizaron ejes comunes de articulación política como la paz, la democracia, los derechos humanos y la sinergia sur-sur como punto de apoyo de un nuevo relacionamiento global en la región, a la vez que los organismos subregionales se ocuparon de acordar agendas sectoriales sociales que lograron rebatir los niveles existentes de pobreza. A partir del 2014, el deterioro de las condiciones sociales, años más tarde la aparición del COVID-19 y la ideologización del debate político, sumados a la fragmentación institucional de los organismos integradores, afectaron severamente la visión colectiva regional. Precisamente durante la época de la pandemia, cuando más necesitábamos la fuerza convocante de la integración, estuvimos más fragmentados.

El panorama de la región hoy, como bien lo señala el autor del texto, es de luces y sombras. Vivimos un evidente proceso de desglobalización como respuesta a la forzosa y costosa dolarización del entorno internacional, mientras el cambio climático lanza señales de alarma y enfrentamos incertidum-

bres como el auge de la inteligencia artificial y la presencia de patologías globales como el narcotráfico, el terrorismo, la xenofobia y posibles conflictos nucleares.

Para enfrentar semejantes retos necesitamos acordar una visión para la convergencia de los esfuerzos de relacionamiento regional que actualmente están cumpliendo los organismos subregionales de integración. Esta visión podría ser una propuesta de desarrollo solidario que responda a una serie de exigencias específicas como, en primer lugar, generar valor para superar la condición extractivista de la economía regional que nos ha llevado a vender lo que producimos o extraemos de la tierra y a exportar el trabajo a bajo costo incorporado en maquilas y servicios de pésima calidad. La integración no consiste solo en abrir espacios comerciales sino en construir una región. Temas relacionados con una nueva arquitectura financiera, asimilación y generación del conocimiento, coordinación de políticas macroeconómicas y la digitalización forman parte de esta cruzada por agregar valor a lo que tenemos.

En segundo lugar, se necesita superar la exclusión social a través de políticas redistributivas del ingreso y prácticas y normas antidiscriminatorias que cierren las brechas que nos caracterizan como la sociedad más desigual del mundo en términos sociales. A las brechas tradicionales de género, campo-ciudad y reconocimiento étnico, sumamos ahora la digital que se pronunció aún más durante y después de la pandemia.

En tercera instancia es preciso fortalecer el concepto de ciudadanía latinoamericana para garantizar la movilidad de las personas dentro de la región y asegurar su participación política para darle legitimidad social a la democracia electoral. Este concepto debe partir de la ciudadanía como identidad, el multiculturalismo como el camino para respaldar en un concepto sólido de nación, un regionalismo abierto hacia el mundo y una integración política hacia dentro de la región.

En cuarto lugar, hay que asegurar una transición ecológica que permita proteger nuestra biodiversidad, sustituir combustibles fósiles por energías limpias y prepararnos para la gestión de desastres resultantes del cambio climático. Se trata de un nuevo capítulo para reafirmar el concepto de desarrollo sostenible inspirado, entre otros, en la región con una propuesta de salvamento vital del planeta.

Finalmente, es necesario enfrentar la inseguridad acatando los principios de no intervención y respetando el derecho y la solución pacífica de controversias o desafíos de seguridad regional. Estos desafíos están relacionados con la protección ciudadana, el tráfico de drogas y armas, la trata de personas, los desajustes climáticos y los posibles conflictos internacionales.

La nueva visión deberá implementarse a través de un proceso de CONVERGENCIA PARA LA INTEGRACIÓN, definido como la articulación de las agendas que cumplen diferentes espacios y organismos de integración latinoamericana, a través de una matriz donde se consignent iniciativas sumables, se eliminen duplicidades y se profundicen las ventajas comparativas en campos específicos.

En esta tarea, quienes han sido y son responsables de conducir organismos vinculados a la integración regional como Clarems Endara, juegan un papel histórico y necesario en los cambios y transformaciones en América Latina y el Caribe.

Introducción

En el siglo xv, América Latina y el Caribe se convirtió en una región donde se extraían recursos naturales para exportar a Europa, lo que dio lugar a una economía basada en la exportación de materias primas. En el siglo xix, muchos de sus países lograron independizarse de las potencias coloniales, pero se enfrentaron a desafíos como la concentración de tierras y la dependencia de las exportaciones. Luego, a lo largo del siglo xx, la región experimentó altibajos políticos y económicos, incluidos momentos de crecimiento industrial y crisis financieras, motivos por los que persisten desafíos relacionados con la desigualdad, la pobreza y la gobernabilidad.

Se han iniciado, en diferentes periodos de la historia de esta región, esfuerzos para una mayor y mejor integración regional. El propósito de este libro en ese sentido es enfatizar que, ante los desafíos actuales, la integración regional no solo es deseable, sino esencial. La globalización, los cambios geopolíticos y los fenómenos como el cambio climático y la pandemia de COVID-19 resaltan la importancia de que los países de la región colaboren en soluciones comunes. *Tejido regional: integración y desarrollo en América Latina y el Caribe* es un texto que, además de tener pretensiones académicas, busca explorar vías prácticas hacia una mayor cooperación entre los países. De esta forma, se examinan las dimensiones de la integración regional y sus beneficios para el desarrollo económico, social y ambiental. Cada capítulo analiza desafíos y oportunidades, desde la cooperación sur-sur hasta

el multilateralismo en el siglo XXI, abordando temas como la integración tecnológica, cultural y ambiental.

En el desarrollo de mi carrera profesional, en las distintas responsabilidades que me ha tocado desempeñar, he sido testigo del esfuerzo integracionista de los países de la región por construir y fortalecer mecanismos que tiendan a armonizar posiciones regionales conjuntas, empleando múltiples estrategias para ello. Esta militancia integracionista ha derivado en beneficios directos para la población que podemos constatar en el día a día y que contribuyen indudablemente en el desarrollo económico y social de la región.

De la misma forma, me ha tocado presenciar los grandes desafíos que enfrentan los procesos de integración —desde diferencias político-ideológicas entre las administraciones gubernamentales hasta diferencias económicas y sociales que dificultan la convergencia de agendas e intereses—, que han llevado a los países, en la mayoría de los casos, a actualizar sus objetivos a través de reingenierías, priorizando nuevamente la recuperación económica como tarea urgente por atender. Recordemos que la prioridad hacia inicios de la década de 2010 fue la búsqueda del equilibrio de la agenda social, que se encontraba rezagada en comparación con la agenda económica y comercial.

Contar con una voz que represente a la región y sus potencialidades urge en estos tiempos donde los principios que guían las relaciones internacionales avanzan hacia su deterioro, y el multilateralismo es seriamente cuestionado. Ese propósito requiere de una integración moderna, flexible y principista que resalte las fortalezas de nuestra región.

Para América Latina y el Caribe, la integración es un destino innegable, pero necesitamos que sea más incluyente y moderna, que responda a los retos actuales y que logre sentirse en el ciudadano de a pie. Dicha integración es fundamental para enfrentar los desafíos del siglo XXI a través de un nue-

vo regionalismo abierto que combine la convergencia interna con una gobernanza renovada de los bloques regionales. Es necesario analizar y reflexionar sobre estos retos para avanzar hacia una verdadera integración económica y social en nuestra región.

En un mundo cada vez más globalizado, es imprescindible que los países de la región trabajen juntos para fortalecer sus economías y aprovechar las oportunidades que ofrece la integración, las cadenas de valor global, la inserción internacional y las medidas beneficiosas en materia de facilitación del comercio. En este camino, la convergencia regional se ha convertido en una meta prioritaria para el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades en nuestra región mediante un diálogo amplio y sincero que permita acercar posiciones y resolver diferencias de manera constructiva; en definitiva, converger hacia una integración real.

Panorama regional

A la hora de plantear discusiones en torno a los procesos de integración regional actuales, es necesario partir del contexto de la pandemia de COVID-19, que ha tenido un profundo impacto en la región desde principios de 2020 tanto en el ámbito sanitario como en el socioeconómico. La rápida propagación del virus ha ejercido una fuerte presión sobre los sistemas de atención médica, lo que ha llevado a medidas de confinamiento y distanciamiento social para contener su avance, medidas que, si bien eran pertinentes, han tenido consecuencias socioeconómicas drásticas, como la pérdida de empleos, cierres de negocios y problemas en las cadenas de suministro. La expansión monetaria derivada de las medidas adoptadas generó un auge en los mercados financieros y accionarios, así como un aumento en la inflación generalizada que afectó el comercio y la economía regionales.

Las desigualdades preexistentes han amplificado el impacto de la pandemia, el cual afectó de manera desproporcionada a comunidades vulnerables y resaltó la importancia de fortalecer los sistemas de salud y de mejorar el acceso a la atención médica (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 2023c). En este contexto, la cooperación regional e internacional ha sido fundamental para adquirir suministros médicos e intercambiar información. Cuando los efectos de la pandemia comenzaban a disminuir, el conflicto entre Rusia y Ucrania afectó las previsiones económicas globales en áreas clave como el comercio mundial, los costos de transporte internacional y la seguridad alimentaria.

Desde una perspectiva económica, la región ha sufrido un detrimento significativo debido a la interrupción de la demanda global y a la caída de las actividades comerciales. La recuperación económica posterior ha mostrado marcadas diferencias entre naciones, influenciadas por factores como la diversificación económica y la adaptabilidad a los cambios provocados por la pandemia.

Teniendo en cuenta las dificultades mencionadas, la región ha experimentado una recuperación progresiva pero desigual. Aunque se proyecta un crecimiento económico para los próximos años, sigue siendo modesto y no alcanza los niveles previos a la pandemia: se calcula que el crecimiento disminuya del 2,5 % estimado en 2023 a un 1,9 % en 2024, y que aumente hasta un 2,5 % en 2025 (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2024). Esto se relaciona con el aumento en las tasas de interés de los bancos centrales en algunos países del mundo en 2023.

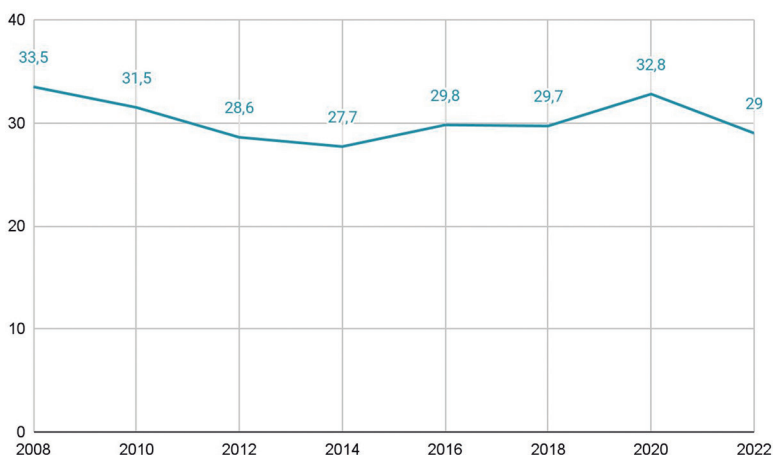
En el ámbito social, a pesar de que el empleo ha regresado en cierta medida a los niveles previos a la pandemia, los ingresos de los hogares no se han recuperado por completo¹, lo que ha llevado a una variación de la tasa de pobreza que,

¹ Banco Mundial, *América Latina y el Caribe: panorama general*. <https://www.banco-mundial.org/es/region/lac/overview#1>

luego de un aumento y una posterior recuperación, se sitúa en índices similares a los anteriores a la pandemia. Además, los salarios reales siguen estancados o incluso han disminuido en algunos casos, lo cual afecta principalmente a los trabajadores con menor nivel educativo y a los adultos mayores.

Figura 1

América Latina: personas en situación de pobreza, 2008-2022

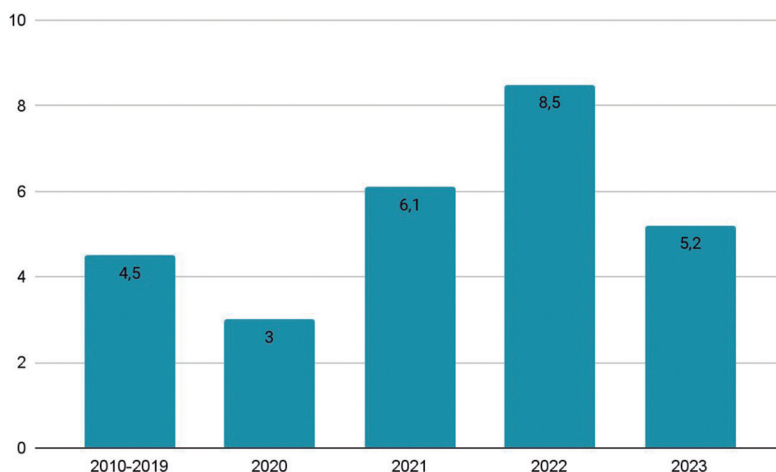


Nota: adaptado de Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2023, de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2024, CEPAL.

En lo que respecta a la variación en los precios y la inflación, se espera que esta última baje a nivel global en los próximos años, y la región no es la excepción. No obstante, sigue siendo un fenómeno que debe ser considerado, ya que es más alta de lo esperado según algunas estimaciones previas (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2023c).

Figura 2

América Latina: inflación interanual, promedio ponderado por población, 2010-2022 y proyecciones para 2023 (en porcentajes)*



*Proyecciones vigentes a junio 2023.

Nota: Estudio Económico de América Latina y el Caribe (p. 136), de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023, CEPAL.

Una perspectiva humanista

En la búsqueda de una mayor integración regional en América Latina y el Caribe, es imperativo adoptar una perspectiva humanista que ponga a las personas en el centro de todas las iniciativas y las políticas. Más allá de los aspectos económicos y comerciales, la integración regional debe tener en cuenta el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos de la región con el objetivo de construir una comunidad más justa, inclusiva y solidaria. En ocasiones, solo se piensa en la faceta institucional y burocrática de estos procesos, y no se consideran los beneficios que traen aparejados para los ciudadanos.

En el centro de esta perspectiva, está el reconocimiento del valor intrínseco de cada persona por el solo hecho de serlo, lo que entraña que cada individuo tiene derecho a vivir con dignidad y a tener acceso a oportunidades que le permitan desarrollar todo su potencial. La integración regional debe garantizar que estos derechos sean respetados y protegidos en todos los niveles. En otras palabras, la integración ayuda al crecimiento económico, lo cual es importante, ya que, a partir de este, se pueden atender las necesidades sociales; pero, además, puede ser una herramienta para mejorar la calidad de vida general de los ciudadanos en otras cuestiones del día a día, como la posibilidad de trasladarse solo con el documento de identidad entre los países, utilizar el *roaming* de los celulares o usar los títulos educativos sin los tediosos trámites de homologación.

Es por ello por lo que los procesos integracionistas no pueden ser impuestos desde arriba, sino que deben ser construidos de manera participativa, involucrando a todas las voces y comunidades de la región. Esto implica asegurar la participación de organizaciones de la sociedad civil que representen los intereses de grupos históricamente marginados, como pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Solo a través de un enfoque inclusivo y participativo, se puede alcanzar una integración regional que refleje las necesidades y las aspiraciones de todos los habitantes de la región.

En este libro, se parte de un concepto de integración que va más allá de lo meramente económico y comercial, y que busca promover el desarrollo humano en todas sus dimensiones; esto supone garantizar el acceso a servicios básicos de calidad, como educación, salud, vivienda y alimentos, así como fomentar la igualdad de oportunidades. Se debe trabajar para abordar las desigualdades estructurales que perpetúan la pobreza y la exclusión dentro de un proceso de integración y convergencia basado en el respeto y la defensa de los dere-

chos humanos fundamentales. Entre ellos, se encuentran los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a la participación política, además de los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo digno, la seguridad social y la cultura. La región debe trabajar en conjunto para garantizar que todos los habitantes puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos sin discriminación ni exclusión.

Esta perspectiva humanista se basa en los principios de solidaridad y cooperación entre los países y pueblos de la región, fundamentados en la historia común y en los elementos culturales compartidos. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, los desafíos que se enfrentan, ya sean económicos, sociales o ambientales, traspasan las fronteras tradicionales establecidas por los distintos Estados nacionales. Es allí donde la integración regional debe ser una expresión concreta de la solidaridad entre los pueblos y países que trabajan juntos para construir un futuro mejor para todos.

En este proceso la cultura desempeña un rol importante: a través del fomento de la interacción cultural y del intercambio de experiencias artísticas y creativas, la integración regional fortalece el sentido de identidad y pertenencia de los habitantes de la región. La música, la literatura, la pintura y otras expresiones artísticas sirven como puentes para conectar a las personas y promover el entendimiento mutuo. No hay que perder de vista que la cultura también es un motor de desarrollo económico y social, ya que contribuye a generar empleos, revitalizar las comunidades locales y estimular el turismo. La integración regional debe reconocer y valorar las diversas culturas involucradas, impulsando el respeto y la protección de las expresiones culturales de todos los pueblos y comunidades.

Como internacionalista y docente en las áreas de derecho, relaciones internacionales e integración, he constatado que una diplomacia activa y propositiva con capacidad de diálogo

es indispensable para lograr una integración regional eficaz. Más allá de los modelos de desarrollo que hayan elegido para su progreso los países, estos deben ser capaces de superar las diferencias y encontrar puntos convergentes a fin de concretar objetivos comunes y alcanzar unidad en la diversidad. En el 2021, el SELA practicó una suerte de encuesta, de la cual participaron dieciocho países, que confirmó que, independientemente del modelo de desarrollo ejercido por los Gobiernos, la necesidad de un crecimiento económico y social que reduzca las grandes inequidades profundizadas por el COVID-19, como la extrema pobreza y la inseguridad alimentaria, es un requerimiento común que debe ser atendido con prioridad y urgencia.

Una de las herramientas creadas por los propios Estados son los organismos internacionales y de integración, algunos de los cuales rondan los cincuenta años de existencia. Estos recibieron el mandato para orientar la búsqueda del desarrollo económico y social de manera conjunta a través de la integración regional, como detallan sus tratados constitutivos. En su mayoría, también han pasado por procesos de actualización/reingeniería a fin de mantener vigente su rol, pero sin dejar sus objetivos y mandatos fundacionales. Estos organismos constituyen un gran cúmulo de *expertise* e institucionalidad, por lo cual, desde mi óptica, merecen una mayor confianza a fin de cederles ciertas capacidades o iniciativas para que entre ellos puedan converger hacia la tan anhelada integración regional.

No es casualidad que en distintas etapas del siglo xx, y ya entrado el siglo xxi, los países hayan identificado, en sus intercambios multilaterales, a la integración como creadora de espacios de diálogo inclusivos, donde se escuchan todas las voces. Para asegurar que los procesos de integración sean justos y representativos de la diversidad de nuestra región, es necesario entonces consolidar el foro de diálogo político de la CELAC; se requiere, a la vez, una mayor instrumentalización ejecutiva de sus mandatos.

1

Perspectivas de integración regional

La integración ha surgido como un mecanismo fundamental para fortalecer las relaciones entre los países de una misma región a través de la cooperación económica, política, social y cultural con el objetivo de alcanzar un desarrollo más equitativo y sostenible. Además, es importante para fortalecer la competitividad global de la región y aprovechar las oportunidades económicas. Los procesos de integración entre países de una misma región se originan como respuesta de los Estados frente a la integración de los mercados (Malamud, 2006), y no debe perderse de vista lo siguiente:

... la cooperación supone el cumplimiento voluntario del acuerdo por parte de sus firmantes, mientras que la integración implica algún grado de transferencia o *pooling* de soberanía y, por lo tanto, el entrelazamiento de sus competencias y recursos más allá de su voluntad. (Malamud, 2011, p. 225)

Por otra parte, siguiendo a Schmitter (2011), se puede afirmar que, en el contexto de las organizaciones regionales transnacionales, se deben considerar tres variables: las reglas de toma de decisiones; los costos y beneficios de la membresía, y los actores involucrados. Estas variables permiten diferenciar entre cooperación e integración regional; la primera, precursora de la segunda. Mientras que la cooperación tiende a

implicar a un grupo limitado de actores, como los cancilleres, la integración alcanza niveles más profundos, pues involucra a representantes de una variedad de intereses, como grupos sectoriales y movimientos sociales. Es por ello por lo que la integración debe penetrar en los pueblos y no solo ser un asunto entre Estados.

En el contexto latinoamericano y caribeño, esta noción adquiere una relevancia aún mayor, dada la historia y la cultura en común; los procesos económicos, que a pesar de sus particularidades coinciden en ciertos patrones, y los desafíos compartidos que caracterizan a esta región.

Beneficios de la integración regional

Sobre la base de una definición de integración como proceso a partir del cual los Estados comparten ciertos atributos de su soberanía con otros países vecinos mediante instituciones comunes (Malamud, 2011), se puede hablar de cuatro etapas de este proceso. La primera es una *zona de libre comercio*, donde no hay aduanas, y los productos pueden viajar entre los países sin pagar aranceles; la segunda etapa es una *unión aduanera*, donde se establecen aranceles para productos de terceros países, con lo cual se crea una entidad comercial conjunta; la tercera etapa es un *mercado común*, que permite la libre circulación de bienes, así como de capital, trabajo y, eventualmente, de servicios, con una política comercial común y una legislación armonizada; finalmente, la *unión económica*, que implica una moneda y una política monetaria únicas (Malamud, 2006). Estos procesos no solo tienen consecuencias económicas, sino también sociopolíticas, ya que generan debates y decisiones que trascienden lo meramente técnico o económico. Ahora bien, a esta definición centrada en lo estatal se le debe sumar la necesidad de que dicha integración también llegue a la sociedad civil y a la vida de las personas, como si fuese un proceso *top-down*. En ese sentido, la integración debe incluir no solo la libre circulación

de factores productivos y bienes, sino también de capitales, servicios y personas.

Por otro lado, hay distintos enfoques y teorías sobre la integración regional que abarcan perspectivas de diferentes disciplinas: el federalismo, el funcionalismo, el neofuncionalismo, el intergubernamentalismo liberal, la gobernanza multinivel, etc. (Malamud, 2011; Perrotta, 2013). Incluso, existen miradas desde teorías propias de la región, como el estructuralismo, cercano a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el autonomismo (SELA, 2023a); estas surgen tanto de la práctica como de la necesidad conceptual, teniendo en cuenta que, según Perrotta (2013), la integración regional es fundamentalmente una política pública moldeada por las decisiones estatales y por objetivos políticos. Además, las regiones son construcciones políticas y sociales, no entidades naturales, y su evolución tiene una dimensión histórica crucial. Por ello, la historia en común de los pueblos latinoamericanos y caribeños es un factor básico que considerar. Finalmente, estas teorías reconocen que los modelos de integración no son estáticos ni puros, y pueden presentar elementos diversos en un mismo momento histórico (Perrotta, 2013).

La integración regional en América Latina y el Caribe ofrece, en definitiva, una amplia gama de beneficios que abarcan los ámbitos económico, político, social y cultural. En términos económicos, la eliminación de barreras comerciales y la creación de mercados comunes fomentan el comercio intraregional de modo que se estimula el crecimiento y el desarrollo, y se atraen inversiones extranjeras con más facilidad. Durante mi trayectoria profesional, he ocupado varios cargos relacionados con la integración regional, donde participé en el trazado de políticas comerciales que promueven desde la cooperación y el diálogo político entre los países de la región como eje de la integración hasta modelos de integración basados específicamente en la apertura comercial mediante la

eliminación de barreras arancelarias y el fomento del intercambio comercial.

Al ampliar los mercados y promover la especialización productiva y la adopción de tecnologías avanzadas, este proceso también beneficia a las empresas de la región, ya que las hace más eficientes y competitivas en el mercado global. En este sentido, identificar nichos para el desarrollo de encadenamientos productivos es uno de los caminos por seguir y sobre el cual el SELA ha venido trabajando en los últimos años (SELA, 2023c).

Desde una perspectiva política, la integración contribuye a fomentar la estabilidad y la paz en la región. Al promover la cooperación económica y política entre países vecinos, se pueden reducir las tensiones y los conflictos, y robustecer así la cohesión y la seguridad en el área. Además, la unidad regional fortalece la voz del continente en el escenario exterior, dado que propicia una mayor capacidad de negociación en asuntos de interés común y una mayor influencia en la toma de decisiones a nivel global. Sin embargo, para que la integración llegue a buen puerto es necesario que lo políticoideológico quede en un costado, y que primen los intereses de los países y las regiones a fin de consolidar una geopolítica regional.

En términos sociales, la integración regional puede tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad, ya que el incremento del comercio y de la movilidad de personas en la región genera empleo, y ello aumenta los ingresos de las personas. Es posible así contribuir en la mejora de las condiciones de vida de la comunidad en general. En áreas como la educación, la salud y la protección social, puede beneficiar a los sectores más vulnerables de la sociedad y contribuir a lograr sociedades más inclusivas y equitativas. En relación con las instituciones políticas, puede fomentar la participación ciudadana al proporcionar espacios

para la colaboración y la toma de decisiones a nivel regional, lo que permite a los ciudadanos influir en las políticas que afectan su vida.

Ahora bien, la integración regional no solo promueve la cooperación económica y política entre los países de la región, sino que también resalta la rica diversidad cultural compartida por estas naciones. A través del intercambio y la colaboración, se fortalece el sentido de identidad regional y se celebra la herencia cultural que une a los países latinoamericanos y caribeños. La música, por ejemplo, actúa como un puente que une a las diversas comunidades de la región, ya que refleja la diversidad de influencias culturales y estilos únicos que la caracterizan, de manera que la variedad de géneros musicales no solo enriquece el panorama cultural, sino que también favorece el entendimiento y la apreciación mutua entre los países. La gastronomía es otro aspecto fundamental de la cultura en común de los países, como también lo son el arte y la literatura, que desempeñan un papel crucial en la promoción de la identidad cultural compartida y reflejan las realidades, los desafíos y los contextos de la región.

Es necesario que la integración cultural nazca desde el pueblo como un elemento básico para fortalecer la identidad regional a partir de la recomposición de las culturas ancestrales, la recuperación de las prácticas tradicionales y el uso de una lengua en común. En este sentido, el Qhapaq Ñan, con su sistema de caminos que atravesaba los Andes y conectaba a diversas comunidades a lo largo del Imperio incaico, es un ejemplo que simboliza la ingeniería avanzada y la visión de unidad de los pueblos andinos. La figura del Tahuantinsuyo, en tanto experiencia comunal, constituye otro ejemplo que debe ser rescatado hoy día. Del mismo modo, los afrodescendientes, a través de su cultura, música y tradiciones, han dejado una huella en el tejido cultural de nuestra región que contribuye significativamente a la diversidad y la vitalidad de nuestra identidad colectiva. Reconocer y celebrar estas

influencias nos ayuda a abrazar plenamente la riqueza de nuestra herencia cultural compartida y promueve un sentido más profundo de inclusión y unidad dentro de nuestra América Latina y el Caribe.

La integración regional también se relaciona con el tamaño de los países. La magnitud del mercado y la capacidad de defensa son factores que influyen, ya que un país pequeño puede prosperar uniéndose a un mercado más grande, lo que le permite ser más eficiente y protegerse mejor. Un país grande, por su parte, puede depender de su propio mercado interno y defenderse por sí mismo, pero manejar una diversidad de preferencias puede ser complicado (Malamud, 2006). La integración regional permite que algunos temas se decidan a nivel nacional, donde las preferencias son más parecidas, mientras que otros, como los negocios y la defensa, se manejan a nivel regional, lo que suele ser más eficaz (Malamud, 2011). El tamaño de los países es un factor primario por considerar, teniendo en cuenta la variedad de la extensión y la cantidad de población.

Por último, es destacable el papel de las entidades internacionales y de integración, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), para reducir las desigualdades dentro de la región. Para ello, a través de políticas de trato especial y diferenciado, se pretende aplicar herramientas para reducir las asimetrías existentes entre los Estados Miembro de cada bloque, es así como estas entidades buscan fomentar la integración económica y social también mediante políticas de cooperación, facilitación del comercio y mejora de infraestructuras. Contribuyen así a crear un entorno más equitativo para todos los países involucrados. Igualmente, su compromiso con la inclusión de los sectores menos desarrollados y el impulso a la cooperación técnica y financiera ayudan a reducir desigualdades y a forta-

lecer la cohesión regional. La colaboración entre los países a través de estos organismos favorece la integración regional, lo que los convierte en una herramienta poderosa para construir un futuro más próspero y equitativo.

Evitar la duplicación de esfuerzos y converger hacia una agenda regional, desde mi perspectiva, es la mejor vía —y la más idónea— para consolidar políticas públicas regionales que armonicen marcos regulatorios en materia ambiental, comercial, aduanera, de atención de salud, tratamiento migratorio, riesgo de desastres y cooperación. Estos y otros temas son relevantes a fin de profundizar la integración, enfocada en la mejora de la calidad de vida de los más de 645 millones de habitantes de la región.

La experiencia europea como modelo de integración

La historia y la evolución de la integración europea, desde sus inicios, en la segunda mitad del siglo xx, hasta la actualidad, constituyen un ejemplo paradigmático de cooperación regional exitosa que puede servir como insumo para otras experiencias, siempre y cuando se tengan en cuenta las particularidades propias de la región. El proceso de integración europea comenzó con el nacimiento de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en 1951, que sentó las bases para la posterior creación de la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1957, precursora de la actual Unión Europea (UE) (Malamud, 2011).

A lo largo de décadas de cooperación y negociaciones, la UE ha alcanzado hitos significativos en su proceso de integración, como la creación del mercado único, en 1993, y la introducción de una moneda única, el euro, en 1999. De los actuales veintisiete Estados miembros de la UE, veinte han sustituido sus propias monedas por el euro y han conformado así la denominada eurozona. Este proceso ha implicado

eliminar barreras comerciales, liberar totalmente el comercio y adoptar políticas comunes en áreas como la agricultura, la competencia, y la política exterior, entre otras. Es una estructura que combina elementos supranacionales e intergubernamentales, así como la coexistencia de decisiones por unanimidad y por mayoría, y la supremacía de la ley comunitaria junto con el principio de subsidiariedad.

La UE cuenta con instituciones clave como la Corte de Justicia, que ha desempeñado un papel crucial en su progreso; un Parlamento, cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos europeos desde 1979, y una Comisión Ejecutiva con un grado significativo de autonomía. Estas tres instituciones son supranacionales, lo que significa que no están sujetas a los Gobiernos de los Estados miembros. Por otro lado, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea son órganos intergubernamentales compuestos por representantes de los Ejecutivos nacionales. Estos cinco órganos constituyen la cúspide de la estructura institucional de la UE (Malamud, 2006).

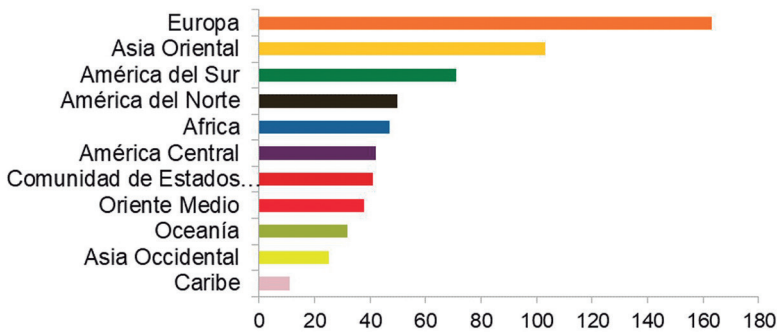
La experiencia europea ha proporcionado una serie de prácticas y lecciones aprendidas que son relevantes para otros procesos de integración regional en todo el mundo, lo que la ha convertido en el máximo modelo de integración de tipo tradicional conocido en esta era. Entre estos aprendizajes, se destacan la importancia de establecer instituciones sólidas y mecanismos de toma de decisiones efectivos, así como el compromiso con el principio de solidaridad entre los Estados miembros y la desideologización necesaria para permitir su fortalecimiento y desarrollo.

Al comparar la experiencia europea con los esfuerzos de integración en América Latina y el Caribe, se pueden identificar similitudes y diferencias significativas. Aunque ambas regiones enfrentan desafíos particulares, como la diversidad cultural y lingüística, y la historia de conflictos y rivalidades,

existen ciertos aspectos en los que los esfuerzos de integración en América Latina y el Caribe pueden beneficiarse de las lecciones aprendidas en Europa. Por ejemplo, la UE ha demostrado la importancia de la gradualidad y la flexibilidad en el proceso de integración, así como la necesidad de establecer objetivos claros y realistas. Además, la experiencia europea destaca la importancia de la cooperación y el compromiso político de los Estados miembros para superar diferencias y avanzar hacia objetivos comunes; subraya también la necesidad de que la población de dichos países acompañe este proceso de integración a partir del reforzamiento de aspectos culturales e históricos en común a fin de afianzar una identidad comunitaria.

Figura 3

Acuerdos Comerciales Regionales en vigencia (participación por regiones)



Nota: adaptado de *Acuerdos Comerciales Regionales. Base de Datos*, de Organización Mundial del Comercio, 2024, OMC (<https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx>).

Repaso de experiencias de integración en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, se han formado diversos bloques y organismos de integración regional con el objetivo de

promover la cooperación económica, política y social entre los países que los conforman. Este proceso se ha desarrollado en distintas etapas o períodos que se remontan al siglo XIX, tras la independencia de las colonias españolas, cuando surgieron intentos de confederación entre las nuevas repúblicas (SELA, 2023a). Aunque estos esfuerzos no tuvieron éxito debido a diversas crisis económicas, políticas y militares, sentaron las bases para la idea de integración regional e incentivaron la identidad propia de la región.

En el siglo XX, las Conferencias Panamericanas, impulsadas por Estados Unidos, establecieron un régimen de cooperación comercial y técnica entre los países del hemisferio, que dio como resultado la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948 (SELA, 2023a). En la década de 1950 y principios de la de 1960, surgieron la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) (Malamud, 2006). En ese momento, se buscó darle un gran impulso al camino de la integración regional de acuerdo con el modelo de desarrollo imperante en ese contexto, relacionado con ciertas ideas de la CEPAL y del estructuralismo latinoamericano (Bouzas, 2017; Ramos, 2018).

Otra etapa comenzó a finales de la década de 1960. La CAN, establecida en 1969 y compuesta inicialmente por Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y Perú, tiene como objetivo promover el desarrollo equilibrado y la integración armónica de sus países miembros a partir de la creación de un mercado común. La CARICOM, por su parte, es una organización de integración regional que incluye a quince países del Caribe y fue fundada en 1973 a fin de fomentar la cooperación económica y social, así como abordar los desafíos comunes que enfrentan los países caribeños. En este contexto, también surge el SELA, una organización intergubernamental establecida en 1975, cuyo propósito es impulsar la coope-

ración e integración económica entre los países latinoamericanos y caribeños. El SELA se dedica a facilitar el diálogo entre los Gobiernos de la región y a diseñar políticas para afrontar los desafíos económicos compartidos. Actualmente, este organismo se enfoca en tres áreas principales: recuperación económica, digitalización e infraestructura, y desarrollo social. Sus temas de incumbencia abarcan aspectos fundamentales como el comercio, la tecnología, la agricultura, la energía, el medio ambiente y otras cuestiones clave del desarrollo regional.

Con las transiciones democráticas en la década de 1980, empieza un período marcado por el relanzamiento del MCCA y la CAN; la transformación de la ALALC en la ALADI, y la creación del Mercosur, en 1988. Este organismo fue fundado oficialmente en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para promover la integración económica y fortalecer la cooperación política entre sus miembros. Bolivia fue el último país en adherirse, mientras que Venezuela fue incorporada como miembro pleno en el año 2012 y suspendida como Estado parte en 2017. El bloque también está integrado por Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam como Estados asociados. El mismo año de fundación del Mercosur se constituyó el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que es la estructura que facilita la unión de los países de esta parte de la región. Inicialmente formado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, se amplió con la incorporación plena de Belice en el año 2000, y de la República Dominicana, en 2013. Además, cuenta con una serie de países observadores tanto dentro de la región como fuera de ella.

En el siglo XXI, se consolidaron nuevas formas de integración regional, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la UNASUR y la Comunidad de Estados Lati-

noamericanos y Caribeños (CELAC), que han buscado fortalecer la unidad y la concertación política en la región. Estos esfuerzos reflejan un compromiso continuo con la integración regional y la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos comunes que enfrentan los países de América Latina y el Caribe (SELA, 2023a). Yendo al caso específico de la Alianza del Pacífico, formada en 2011, es otro importante bloque de integración compuesto por Chile, Colombia, México, y Perú, que se centra en la liberalización del comercio y el incentivo de la inversión extranjera para fomentar el desarrollo económico de sus miembros.

Cada uno de estos bloques y organismos de integración regional ha logrado avances significativos en términos de cooperación económica y política. Sin embargo, también enfrentan desafíos importantes, como la diversidad de intereses entre sus miembros, la desigualdad socioeconómica y la falta de coordinación en la puesta en marcha de políticas regionales. En este sentido, se debe evitar la ideologización de los mecanismos de integración, ya que es preciso trabajar en una convergencia que vaya más allá de los modelos que apliquen los países. En otras palabras, se necesita pensar un nuevo tipo de integración que se asiente en el interés regional y trascienda lo político-partidario. A lo largo de mi carrera, he observado cómo las diferencias ideológicas entre los Gobiernos de los países pueden representar un obstáculo para la unión regional. Para superar estos desafíos, se debe promover un enfoque basado en el diálogo y la cooperación, donde los intereses comunes prevalezcan sobre las diferencias.

La cooperación intrarregional y los acuerdos comerciales desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico y social de la región. En este contexto, estos mecanismos facilitan el intercambio comercial, promueven la inversión extranjera y estimulan el crecimiento económico; de ese modo, contribuyen a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones

de vida de la comunidad. La convergencia en las agendas de los distintos organismos y el trabajo coordinado de sus secretarías son, por tanto, un gran paso en el camino de la integración que ya han dado distintas organizaciones regionales. Esta agenda intersecretarial implica un mecanismo coordinado entre las diversas secretarías o entidades ejecutivas de los esquemas de integración regional, y tiene como objetivo facilitar la comunicación, la colaboración y el intercambio de información entre estos cuerpos para alcanzar una integración más efectiva y sinérgica (SELA, 2023a). Bajo el liderazgo del SELA, este proceso involucra a varios bloques de integración, como la CAN, el Mercosur, la CARICOM, el SICA, la Alianza del Pacífico, la ALBA-TCP, la CELAC y la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En la práctica, implica realizar encuentros periódicos para articular estrategias y proyectos regionales en áreas como cadenas productivas de valor, reducción del riesgo de desastres, cooperación transfronteriza, infraestructura, energía sostenible y seguridad alimentaria.

La convergencia de las agendas tiene entonces un rol decisivo en fortalecer el espíritu integracionista de las naciones latinoamericanas y caribeñas, ya que es un elemento esencial para agilizar los procesos y mecanismos necesarios para impulsar la integración regional. En otras palabras, implica una práctica promisorias que puede contribuir significativamente al desarrollo sostenible de la región. Por ello, se hace necesaria la colaboración y el liderazgo efectivo para avanzar en este proceso en el que también es crucial identificar y abordar los retos y desafíos que se enfrentan a fin de facilitar la integración regional.

Perspectivas futuras

Existe un claro reconocimiento de la importancia de la integración regional como un medio para impulsar el desarrollo económico, sociocultural y político de la región. Los esfuerzos

realizados para promover la cooperación entre los países latinoamericanos y caribeños, así como la creación de numerosos organismos y mecanismos de integración, demuestran una clara tendencia en ese rumbo durante estos años

Sin embargo, existen aún algunos desafíos y obstáculos en el camino hacia una integración más efectiva, entre los que se encuentran las diferencias políticas y económicas entre los países participantes, así como los intereses nacionales, que a veces dificultan la colaboración regional. Además, se resalta la necesidad de una mayor coordinación y cohesión entre los diversos bloques y organismos con el propósito de garantizar resultados más concretos y beneficios tangibles para la ciudadanía. Por otra parte, la diversidad de intereses entre los países miembros de los diferentes bloques sigue siendo uno de los principales obstáculos por superar. Abordar estas diferencias requerirá un mayor compromiso político y una voluntad de negociación por parte de todos los actores involucrados. Construir consensos sobre objetivos comunes será fundamental para avanzar en el proceso de integración.

Otro desafío importante es la persistencia de desigualdades socioeconómicas dentro de la región. Ocuparse de esta disparidad será esencial para garantizar que los beneficios de la integración sean equitativos y lleguen a todos los segmentos de la población. Para ello, se deben implementar políticas que promuevan la inclusión social y reduzcan la pobreza y la desigualdad a fin de fortalecer el tejido social regional.

En cuanto a las oportunidades futuras, la integración regional sigue siendo un motor clave para el desarrollo económico y social. La región cuenta con importantes recursos naturales, una población joven y dinámica, y un mercado interno en crecimiento. Aprovechar estas ventajas requerirá un enfoque actualizado en áreas como la innovación, la educación y la

infraestructura, así como una mayor apertura al comercio y la inversión extranjera. A tal efecto, se debe superar el miedo de delegar funciones soberanas en organismos regionales que puedan generar espacios de diálogo donde se compartan buenas prácticas y se sugieran lineamientos o recomendaciones de líneas de acción o políticas públicas.

Por último, pero no menos importante, la cooperación intra-regional y los acuerdos comerciales desempeñan un papel crucial en el impulso del proceso de integración. Armonizar políticas y regulaciones, facilitar el comercio y promover la inversión son medidas clave que pueden fortalecer los lazos económicos y comerciales entre los países de la región. Aunque se han logrado avances significativos en el proceso de integración regional, aún queda mucho por hacer. Es necesario seguir trabajando en construir una mirada común y en superar los desafíos existentes para avanzar hacia una mayor unidad y cooperación en la región.

Desde mi perspectiva, el futuro de la integración regional es prometedor si continuamos aprovechando nuestras fortalezas y aprendiendo de las experiencias pasadas. Los avances tecnológicos y la creciente interconexión global ofrecen nuevas oportunidades para impulsar el comercio y la cooperación. Mi visión es que trabajando juntos de manera estratégica y coordinada, podemos superar los desafíos actuales y erigir una región más unida, próspera e inclusiva.

2

Cooperación regional: lecciones aprendidas

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la cooperación regional se refiere a los esfuerzos concertados entre países de una misma zona geográfica para abordar desafíos comunes, promover el desarrollo y fomentar la integración. Esto no solo implica cuestiones económicas y políticas, sino también culturales y sociales. La cooperación presupone entonces la existencia de acuerdos que deben ser respetados por las partes que los suscribieron (Malamud, 2011). Es por ello por lo que este tipo de colaboración se basa en el principio de solidaridad y complementariedad entre naciones vecinas, y en el reconocimiento de que muchos de los problemas que enfrentan los países de una región pueden afrontarse de manera más efectiva y eficiente a través del trabajo conjunto.

En el contexto actual de la globalización y la interdependencia económica, la cooperación regional adquiere una relevancia significativa. Los desafíos globales, como el cambio climático, la migración, el crimen transnacional, la recuperación económica posterior a la pandemia de COVID-19 o las consecuencias económicas del conflicto entre Ucrania y Rusia, requieren respuestas colectivas y coordinadas que trasciendan las meras fronteras nacionales. En este sentido, la cooperación regional emerge como un mecanismo para fortalecer la capacidad de los países en su objetivo de enfrentar estos fenómenos de manera sostenible. En mi experiencia, he observado cómo los países que colaboran estrechamente pueden lograr

un mayor impacto al compartir recursos y conocimientos. Esta sinergia es especialmente relevante en regiones como la nuestra, donde las naciones afrontan retos similares y pueden beneficiarse de la acción conjunta.

Es fundamental, entonces, promover una convergencia cooperativa entre las agendas y programas de los distintos mecanismos de integración en América Latina y el Caribe, que permita consolidar un bien común y evitar la duplicación de esfuerzos. Se requiere que los organismos regionales colaboren de manera estrecha para compartir buenas prácticas y plantear acciones conjuntas que atiendan las necesidades de los Estados miembros. Ello implica garantizar que los encadenamientos productivos impulsen tanto el comercio como la inclusión social. América Latina y el Caribe cuenta con una gran capacidad de avanzar en esta dirección y fortalecer el comercio intrarregional.

Algunas experiencias exitosas de cooperación

En América Latina y el Caribe, varios proyectos y programas de cooperación regional han demostrado ser exitosos en el impulso del desarrollo y la integración. Uno de estos ejemplos es el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, más conocido como Proyecto Mesoamérica (PM), que busca fortalecer la infraestructura, el comercio y la seguridad alimentaria en la región mesoamericana. La clave de su éxito radica en la participación de los Gobiernos, organismos internacionales y la sociedad civil, así como en su capacidad para adaptarse a las necesidades cambiantes y asignar recursos de manera efectiva. Este proyecto tuvo su origen en lo que fue el Plan Puebla-Panamá (PPP), lanzado en 2001 con el objetivo de promover el desarrollo económico y social en el sur de México y América Central. Su éxito se atribuye a la colaboración entre múltiples actores, incluidos Gobiernos, sector privado y organizaciones no gubernamentales, así como a la implementación de proyectos concretos que abordan las

necesidades prioritarias de la región y el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos.

En mi opinión, estas iniciativas comparten una característica clave: la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes de la región y asignar recursos de manera efectiva. Además, la participación de actores locales y la implementación de proyectos concretos han sido fundamentales para su éxito. La integración efectiva del mercado en la región derivará en el incremento de previsibilidad en la seguridad alimentaria a fin de garantizar el acceso, la disponibilidad, la utilización y la frecuencia de los alimentos.

Por su parte, distintos programas de acción conjunta contra el hambre en América Latina y el Caribe, liderados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), han sido otro ejemplo destacado de cooperación regional. Estos esfuerzos se ven complementados por el Plan SAN-CELAC, aprobado en 2015, que busca erradicar la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en la región. El objetivo de estas acciones es combatir la desnutrición mediante políticas y programas coordinados, y sus buenos resultados se basan en un enfoque integral que aborda las causas subyacentes del tema, la participación de los países miembros y el intercambio de mejores prácticas.

Otra experiencia destacable, aunque de diferente tipo, es la Alianza del Pacífico, compuesta por Chile, Colombia, México y Perú, cuyo objetivo es promover la integración económica y comercial entre sus miembros. Al reducir barreras comerciales y facilitar el intercambio de bienes, servicios y capitales, esta alianza ha generado un impulso significativo para el crecimiento económico en la región. Otro ejemplo es el SICA, que reúne a ocho países de América Central con el propósito de abordar temas como el comercio, la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo social. A través de programas y proyectos conjuntos, el SICA ha logrado avances significativos

en áreas como la seguridad alimentaria, la gestión de desastres naturales, la electrificación y el comercio intrarregional. Además, el Programa Iberoamericano para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur (PIFCSS) ha fomentado la colaboración entre países iberoamericanos en diversos ámbitos, como la educación, la salud, la ciencia y la tecnología. Al posibilitar el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas entre los países miembros, el PIFCSS ha contribuido al desarrollo humano y social de la región (Secretaría General Iberoamericana [SEGIB], 2023).

La CAN, organismo en el cual tuve el honor de ejercer como director en la Secretaría General, ha demostrado su compromiso con la cooperación de la región al implementar medidas que benefician a los ciudadanos de los países miembros. Entre estas acciones, se destaca la eliminación de cargos de itinerancia, o *roaming* internacional, lo que facilita la comunicación entre los ciudadanos, ya que les permite utilizar, dentro de la CAN, los servicios de telefonía móvil con tarifas similares a las de su país de origen. Por otro lado, el Estatuto Migratorio Andino de este organismo regula la circulación y la residencia de ciudadanos andinos y sus familiares, así como de residentes permanentes extracomunitarios, lo cual promueve la movilidad en la zona. Estas iniciativas, sumadas a otras, fortalecen el proceso de integración regional en la Comunidad Andina y demuestran el compromiso de sus países miembros con el desarrollo conjunto y la cooperación en beneficio de sus ciudadanos.

Un aspecto importante para subrayar es el papel de la cooperación técnica y financiera internacional en el impulso de proyectos de desarrollo regional. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF, entre otros, han colaborado estrechamente con los países de la región para financiar y ejecutar iniciativas en áreas como la infraestructura, la educación, la salud y el medio ambiente.

En términos de las características comunes de estas experiencias exitosas, es importante destacar el valor de la participación de todos los actores relevantes, incluidos los Gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y los organismos internacionales. Además, la coordinación efectiva, la transparencia al gestionar recursos y la evaluación periódica de los resultados son elementos clave para garantizar el éxito a largo plazo de los proyectos de cooperación regional.

Por último, vale la pena mencionar que la integración regional ha favorecido un contexto propicio para la cooperación política y diplomática a través de mecanismos que permiten abordar cuestiones de interés común. Si bien organizaciones como la OEA, el SELA, la CELAC, el ALBA-TCP y la UNASUR han facilitado el diálogo y la colaboración en diversos ámbitos políticos, sociales y económicos, en ciertos casos, se observa una tendencia hacia el debilitamiento de la cooperación política regional, y los bloques regionales tienden a fortalecer la cooperación multilateral en respuesta a tales escenarios (SELA, 2023a).

Los obstáculos y desafíos en la cooperación regional

La cooperación en América Latina y el Caribe se enfrenta a diversos obstáculos y desafíos que pueden afectar su efectividad y limitar su impacto en el crecimiento y desarrollo de la región. Uno de los principales está relacionado con la falta de voluntad política y de cumplimiento de diversos acuerdos por parte de algunos países miembros, lo que puede entorpecer la implementación de proyectos y la toma de decisiones en los diferentes espacios de integración regional.

La diversidad de intereses y prioridades entre los países miembros puede hacer que sea difícil coordinar y definir agendas comunes en temas clave como el comercio, la seguridad y el medio ambiente. La escasez de recursos financieros y técnicos también representa un desafío importante, especialmente para aquellos países más pequeños o con economías

menos desarrolladas, que pueden tener dificultades para participar plenamente en iniciativas de cooperación.

Otro obstáculo importante es la falta de coordinación y cohesión entre los diferentes mecanismos y organismos de integración regional, lo que puede generar duplicidad de esfuerzos y solapamientos en la implementación de políticas y programas. La burocracia excesiva y los procesos de toma de decisiones lentos también reducen la efectividad de la cooperación regional, dado que dificultan la implementación oportuna de proyectos y la adaptación a cambios en el entorno político y económico.

Entre estos desafíos, se encuentran las diferencias políticas, económicas y culturales entre los países miembros —sobre las cuales ya se ha hablado— que pueden dificultar la adopción de políticas y programas comunes. Además, la falta de voluntad y de compromiso por parte de algunos actores clave, estatales y no estatales, puede obstaculizar el funcionamiento eficaz de iniciativas de cooperación regional.

Con respecto a la falta de recursos financieros y técnicos, esto limita la capacidad de los países para participar en proyectos de integración y cooperación regional, ya sea por factores internos, como la debilidad económica y la escasez de recursos humanos capacitados, o por factores externos, como la falta de apoyo financiero y técnico por parte de organizaciones internacionales y donantes. La falta de coordinación y cohesión entre los países miembros o participantes puede debilitar la efectividad de la cooperación regional al dificultar la alineación de objetivos y la implementación de estrategias comunes, y, por ende, disminuir la eficacia del trabajo mancomunado. Esto puede deberse a la falta de mecanismos institucionales efectivos, la competencia entre los países por recursos y oportunidades, o la falta de voluntad política para comprometerse con la cooperación regional a largo plazo.

Para superar estos obstáculos y desafíos, es necesario fortalecer el compromiso político de los países miembros y promover un mayor aporte de la sociedad civil y el sector privado en los procesos de integración regional. Además, se requiere mejorar la coordinación y cohesión entre los diferentes mecanismos de cooperación regional, así como agilizar los procesos de toma de decisiones y reducir la burocracia para facilitar la puesta en marcha de proyectos y programas. Movilizar recursos financieros y técnicos adicionales también es fundamental a fin de garantizar la sostenibilidad y el éxito de los esfuerzos de cooperación en la región.

Figura 4

Tabla de desafíos y obstáculos en la cooperación regional

Desafíos y obstáculos en la cooperación regional	Acciones para afrontarlos
Falta de voluntad política y compromiso por parte de algunos países miembros.	Fortalecer el compromiso político de los países mediante la sensibilización sobre los beneficios de la cooperación regional.
Diversidad de intereses y prioridades entre los países miembros.	Promover el diálogo y la negociación para encontrar puntos en común y definir agendas compartidas.

Escasez de recursos financieros y técnicos.	Movilizar recursos adicionales a través de la cooperación con organizaciones internacionales y donantes externos.
	Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica para países, teniendo en cuenta las asimetrías existentes entre ellos.
Falta de coordinación entre los mecanismos y organismos de integración regional.	Establecer mecanismos permanentes de coordinación efectivos que faciliten la colaboración entre los diferentes actores regionales.
	Reducir la duplicidad de esfuerzos y solapamientos en políticas y programas mediante una mejor comunicación y planificación conjunta.
Burocracia excesiva y procesos de toma de decisiones lentos.	Simplificar los procedimientos administrativos y agilizar los procesos de toma de decisiones mediante la revisión y modernización de los marcos institucionales.
Diferencias políticas, económicas y culturales entre los países miembros.	Fomentar la convergencia de agendas, el entendimiento mutuo y la confianza a través del diálogo y la cooperación en proyectos concretos que beneficien a todos los países involucrados.

Medios cerrados de toma de decisiones.	Afrontar la rigidez en los procesos de toma de decisiones mediante la flexibilización y la adopción de un enfoque progresivo que permita una mayor apertura y participación.
Falta de recursos financieros y técnicos para participar en proyectos regionales.	Promover la inclusión y participación equitativa de todos los países en iniciativas de cooperación regional mediante la provisión de recursos y asistencia técnica adecuados.

Nota: elaboración propia.

Influencias, motivaciones y desafíos: el rol de los actores internacionales en la cooperación

Es necesario indagar sobre el papel de los actores internacionales en los procesos de integración y cooperación en América Latina y el Caribe. Tales actores provienen de diversos órdenes, entre los que se incluyen organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y a menudo proporcionan financiamiento, asistencia técnica y apoyo político a los esfuerzos de cooperación regional. Además, los Gobiernos y otras entidades externas, como fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y grandes empresas multinacionales también desempeñan una tarea importante al formular iniciativas de integración y facilitar el diálogo entre los países miembros.

Los actores internacionales pueden tener diversas motivaciones y objetivos para participar. Estos pueden incluir intereses económicos, políticos, estratégicos y humanitarios, así como el deseo de promover la estabilidad, el desarrollo sostenible

y la paz en la región. Por ejemplo, las organizaciones internacionales pueden estar interesadas en alcanzar la estabilidad económica y financiera en la región para proteger sus inversiones e impulsar el crecimiento económico de los países miembros. Del mismo modo, los Gobiernos pueden tener objetivos políticos y estratégicos, como fortalecer su influencia regional y contrarrestar la influencia de otros actores.

El impacto del accionar de esta variada gama de actores internacionales en la cooperación regional es significativo, ya que pueden proporcionar recursos financieros, conocimientos técnicos y experiencia política que ayude a superar los obstáculos y desafíos que enfrentan los países en estos procesos. Sin embargo, también se pueden generar tensiones y conflictos si se establecen agendas y prioridades que no estén alineadas con los intereses y objetivos de los países de la región. Por lo tanto, es importante que los países miembros trabajen codo a codo con los actores internacionales para garantizar que la cooperación regional sea inclusiva, equitativa y beneficiosa para todos los países y poblaciones involucrados.

Además de analizar el papel de los actores internacionales en la cooperación regional, cabe examinar cómo estos interactúan entre sí y con los países miembros de la región, ya que este vínculo puede dar lugar a dinámicas complejas de influencia, competencia y cooperación que afectan la efectividad y el rumbo de los esfuerzos de integración regional. Asimismo, es relevante explorar cómo pueden ayudar a construir capacidades institucionales y a promover buenas prácticas de gobernanza. Esto incluye tanto el apoyo a la creación y al fortalecimiento de instituciones regionales y subregionales, como el fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

Los actores internacionales influyen en la agenda de integración regional, ya que priorizan ciertos temas sobre otros que son dejados de lado o no tenidos en cuenta. De esa manera,

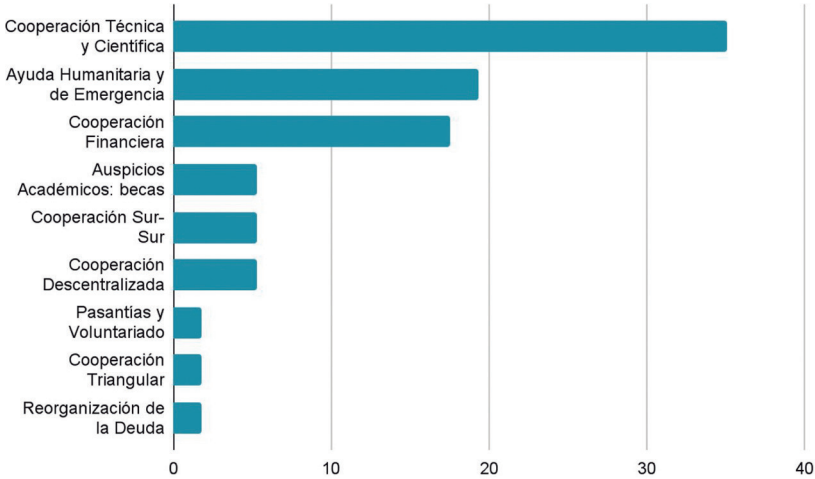
el énfasis en cuestiones como el comercio, la inversión, la infraestructura, la energía, el medio ambiente o la seguridad dependen de los intereses y objetivos de los entes involucrados.

Tipos y dinámicas de cooperación regional

La literatura especializada ha identificado diversos tipos de cooperación regional que van más allá de la simple ayuda económica. De acuerdo con la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) (2023), en términos del vínculo entre los participantes, se pueden distinguir varios tipos de cooperación: la bilateral, que implica la colaboración directa entre dos países; la multilateral, que involucra a múltiples países y organizaciones internacionales; la descentralizada, que se lleva a cabo a nivel local o regional; la norte-sur y la sur-sur, que implican intercambios entre países del norte y del sur global; y la triangular, que involucra a un país donante, un país receptor y una organización intermediaria. Por otro lado, en función del tipo de apoyo que se proporciona, la cooperación internacional puede ser financiera; técnico-científica; de ayuda humanitaria y de emergencia; de reorganización de deuda; de pasantías y voluntariado, o de auspicios académicos. Estas diversas formas de cooperación reflejan la complejidad y la diversidad de los desafíos globales y las necesidades de desarrollo en todo el mundo.

Figura 5

Tipos de cooperación más utilizados antes de la pandemia en América Latina y el Caribe (según cantidad de USD)



Nota: Tendencias de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe (p. 19), de Red Argentina para la Cooperación Internacional, 2023, RACI e Innovación para el Cambio.

Profundizando en lo que respecta a los dos principales enfoques, la cooperación norte-sur y la cooperación sur-sur, la primera hace referencia a la colaboración entre países del hemisferio norte y países del hemisferio sur. A menudo implica la transferencia de recursos financieros, tecnológicos o de conocimiento de los países del norte global a los países del sur con el objetivo de apoyar su desarrollo económico, social y ambiental. Ejemplos de cooperación norte-sur incluyen programas de ayuda al desarrollo, inversión extranjera directa, transferencia de tecnología y asistencia técnica en áreas como salud, educación y medio ambiente. Por otro lado, y yendo a la experiencia propia de América Latina y el Caribe, podemos señalar lo siguiente con respecto a la cooperación sur-sur:

... puede ser definida como un entramado de relaciones y de intercambio cooperativo y complementario con objetivos de desarrollo entre actores del Sur. Se fundamenta en la identificación previa de una serie de necesidades consensuadas que llevan a la formulación de objetivos comunes entre las partes que establecen esa relación. (Ojeda Medina, 2019, p. 15)

Este enfoque se basa en el principio de solidaridad y reciprocidad entre naciones que enfrentan desafíos y realidades similares, por lo que puede involucrar intercambio de experiencias, conocimientos y recursos entre países en áreas como agricultura, salud, educación, comercio y cultura. Los ejemplos incluyen acuerdos de comercio regional, programas de intercambio de estudiantes, proyectos de infraestructura y cooperación en respuesta a desastres naturales. En 1978, se aprobó el Plan de Acción de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (PABA), que fue apoyado por 138 Estados y sentó las bases para la colaboración entre países de todo el sur global a partir del intercambio de experiencias y conocimientos para abordar desafíos comunes y promover el desarrollo sostenible².

La cooperación sur-sur se diferencia de la cooperación tradicional (norte-sur) en que implica un intercambio de conocimientos, habilidades, recursos y experiencias entre países del sur sin la intervención directa de países desarrollados o condicionalidades asociadas a la asistencia oficial para el desarrollo. Además, no debe perderse de vista que los principales países donantes del hemisferio norte optaron por sortear la crisis económica de 2008 mediante medidas de ajuste que repercutieron negativamente tanto en la inversión destinada a políticas sociales a nivel nacional como en la política de ayuda exterior (Ojeda Medina, 2019).

² Naciones Unidas, La Cooperación Sur-Sur, ¿qué es y por qué importa? <https://news.un.org/es/story/2019/03/1453001>

La cooperación triangular, por su parte, implica la participación de tres actores, generalmente dos países en desarrollo y uno desarrollado, o una organización internacional. Estos últimos proporcionan recursos financieros o técnicos para facilitar la colaboración entre los países en desarrollo. Por ejemplo, un país desarrollado podría financiar un proyecto conjunto entre dos países en desarrollo.

Al analizar estos tipos de intercambio, es importante considerar sus efectos en la región. Si bien a través de la cooperación norte-sur se pueden otorgar recursos y conocimientos que contribuyan al desarrollo de los países receptores, también se puede generar dependencia y desequilibrios en las relaciones entre países. A su vez, presenta desafíos relacionados con la sostenibilidad a largo plazo y puede ser cuestionable si no se fortalece la capacidad de los Gobiernos receptores para gestionar y mantener las iniciativas por sí mismos.

La cooperación sur-sur, en cambio, puede favorecer la autonomía y la capacidad de autogestión de los países del hemisferio, y promover una mayor igualdad y solidaridad entre estas naciones. Ofrece la ventaja de compartir experiencias y soluciones adaptadas a contextos similares, lo que puede generar un mayor sentido de pertenencia y apropiación por parte de los países involucrados en vista de que tener una historia y una cultura en común ayuda al mejor desarrollo de este tipo. Además, al no estar condicionada por agendas externas, puede fomentar solidaridad y colaboración entre las naciones del sur. Sin embargo, presenta desafíos como la escasez de recursos financieros y tecnológicos para abordar las necesidades de desarrollo de los países participantes, así como la posible falta de coordinación y coherencia en las estrategias de colaboración.

Cabe destacar otros casos de cooperación regional en América Latina y el Caribe que ejemplifican los diferentes tipos de colaboración y sus efectos. La Alianza del Pacífico, de la cual

ya se ha hablado, representa un modelo de cooperación norte-sur, donde países de la región buscan fortalecer sus lazos comerciales y económicos con naciones extrarregionales.

Por otro lado, existen iniciativas de cooperación sur-sur en la región, donde los países caribeños colaboran en áreas como energía, comercio y desarrollo sostenible (Ojeda Medina, 2019). La CEPAL desempeña un papel importante al supervisar las actividades de cooperación económica entre países en desarrollo y la asistencia multilateral administrada a través de la ONU. Actualmente está enfocada en brindar apoyo técnico a los países para recopilar estadísticas y procesar datos relacionados con la cooperación sursur y la cooperación triangular, lo que resulta fundamental para su cuantificación y valoración.

El SELA, a través de su Secretaría Permanente, ha estado implementando diversos programas e iniciativas destinados a promover la cooperación regional e internacional. Esto incluye organizar reuniones técnicas, foros, seminarios y cursos de formación para abordar diferentes aspectos de la cooperación en la región. Además, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el PIFCSS actúan como plataformas para la coordinación política y el avance técnico entre los responsables de cooperación de los países iberoamericanos.

Todas estas instituciones son especialmente relevantes para establecer metodologías consensuadas a fin de medir y llevar registros de la cooperación sur-sur y la triangular. La SEGIB también publica anualmente el *Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica (2023)*, que ofrece una visión detallada de los avances y los desafíos en esta área. Si bien estos ejemplos contribuyen a una comprensión mejor y matizada de los diferentes tipos de cooperación regional en América Latina y el Caribe, así como de sus implicaciones para el desarrollo y la integración regional, también muestran que queda mucho por hacer en la materia, en especial en

lo que refiere a la institucionalización de los mecanismos de cooperación³.

Cooperación sur-sur versus cooperación tradicional

Es necesario resaltar que la cooperación sur-sur y la cooperación norte-sur, o *cooperación tradicional*, entrañan diferencias fundamentales en sus principios subyacentes y los enfoques utilizados para promover el desarrollo y la cooperación entre países. La cooperación sur-sur se basa en la solidaridad y la igualdad entre naciones en desarrollo, donde los países colaboran con base en sus propias experiencias y recursos disponibles sin imponer condiciones políticas o económicas. Por otro lado, la cooperación tradicional implica la ayuda financiera o técnica por parte de países desarrollados a cambio de ciertas condiciones, que pueden incluir reformas normativas, económicas o sociales específicas, de ahí su carácter de condicional.

Uno de los principales beneficios de la cooperación sur-sur es su enfoque centrado en las necesidades y prioridades de los países receptores, lo que fomenta una mayor apropiación y sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo. Al compartir conocimientos, experiencias y recursos entre países con contextos similares, una historia y una cultura compartidas —aunque diversa—, la cooperación en el contexto latinoamericano y caribeño se revela como más relevante y efectiva para abordar desafíos específicos y promover el desarrollo sostenible a largo plazo. Además, al no estar condicionada por intereses de países y actores externos a esa región, contribuye a fortalecer la autonomía y la capacidad de toma de decisiones de los países receptores.

La cooperación tradicional, por su parte, ofrece acceso a recursos financieros y tecnológicos significativos que pueden ser cruciales para abordar necesidades urgentes de desarro-

³ Para mayores precisiones sobre el tema, visitar: <http://sursur.sela.org/>

llo. Sin embargo, el hecho de que esta ayuda esté sujeta a condiciones impuestas por los países que la brindan tiende a limitar la soberanía y la capacidad de los Estados receptores para diseñar y ejecutar políticas que respondan a sus propias realidades y necesidades. Además, las condiciones asociadas al apoyo pueden generar dependencia a largo plazo y crear desafíos en términos de apropiación y sostenibilidad de los proyectos de desarrollo.

Con respecto a los beneficios y los desafíos mencionados, es importante considerar el papel de los actores internacionales en la promoción de estos enfoques. En el caso de la cooperación sur-sur, como se ha dicho, las organizaciones internacionales son fundamentales para facilitar el intercambio de conocimientos y recursos entre países en desarrollo. En cuanto a la cooperación tradicional, suele estar liderada por países desarrollados y organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, que tienden a condicionar la ejecución de los proyectos.

Otro aspecto relevante es el impacto de estos enfoques en la construcción de capacidades y el fortalecimiento institucional en los países receptores. Mientras que la cooperación sur-sur se orienta a fomentar una mayor autonomía de las instituciones locales mediante el intercambio horizontal de conocimientos y experiencias, la cooperación tradicional condicionada puede generar dependencia y debilitar la capacidad de las instituciones locales para tomar decisiones independientes y responder a las necesidades de sus ciudadanos.

Asimismo, es importante considerar el contexto geopolítico y económico en el que se desarrollan estos tipos de cooperación. En un mundo cada vez más interconectado y multipolar, la cooperación sur-sur ha ganado relevancia como una alternativa a que los países en desarrollo deban depender de la ayuda condicionada de los países desarrollados. Según mi criterio, la importancia y puesta en valor de la coo-

peración sur-sur por su enfoque de igualdad y solidaridad entre naciones en desarrollo marca un mecanismo eficaz de crecimiento compartido. Esta forma de cooperación tiene el potencial de fortalecer las relaciones entre países vecinos y fomentar una mayor apropiación de los proyectos por parte de los actores locales. Sin embargo, persisten desafíos en términos de financiamiento y recursos disponibles para alcanzar una cooperación más equitativa y sostenible entre los países del sur global.

La cooperación sur-sur y la tradicional difieren también en otros aspectos clave: mientras que la tradicional a menudo implica una relación jerárquica y con condiciones entre donantes y receptores, donde los países desarrollados establecen políticas y criterios para la asistencia, la cooperación sur-sur se caracteriza por relaciones más horizontales y una mayor autonomía para los Estados receptores. En esta última, los países en desarrollo comparten conocimientos, recursos y experiencias de manera voluntaria y sin condiciones externas, lo que fomenta un sentido de solidaridad y colaboración entre pares. Asimismo, tiende a ser más flexible y adaptable a las necesidades locales, ya que los Gobiernos participantes tienen un mayor entendimiento de las realidades y desafíos específicos de la región.

En lo que respecta a la cooperación tradicional, muchas veces suele estar vinculada a intereses geopolíticos y económicos de los países donantes, lo que puede llevar a agendas impuestas desde fuera y a la dependencia a largo plazo de la asistencia externa. En pocas palabras, la cooperación entre países del sur global representa un enfoque más igualitario y colaborativo entre naciones de diferentes regiones. En ese sentido, la cooperación tradicional puede reflejar relaciones de poder desiguales y condicionalidades asociadas con la ayuda exterior.

Figura 6

Cuadro comparativo de cooperación recibida en la región y cooperación sur-sur

Aspecto	Cooperación recibida	Cooperación sur-sur
Definición	Transferencia de recursos y conocimientos de países desarrollados a países en desarrollo.	Intercambio de recursos, conocimientos y tecnología entre países en desarrollo.
Actores principales	Gobiernos, organismos internacionales (ONU, Banco Mundial, etc.), ONG de países desarrollados.	Gobiernos de países en desarrollo, organizaciones regionales, alianzas intergubernamentales.
Objetivos	Alivio de la pobreza, desarrollo económico y cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Fortalecimiento de capacidades, intercambio de experiencias, y solidaridad entre países del sur.
Ejemplos	Ayuda oficial al desarrollo (AOD) de países como EE. UU., Japón y Alemania.	Iniciativas de países como Brasil, India, China y Sudáfrica (BRICS).
Ventajas	Mayor disponibilidad de recursos financieros. Amplia experiencia y tecnología avanzada. Acceso a redes internacionales de expertos.	Intercambio de experiencias relevantes y contextuales. Promueve la solidaridad y la integración regional. Aumento de la autonomía de los países en desarrollo.

Desventajas	<p>Puede generar dependencia de la ayuda externa.</p> <p>Condiciones y agendas impuestas por los donantes.</p> <p>Desigualdad en las relaciones de poder.</p>	<p>Limitada disponibilidad de recursos financieros.</p> <p>Menor experiencia técnica en comparación con países desarrollados.</p> <p>A veces falta de estructura institucional sólida.</p>
Metodología	<p>Programas y proyectos con evaluaciones rigurosas y monitoreo constante.</p>	<p>Proyectos colaborativos, intercambio de tecnología, y creación de capacidades.</p>
Impacto esperado	<p>Desarrollo económico sostenido, reducción de la pobreza, y mejora en la calidad de vida.</p>	<p>Fortalecimiento de capacidades locales, integración regional, y desarrollo sostenible adaptado al contexto.</p>

Nota: elaboración propia.

Figura 7

Tabla comparativa entre cooperación sur-sur y cooperación tradicional

Aspecto	Cooperación sur-sur	Cooperación tradicional
Principios	Basada en solidaridad e igualdad entre países en desarrollo.	Implica la provisión de ayuda condicionada por países desarrollados.
Enfoque	Centrado en necesidades y prioridades de países receptores.	A menudo refleja las agendas de los donantes.
Apropiación	Fomenta la apropiación y sostenibilidad de iniciativas.	Puede generar dependencia y limitar soberanía de receptores.
Relaciones	Relaciones más horizontales entre países participantes.	Relaciones jerárquicas entre donantes y receptores.
Autonomía	Mayor autonomía para los países receptores.	Menor autonomía, con políticas y criterios impuestos.
Flexibilidad	Más flexible y adaptable a necesidades locales.	Menos flexible, con agendas vinculadas a intereses externos.
Solidaridad y colaboración	Fomenta un sentido de solidaridad entre pares.	Puede reflejar relaciones de poder desiguales.

Nota: elaboración propia.

3

Dinámicas de gobernanza regional

En el cambiante contexto de América Latina y el Caribe, la gobernanza regional emerge como un pilar importante para abordar los desafíos comunes y aprovechar las oportunidades de desarrollo. La capacidad de los países para coordinar políticas y acciones a nivel regional se convierte en un factor determinante para garantizar la estabilidad, promover el crecimiento económico inclusivo y fomentar la integración..

Esta gobernanza regional, entendida como el conjunto de procesos y mecanismos de cooperación entre los países de una región, desempeña un rol relevante a fin de formular e implementar políticas públicas que dan respuesta a problemáticas transfronterizas y protegen el bienestar de sus ciudadanos. Desde la gestión de flujos migratorios hasta la mitigación del cambio climático y la promoción de la seguridad energética, esta se erige como un instrumento para responder a los desafíos complejos y multifacéticos que enfrenta la región. En palabras de Vigil y Fernández (2012):

... la gobernanza regional refiere al amplio espectro de instituciones alrededor del Estado local/regional encargadas no solo del diseño sino también de la implementación de los diferentes tipos de política (principalmente) económica y social de alcance regional. Esto es, instituciones que trabajan al lado

del gobierno regional/local en ciertos casos, y en lugar del gobierno local en otros, dando *continuidad* al aparato tomador de decisiones. (p. 5)

En este contexto, los organismos internacionales facilitan la coordinación y la colaboración entre los países miembros. Estas instituciones actúan como catalizadores de la integración regional al proporcionar un marco institucional que promueve el diálogo, la concertación y la implementación de acciones conjuntas. Desde la ONU hasta la OEA y el SELA, entre otros, estos organismos aportan experiencia, recursos y orientación técnica con el objetivo de fortalecer la capacidad de los países de la región para enfrentar los desafíos comunes.

El rol de los organismos internacionales

Puedo aseverar, a partir de mi experiencia en el trabajo y la interacción con varios organismos internacionales, que estos desempeñan un papel crucial en la gobernanza de la región, pues contribuyen significativamente al trazado y la ejecución de políticas que abordan una amplia gama de desafíos. Entre estos organismos, la ONU ocupa un lugar central, ya que ejerce funciones y responsabilidades clave en la promoción del desarrollo sostenible y la cooperación regional. Entre sus objetivos, se encuentra la puesta en marcha de programas y proyectos específicos dirigidos a la región sobre temas que van desde la pobreza y la desigualdad hasta la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Su enfoque inclusivo y multisectorial busca fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños para enfrentar los desafíos comunes y alcanzar objetivos de desarrollo sostenible.

Por otro lado, la OEA despliega esfuerzos significativos para defender la democracia, los derechos humanos y la seguridad en la región. A través de su labor de observación electoral, mediación de conflictos y promoción de la participación

ciudadana, busca fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de derecho en los países miembros. Sin embargo, su rol y funcionamiento han sido objeto de críticas y desafíos, especialmente en cuanto a su capacidad para abordar crisis políticas y proteger los derechos humanos de manera efectiva. La OEA enfrenta actualmente el reto de adaptarse a las nuevas realidades y demandas de la región, así como la posibilidad de reforzar su legitimidad y eficacia como organismo regional.

Por su parte, el SELA se destaca por su enfoque en el ámbito de la economía y de la integración regional. Este organismo intergubernamental tiene como objetivo promover el crecimiento y el desarrollo económico y social de la región, facilitando la cooperación entre los países latinoamericanos y caribeños en áreas como el comercio, la inversión y la integración productiva. A través de programas y proyectos regionales, busca impulsar el crecimiento económico inclusivo y fortalecer la capacidad de los países miembros para enfrentar los desafíos globales y de su propio ámbito.

Además de estos organismos, existen otros de carácter regional y subregional que cumplen una tarea importante en áreas específicas. Por ejemplo, el BID financia proyectos de infraestructura y desarrollo en toda la región, mientras que la CEPAL proporciona asesoramiento técnico y análisis de políticas en temas económicos y sociales. La colaboración entre estos organismos y las organizaciones de la sociedad civil es crucial para promover el desarrollo regional y fortalecer la gobernanza democrática. A ellos se suman entes como la CARICOM, la AEC (Asociación de Estados del Caribe) y la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica), cada uno con sus propios objetivos y actividades en el ámbito económico, político y social.

Estos organismos regionales y subregionales buscan incrementar la cooperación entre los países miembros, promover

su integración y abordar los desafíos en común. Sin embargo, también afrontan críticas en cuanto a su capacidad para lograr resultados concretos y generar un impacto significativo en el desarrollo de la región. En este sentido, es fundamental impulsar la colaboración y el diálogo entre todos los actores involucrados en la gobernanza regional con el fin de encontrar soluciones efectivas y sostenibles a los desafíos que enfrenta el continente.

En América Latina y el Caribe, se han producido transformaciones significativas con repercusiones en diversos niveles, lo que indica la importancia de adoptar estrategias de desarrollo regional que estén en sintonía con las realidades locales y nacionales (Vigil y Fernández, 2012). Estas estrategias no deberían encarar los desafíos únicamente desde una perspectiva regional, sino integrarse como parte de políticas coordinadas a nivel nacional y local.

Posibilidades y límites de la gobernanza regional

A la hora de analizar las posibilidades de la cooperación regional y las expectativas depositadas en ella, es posible enfatizar sobre cómo se facilita el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y recursos entre los países miembros, lo que puede conducir a soluciones más efectivas y sostenibles para los desafíos compartidos. En ese sentido, uno de los mayores beneficios de la gobernanza regional es su capacidad para aprovechar economías de escala y recursos en común para abordar problemas que trascienden las fronteras nacionales. Por ejemplo, la cooperación regional en temas como el cambio climático, la migración y la seguridad puede generar respuestas más coordinadas y efectivas que los enfoques individuales de cada país. Además, esta puede favorecer la integración económica y comercial al posibilitar el acceso a nuevos mercados y crear oportunidades de inversión para los países miembros. Asimismo, los

mecanismos de coordinación y cooperación en áreas como la seguridad alimentaria, la gestión de desastres naturales y la lucha contra el crimen organizado han demostrado ser efectivos para resolver problemas complejos que requieren una respuesta colectiva.

Un estudio de Gómez-Mera (2015) mostró que, en primer lugar, la fragmentación y la ambigüedad en las regulaciones de comercio permiten a los países interpretar selectivamente los acuerdos, lo que puede conducir al incumplimiento y la implementación dispar; en segundo lugar, los acuerdos facilitan estrategias políticas interinstitucionales, especialmente utilizadas por Estados poderosos para aumentar su influencia regional; y en tercer lugar, la proliferación de regímenes ha aumentado la competencia política y económica entre Estados y agrupaciones regionales, lo cual debilita la unidad intrarregional. Esta fragmentación institucional ha exacerbado los desafíos históricos de la cooperación, como el comportamiento oportunista, la competencia por el poder regional y la falta de solidaridad. A pesar de las implicaciones negativas, también se abren oportunidades para la cooperación mediante procesos de aprendizaje interinstitucional y el papel de organizaciones internacionales o regionales.

Partiendo de esas cuestiones, la gobernanza regional enfrenta una serie de problemas que pueden limitar su efectividad y obstaculizar el logro de objetivos comunes. La falta de voluntad política y el conflicto de intereses entre los países miembros pueden dificultar la adopción de políticas y la implementación de programas regionales. Del mismo modo, la burocracia y los procesos de toma de decisiones lentos pueden retrasar la aplicación de medidas urgentes y reducir la capacidad de respuesta ante crisis y emergencias. Otro desafío importante es la falta de recursos financieros y técnicos, que puede disminuir la capacidad de los países miembros para participar plenamente en iniciativas de cooperación regional.

Sumado a esto, la falta de coordinación y cohesión entre los diferentes mecanismos y organismos de integración regional puede generar duplicidad de esfuerzos y solapamientos de políticas y programas. Así, la cooperación regional pierde efectividad y se da lugar a la competencia entre las instituciones que se superponen en este sentido, lo cual, según Gómez-Mera (2015), dificulta la unidad regional y la colaboración entre organismos y países. Además, se puede apreciar un aumento de acuerdos bilaterales entre países de diferentes regiones y cierta tendencia al *transcontinentalismo* (Gómez-Mera, 2015), que complejiza el proceso de integración y de gobernanza regional. Por ello, es sumamente destacable la convergencia en las agendas de los distintos organismos y el trabajo coordinado de sus secretarías, así como también los esfuerzos en materia de cooperación y de aumento de acuerdos bilaterales regionales (SELA, 2023b).

Yendo hacia otras cuestiones, es importante considerar la influencia de factores externos en la gobernanza regional, como los intereses geopolíticos y económicos de actores internacionales. Esta región ha sido históricamente objeto de disputas y rivalidades entre potencias mundiales, lo que puede complicar los esfuerzos de cooperación al introducir agendas externas y presiones políticas. Estos intereses externos se manifiestan en forma de intervencionismo, condicionalidades en la ayuda externa o competencia por recursos naturales estratégicos que socavan la autonomía y la soberanía de los países de la región.

Por otra parte, cabe reconocer el potencial transformador de la gobernanza regional en la construcción de un futuro más próspero y equitativo, ya que la cooperación no solo puede fortalecer la capacidad de los países para abordar desafíos comunes, sino que también puede fomentar un sentido de identidad y solidaridad que trascienda las divisiones políticas y económicas. En este punto, es imprescindible recordar que uno de los pilares fundamentales para la integración regional

es la cultura en común y la historia compartida por los pueblos latinoamericanos y caribeños.

Al promover una mayor integración y colaboración entre los países involucrados, la gobernanza regional contribuye a construir un espacio de paz, estabilidad y prosperidad compartidas para todos los ciudadanos. En este sentido, es primordial que los Gobiernos de América Latina y el Caribe trabajen juntos para superar los desafíos y obstáculos que enfrentan, y aprovechar plenamente el potencial de la cooperación regional para el beneficio de sus habitantes.

Hacia una gobernanza migratoria integral

El fenómeno de la migración está intrínsecamente ligado a la historia y la realidad contemporánea. Ante los desafíos y las oportunidades que plantea la movilidad de las personas, la gobernanza regional emerge como un elemento clave para abordar sus complejas dimensiones de manera integral y efectiva. La gobernanza migratoria abarca las leyes, políticas y prácticas orientadas a facilitar una migración segura y ordenada (Muñoz-Pogossian *et al.*, 2023). Aunque los Estados son los principales responsables de esta gobernanza a nivel nacional, la cooperación exterior y los acuerdos son esenciales para su eficacia, dada la naturaleza internacional de la migración. Según Muñoz-Pogossian *et al.* (2023), no se debe perder de vista que, a pesar de contar con diversas leyes que la regulan, persisten vacíos en su implementación a nivel nacional y en el apoyo recibido de países extranjeros para fortalecer las capacidades locales. Es por ello por lo que, a fin de asegurar una gobernanza migratoria efectiva, es crucial adoptar un enfoque de responsabilidad compartida que distribuya equitativamente la carga y los recursos para gestionar la migración y el desplazamiento forzado. Estos autores también firman que, si bien se han establecido varios procesos y mecanismos a tal fin, se requiere un mayor esfuerzo para

fortalecer la cooperación y evitar la duplicación de acciones y la competencia entre los actores involucrados.

La gobernanza migratoria permite entonces coordinar políticas públicas entre los países para enfrentar los retos comunes derivados de la migración, como la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, la prevención de la trata de personas y la garantía de una migración segura, ordenada y regular. A través de mecanismos de diálogo y cooperación, los Estados pueden compartir experiencias, buenas prácticas y recursos para mejorar la gestión migratoria. La gobernanza regional, además, facilita el planteo de enfoques inclusivos y equitativos que reconozcan la diversidad de situaciones y necesidades de las personas migrantes. Al promover la participación de los diferentes actores involucrados, como los Gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, se pueden diseñar políticas migratorias que respeten los derechos humanos, fomenten la integración socioeconómica de las personas migrantes y contribuyan al desarrollo sostenible de los países receptores.

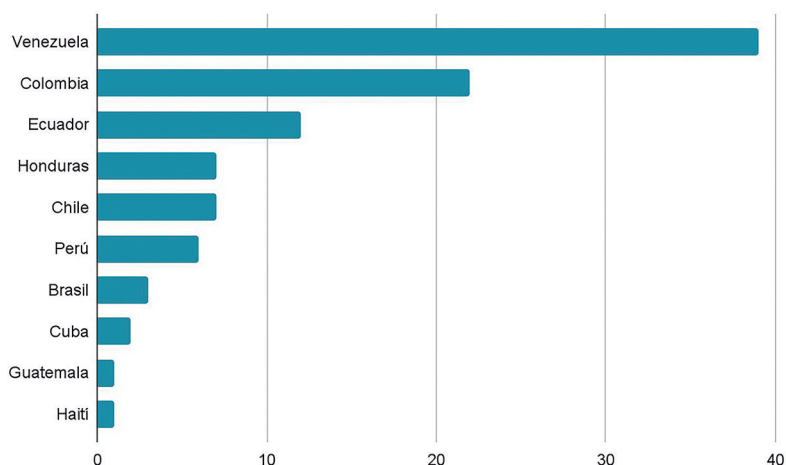
En este sentido, la gobernanza regional es un mecanismo con gran capacidad para impulsar acciones concertadas que brinden protección y asistencia a las personas migrantes en diversas situaciones de vulnerabilidad, y promover su inclusión en la sociedad a partir de los nuevos flujos migratorios. Entre las distintas vulnerabilidades, se distinguen las de ciertos grupos de migrantes, como las mujeres, niños y niñas; la condición de personas en situación de movilidad forzada debido a conflictos, desastres naturales o crisis económicas, etc. Es importante impulsar un cambio de narrativa que destaque las contribuciones positivas de las personas migrantes y que combata la visión negativa que a menudo prevalece sobre la movilidad humana. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ofrece un marco integral para tratar las diversas dimensiones de la migración a nivel internacional (SELA, 2022).

La importancia de adoptar un enfoque integrador y multidimensional en el abordaje de la migración reside en no limitarse únicamente a considerar aspectos legales y de seguridad, sino también incorporar temas relacionados con el desarrollo humano, la inclusión social y la diversidad cultural. Las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, el acceso a servicios básicos y la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, son esenciales para garantizar una migración segura, ordenada y regular.

Una de las principales áreas de la gobernanza migratoria es la gestión de flujos migratorios, que implica implementar políticas y medidas para regular el movimiento de personas dentro de la región y hacia otros destinos. Esto incluye mecanismos para facilitar la migración legal y segura, así como la lucha contra la migración irregular y el tráfico de personas. La cooperación regional en este ámbito puede manifestarse a través de acuerdos bilaterales o multilaterales entre países, así como mediante la colaboración con organizaciones internacionales y agencias especializadas, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De hecho, algunos de los datos disponibles de la OIM muestran que el principal destino de las personas migrantes de nuestra región son los Estados Unidos, con casi el 89,74 % de los casos; seguido de México, con el 8,57 %, y Canadá, con el 1,69 %, mientras que el origen de los migrantes es variado.

Figura 8

País de residencia habitual (últimos doce meses) de las personas migrantes en tránsito por las Américas



Nota: Personas migrantes en tránsito por las Américas, de Organización Internacional para las Migraciones, 2024, OIM (<https://rosan jose.iom.int/es/tablero-interactivo-personas-migrantes-en-transito-por-las-americas>).

La gobernanza migratoria se centra, asimismo, en la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluido el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personales; el derecho al trabajo, y la protección contra la discriminación y la violencia. En este sentido, es fundamental que los países de la región trabajen en conjunto para garantizar el respeto y el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de migración, así como para fortalecer los mecanismos de monitoreo y protección de los derechos de las personas en todas las etapas de su viaje. Es también crucial contar con evidencia empírica confiable y datos precisos para orientar el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones en todos los niveles gubernamentales; dicha base de conocimiento proporciona una guía para comprender la complejidad de la migración internacional y sus implicaciones de modo que se adopten medidas coherentes

y efectivas. La migración, lejos de ser solo un desafío, puede ser una fuerza positiva en el desarrollo, tanto de las personas migrantes como de las comunidades receptoras, lo que subraya la necesidad de abordar este fenómeno de manera integral y equitativa.

La integración de migrantes en las sociedades receptoras es otro aspecto importante de la gobernanza migratoria en América Latina y el Caribe. Este proceso presupone llevar adelante políticas y programas destinados a facilitar la inclusión social, económica y cultural de los migrantes, así como promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre estas personas y las comunidades de acogida. A través de la cooperación regional, se favorece el intercambio de mejores prácticas y experiencias entre países, y se proponen iniciativas de sensibilización y educación sobre la diversidad cultural y la importancia de la cohesión social en contextos migratorios. La integración regional implica un proceso que no es solo económico y político, sino que también tiene una arista sociocultural.

Por último, cabe destacar la necesidad de fortalecer la cooperación regional en la gestión de crisis migratorias, especialmente en situaciones de emergencia humanitaria o conflictos. En tales circunstancias, se requiere una respuesta rápida y coordinada para garantizar la protección y asistencia de las personas desplazadas. Esto implica crear mecanismos de coordinación y colaboración entre países, así como mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones y organizaciones involucradas en la atención de emergencias migratorias. Una cooperación regional efectiva es fundamental para abordar los desafíos humanitarios y sociales derivados de los flujos migratorios y para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

Gobernanza energética y estrategias para un futuro sostenible

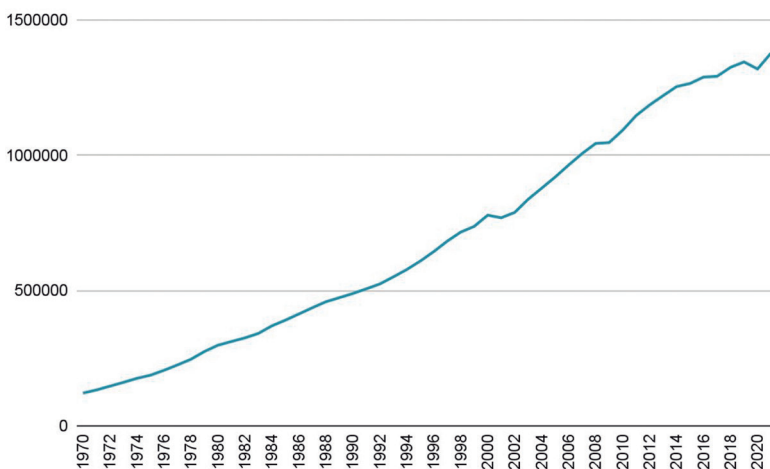
En lo que respecta al desarrollo de la gobernanza energética, es preciso explorar la diversificación de fuentes de energía como una estrategia clave para garantizar la seguridad energética y promover la sostenibilidad ambiental en la región. La dependencia excesiva de combustibles fósiles representa uno de los principales desafíos en este sentido, ya que no solo conlleva riesgos para la seguridad energética, debido a la volatilidad de los precios y la escasez de recursos, sino que también contribuye al cambio climático y otros impactos ambientales negativos. Por lo tanto, es crucial examinar cómo llevar a cabo una transición hacia una matriz más limpia y renovable a partir del desarrollo de tecnologías con estas características (por ejemplo, la energía solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica), así como fomentar la eficiencia energética en todos los sectores. Además, es importante considerar políticas y regulaciones que incentiven la inversión en energías renovables y promuevan la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

La región —en particular, países como Bolivia, Chile y Argentina— cuenta con algunas de las mayores reservas de litio a nivel mundial, lo que la sitúa en una posición privilegiada para encabezar el cambio energético global. Es posible impulsar las economías regionales y contribuir a la diversificación de la matriz energética gracias al crecimiento sostenible de la industria del litio. Asimismo, invertir en la investigación y desarrollo de tecnologías vinculadas a este material puede incentivar la innovación en el ámbito del almacenamiento de energía y la movilidad sostenible. Integrar estratégicamente el litio en la gestión energética, además, abre oportunidades para diversificar las fuentes de energía e impulsar el crecimiento económico, ayuda a proteger el medio ambiente y a favorecer la inclusión social.

Este tipo de gobernanza también debe garantizar la seguridad energética, entendida como la capacidad de asegurar un suministro de energía estable, asequible y sostenible para todos los sectores de la sociedad. Para ello, se deben diversificar las fuentes de energía y los proveedores, así como fortalecer la infraestructura energética y mejorar la eficiencia en la producción, distribución y consumo de energía. Aquí es necesario entonces considerar los aspectos sociales y económicos de esta gobernanza, como el acceso equitativo a la energía y el desarrollo de políticas que promuevan la inclusión social y la creación de empleo en el sector energético. En este sentido, la participación de los diversos actores, incluidos Gobiernos, empresas, sociedad civil y comunidades locales es esencial para garantizar una gobernanza efectiva y orientada hacia el desarrollo sostenible.

Figura 9

Consumo de energía eléctrica (gigavatios-hora) en América Latina y el Caribe 1970-2021



Nota: adaptado de *Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas*, de CEPALSTAT, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023, CEPAL (<https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html>).

En este marco, se vuelve ineludible fortalecer la cooperación en materia energética a través de mecanismos de diálogo y coordinación entre los países de la región para impulsar la integración energética, el intercambio de experiencias y conocimientos, y el diseño de proyectos conjuntos de infraestructura. La colaboración regional puede contribuir significativamente a mejorar la seguridad energética, reducir costos y fomentar el desarrollo sostenible en todo el territorio. Asimismo, a través de la gobernanza energética, es posible abordar los desafíos específicos que enfrentan los países en desarrollo en términos de acceso a la energía, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas, mediante políticas y programas que garanticen un suministro energético seguro, asequible y sostenible para todos los ciudadanos.

Eventos como el Seminario SELA-SICA sobre Integración Energética Regional, celebrado en abril de 2023, resaltan la importancia de la colaboración entre países y organismos regionales para afrontar los desafíos energéticos en común. En este contexto, la integración energética se presenta como una herramienta clave para garantizar un suministro de energía seguro, sostenible y accesible para todos los países a partir de la diversificación de fuentes de energía, la interconexión eléctrica regional y el fomento del uso de energías renovables, aspectos fundamentales que requieren una acción coordinada. Para que estas acciones se plasmen en la realidad, se deben establecer mecanismos de cooperación y coordinación, como grupos de trabajo y agendas convergentes, que permitan superar los desafíos en materia de financiamiento, infraestructura y regulación. Promover la capacitación y el intercambio de experiencias en temas energéticos contribuye a fortalecer las capacidades de los países y organismos regionales en este ámbito.

La gobernanza energética en América Latina y el Caribe es un pilar fundamental para alcanzar la seguridad y el desarrollo sostenible. La cooperación entre estos países en materia

de energía es esencial para enfrentar los desafíos actuales y futuros, como la transición hacia fuentes de energía renovable, la seguridad en el suministro y la eficiencia energética. La integración regional en este ámbito permite aprovechar mejor los recursos disponibles, promover la inversión en infraestructura y tecnologías limpias, y facilitar el acceso equitativo a la energía para todos los ciudadanos.

Al establecer marcos regulatorios claros y transparentes, se puede avanzar en el fomento de la participación del sector público y privado, así como de la sociedad civil, en la toma de decisiones y la implementación de políticas energéticas. La gobernanza energética debe tener en cuenta la diversidad de contextos y necesidades de los países de la región, y promover la inclusión social, la equidad y la protección del medio ambiente como principios fundamentales. Asimismo, es importante reconocer su interconexión con otros ámbitos de la política pública, como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la salud pública. Una gobernanza energética efectiva debe buscar soluciones integrales que aborden los desafíos energéticos de manera holística y sostenible.

Geoestrategia climática: hacia la resiliencia y la justicia

En los últimos años, la cuestión climática ha adquirido una importancia sin precedentes debido a la creciente evidencia del cambio climático causado por actividades humanas, que ha generado impactos devastadores en la vida de todos los seres y en el medio ambiente. Algunos compromisos internacionales, como el Acuerdo de París, han resaltado la urgencia de abordar esta crisis, mientras que movimientos sociales y el activismo han elevado la conciencia pública sobre la necesidad de tomar medidas. Por otro lado, los riesgos económicos y financieros asociados con el cambio climático han llevado a una mayor atención de las empresas e inversores hacia este tema.

En conjunto, estos factores han puesto la cuestión climática en el centro del debate global y han generado un impulso inédito hacia la acción climática, motivo por el que una geoestrategia climática en América Latina y el Caribe se vuelve relevante a la hora de promover la resiliencia y la adaptación al cambio climático en la región. Esto implica identificar y gestionar riesgos, así como fortalecer la infraestructura y las comunidades vulnerables ante eventos extremos. Es así que la cooperación internacional desempeña un papel crucial, pues facilita la transferencia de tecnología y el apoyo financiero para acciones de mitigación y adaptación en países en desarrollo. A través de ella, es posible compartir experiencias y buenas prácticas, y forjar alianzas estratégicas para enfrentar conjuntamente los desafíos ambientales.

Asimismo, es importante considerar los impactos geopolíticos del cambio climático, como los desplazamientos de población, los conflictos por recursos naturales y la migración climática; la geoestrategia climática debe abordarlos de forma integral, incluidos los aspectos de seguridad humana, equidad y justicia climática. En el tratamiento de estos desafíos, la innovación y el desarrollo tecnológico son fundamentales, ya que el empleo de tecnologías limpias y eficientes en la generación y el uso de energía, así como en la gestión sostenible de recursos naturales, es clave para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. La inversión en investigación y desarrollo en esta área es esencial para impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y adaptarse a los desafíos climáticos.

Considerando que la región tiene una gran cantidad de recursos naturales, existe un potencial muy grande para producir energía limpia de manera sostenible. Por ejemplo, existen regiones con alta radiación solar, lo que favorece la instalación de proyectos solares fotovoltaicos a gran escala y sistemas descentralizados, y otras con abundantes recursos hídricos, lo que convierte a la energía hidroeléctrica en una de las fuentes renovables más importantes. Esta capacidad para generar

energía limpia no solo refuerza la seguridad energética y disminuye la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también impulsa el crecimiento económico y la generación de empleo en el sector de las energías renovables. Se debe establecer un marco regulatorio claro y atractivo para fomentar la inversión en proyectos en esta área y así aprovechar completamente este potencial. Además, la posibilidad de generar energía verde es una oportunidad que puede favorecer la transición global hacia una economía baja en carbono y, por ende, hacia un futuro más equitativo y sostenible para todos.

Figura 10

Tabla de tecnologías limpias y eficientes

Tecnología	Ejemplos de aplicación	Beneficios
Energía solar.	Instalaciones fotovoltaicas en zonas urbanas y rurales.	Reducción de emisiones, energía renovable y sostenible.
Energía eólica.	Parques eólicos en áreas costeras y montañosas.	Reducción de emisiones, aprovechamiento de recursos naturales.
Energía hidroeléctrica.	Represas y centrales hidroeléctricas en ríos y lagos.	Energía renovable, bajas emisiones de carbono.
Captura y almacenamiento de carbono (CAC).	Proyectos de secuestro de carbono en industrias y centrales eléctricas.	Reducción de emisiones, mitigación del cambio climático.

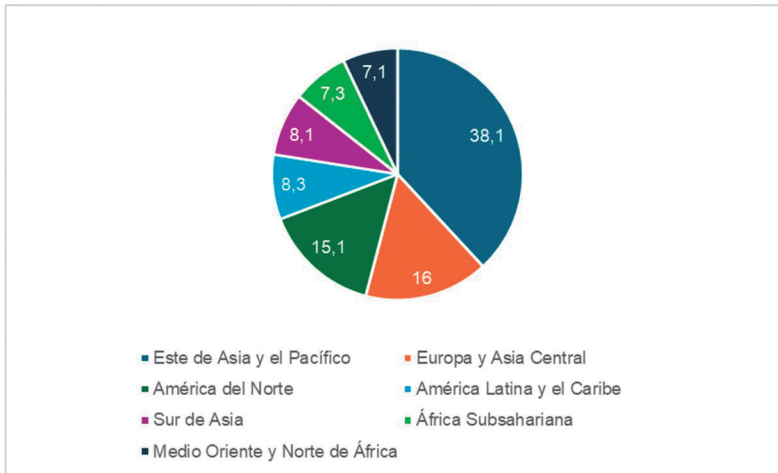
Nota: elaboración propia.

Fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático es una prioridad en la geoestrategia climática regional, cuestión que requiere apoyar iniciativas locales de adaptación, promover prácticas de agricultura sostenible y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos como agua potable y saneamiento. En este sentido, la cooperación entre diferentes sectores, incluidos el público, el privado y el académico, es necesaria para afrontar los desafíos climáticos de manera integral en vista de que el trabajo intersectorial facilita la movilización de recursos y la implementación de estrategias coordinadas con el objetivo de mitigar el cambio climático y adaptarse a él. Por ello es por lo que la participación de la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos originarios se vuelve crucial en la formulación y aplicación de políticas y acciones climáticas. Un diálogo inclusivo y transparente puede generar un mayor compromiso y empoderamiento ciudadano en la lucha contra el cambio climático.

De la misma manera, deben incorporarse consideraciones éticas y de justicia climática en la geoestrategia para mitigar las desigualdades y vulnerabilidades. También es necesario reconocer las responsabilidades diferenciales de los países en la generación de emisiones y los impactos desproporcionados del cambio climático: por ejemplo, América Latina y el Caribe emite menos del 10 % de los gases de efecto invernadero. Adoptar enfoques equitativos en la distribución de recursos y la toma de decisiones climáticas contribuye a construir un futuro más justo y sostenible para todos.

Figura 11

Regiones mundiales: participación en las emisiones globales de gases de efecto invernadero [megatoneladas de CO₂ equivalente (MtCO₂eq) y porcentajes], 2014



Nota: adaptado de *Economics of climate change in Latin America and the Caribbean*, de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (s. f.), CEPAL (https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/infographic_economics_of_climate_change.pdf).

Algunas consideraciones finales

El análisis de las dinámicas de gobernanza regional en América Latina y el Caribe revela la complejidad y la importancia de abordar una variedad de desafíos interrelacionados para promover el desarrollo sostenible y la integración regional. Desde la ONU hasta los organismos regionales, como la OEA y el SELA, entre otros, se reconoce la necesidad de colaboración y coordinación en la región para tratar problemas comunes e incentivar el desarrollo sostenible. Desde mi experiencia trabajando en diversas áreas del Gobierno y en organismos internacionales, he visto de primera mano los beneficios de una

gobernanza regional sólida. No obstante, la falta de voluntad política, la diversidad de intereses entre los países miembros y la burocracia imponen trabas que pueden obstaculizar la efectividad de la cooperación regional. Desde mi experiencia trabajando en diversas áreas del Gobierno y en organismos internacionales, he visto de primera mano los beneficios de una gobernanza regional sólida.

Ante las limitaciones y dificultades enfrentadas por las organizaciones multilaterales tradicionales, surge la oportunidad de explorar esquemas de gobernanza más flexibles y adaptables, tales como los *minimultilateralismos* regionales o temáticos. De acuerdo con Bianchi y Lara (2021), también se evidencia la importancia de fortalecer el flujo de información y decisiones entre distintos niveles de gobierno y actores a fin de alcanzar una gobernanza bidireccional y multiactoral. América Latina y el Caribe tiene la posibilidad de adoptar un enfoque colaborativo y proactivo en el establecimiento de un marco multilateral a largo plazo que no solo aborde los desafíos actuales, sino que también promueva la gobernanza democrática a nivel regional y contribuya a la gestión de problemas compartidos como el cambio climático, las migraciones y el crimen organizado. En última instancia, la agenda de cooperación y acción queda abierta para aquellos que aspiran a liderar en un mundo que demanda soluciones innovadoras y responsables en el siglo XXI (Bianchi y Lara, 2021).

4

Hacia un desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe implica un desafío multifacético que requiere un enfoque integral y colaborativo para abordar una amplia gama de problemáticas. En el contexto de una región rica en recursos naturales y culturalmente diversa, el impulso hacia un desarrollo económico, social y ambiental sostenible se convierte en una prioridad ineludible.

América Latina y el Caribe se caracteriza por una gran heterogeneidad en términos de condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Si bien la región ha experimentado avances significativos en áreas como la reducción de la pobreza y el acceso a la educación y a la salud, persisten desafíos importantes que exigen respuestas innovadoras y coordinadas. En este sentido, el desarrollo sostenible emerge como un paradigma que busca armonizar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y la promoción de la equidad social.

En el escenario planteado, la convergencia regional es uno de los objetivos primordiales para el desarrollo sostenible y la reducción de las desigualdades. Para avanzar en este camino, se necesita del compromiso de diversos organismos, entre los que se encuentra el SELA, que tracen el rumbo hacia la integración regional mediante estrategias compartidas a fin de fortalecer la cooperación, el desarrollo y la integración so-

cial entre los países. De esta forma, es preciso dirigir la atención hacia dentro de la región con el objetivo de identificar y reforzar las ventajas comunes que puedan potenciar un mejor desarrollo. El SELA lidera un trabajo colaborativo con las secretarías de los mecanismos de integración regionales, que busca maximizar el impacto positivo de sus políticas y afianzar la hermandad entre los países de la región. Dicha responsabilidad compartida ayuda en el camino del crecimiento y del desarrollo sostenible de los países.

Tendencias y desafíos para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe

Antes de indagar sobre el desarrollo sostenible, es necesario definirlo. Este concepto surge en la década de 1980 “haciendo hincapié en que no se podían separar los ámbitos social, económico y ambiental” (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible [GNUDS], 2018, p. 32). Siguiendo a Rodríguez y Govea (2006), se lo define como un enfoque que busca mantener un equilibrio entre las necesidades actuales de la sociedad, la preservación del medio ambiente y la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Según estos autores, el concepto comprende tres vertientes fundamentales: en primer lugar, la continuidad y el arraigo de los valores éticos y culturales en una comunidad; en segundo lugar, la consideración de los intereses presentes en la sociedad y su influencia en las prioridades colectivas; y por último, la interrelación dinámica entre el ser humano, la sociedad y el medio ambiente.

En este sentido, el desarrollo sostenible supone la adopción de políticas y prácticas que promuevan el uso adecuado de los recursos naturales; el fomento de tecnologías limpias y menos depredadoras; el fortalecimiento de una cultura política orientada al compromiso y la responsabilidad social, y la creación de dispositivos legales que protejan los bienes

sociales, culturales y naturales, e involucre activamente a la ciudadanía en su preservación (Rodríguez y Govea, 2006).

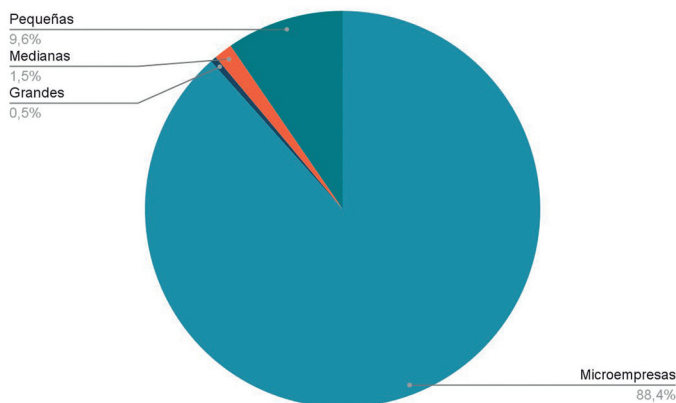
Si bien la región latinoamericana y caribeña presenta un potencial considerable para el progreso y la transformación positiva, se enfrenta a una serie de retos complejos que van desde la desigualdad socioeconómica hasta la degradación ambiental. Uno de los desafíos más urgentes es la desigualdad económica y social, ya que, a pesar de los avances en la reducción de la pobreza, aún existe una brecha significativa entre los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad. Este panorama desigual no solo afecta el bienestar de millones de personas, sino que también obstaculiza el desarrollo sostenible en su conjunto.

Sin embargo, surgen oportunidades para impulsar un desarrollo más inclusivo y equitativo: la innovación juega un papel clave en este proceso, pues ofrece nuevas soluciones tecnológicas y modelos de negocios que pueden transformar sectores enteros de la economía. Asimismo, la inversión en la productividad y la diversificación de las estructuras productivas pueden abrir nuevas vías de crecimiento y desarrollo, y reducir la dependencia de sectores vulnerables respecto de las fluctuaciones económicas. En términos del GNUDS (2018), en el camino del desarrollo sostenible, es importante no dejar a nadie atrás.

En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (pymes) emergen como motores de crecimiento fundamentales, puesto que generan empleo y promueven la innovación y la integración de comunidades rurales en la economía global. Dadas estas características, al apoyar su desarrollo, se puede estimular un crecimiento económico más inclusivo y sostenible en toda la región. El trabajo continuo del SELA en el fortalecimiento de las pymes y en el impulso de políticas públicas orientadas a su progreso marcan este camino de crecimiento económico con el desarrollo sostenible como horizonte.

Figura 12

América Latina: distribución de las empresas según tamaño, 2016 (en porcentajes)



Nota: Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento (p. 13), de M. Dini y G. Stumpo, 2020, CEPAL.

Además de las cuestiones económicas, otros aspectos pertinentes son la educación y la salud, materias fundamentales para el desarrollo humano y el bienestar de la población. Invertir en educación de calidad y acceso a servicios de salud adecuados no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también fortalece la capacidad del país para innovar y competir en la economía global.

Otro factor importante que considerar es la promoción de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta a cuestiones de género y migraciones. Garantizar la igualdad de género y proteger los derechos de las personas migrantes son pasos indispensables para construir una sociedad más justa e inclusiva, lo que implica eliminar la discriminación de género en todos los ámbitos y asegurar la protección y la integración de los migrantes en sus comunidades de acogida. Teniendo en cuenta la experiencia de trabajo del SELA en

esta temática, es necesario contar con evidencia empírica para guiar el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones informadas. Para ello, se debe trabajar a partir del compromiso conjunto de los países de la región para fortalecer sus capacidades en la recolección, análisis y difusión de datos estadísticos migratorios. La migración internacional es un factor elemental de la globalización con un potencial positivo para contribuir al desarrollo tanto de las personas migrantes como de las comunidades receptoras.

En lo que respecta a la esfera ambiental, es necesario abordar urgentemente la gestión sostenible de los recursos naturales y enfrentar el desafío del cambio climático. La región de América Latina y el Caribe alberga una biodiversidad significativa y recursos naturales abundantes, pero también afronta amenazas como la deforestación, la contaminación y los desastres naturales. Adoptar políticas y prácticas que promuevan la conservación ambiental y la mitigación del cambio climático es esencial para proteger el medio ambiente y asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras.

En tal contexto, se entiende la importancia de los acuerdos ambientales en los procesos de integración regional. La cooperación entre países vecinos para gestionar los recursos compartidos y proteger el medio ambiente puede contribuir significativamente al desarrollo sostenible en toda la región. Al establecer marcos regulatorios y mecanismos de cooperación efectivos, los Estados pueden trabajar juntos para abordar los desafíos ambientales de manera más eficiente y equitativa. Para lograr un desarrollo sostenible, es necesario encarar una amplia gama de retos y aprovechar todas las oportunidades disponibles para promover un crecimiento económico inclusivo, proteger el medio ambiente y garantizar el bienestar de todas las personas en la región.

El impacto creciente de la estancación, la crisis sanitaria y la crisis ambiental constituye un obstáculo para el desarro-

llo sostenible y la reducción de las desigualdades en todo el mundo (CEPAL, 2023) porque son crisis interconectadas y tienen implicaciones importantes para la producción de alimentos, la salud y el bienestar de las personas. Con respecto a esto, la degradación ambiental, incluida la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático, está estrechamente vinculada a factores como la sobrepoblación, los patrones insostenibles de consumo y producción, y la debilidad de la gobernanza a nivel internacional, nacional y local. La relación entre estas crisis y el desarrollo sostenible es evidente en la medida en que las manifestaciones del cambio climático y la degradación ambiental menoscaban la capacidad de las sociedades para mantener un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social (CEPAL, 2023).

Esta degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad amenazan no solo la subsistencia de comunidades dependientes de los recursos naturales, sino también las cadenas globales de suministro y la oferta laboral. La contaminación del aire —generada en gran parte por la quema de combustibles fósiles—, por ejemplo, representa un grave problema de salud pública que trunca el desarrollo sostenible. Dicha situación destaca la importancia de adoptar energías renovables como parte de las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles importados en áreas como el Caribe (CEPAL, 2023).

Desarrollo sostenible e integración regional: tejiendo compromisos

El desarrollo sostenible en los procesos de integración regional en América Latina y el Caribe afronta desafíos compartidos y promueve la cooperación entre sus países, acciones que muestran la importancia de reconocer y tratar las dispari-

dades económicas y sociales que existen entre ellos. La integración regional puede contribuir a reducir estas disparidades a partir del intercambio de bienes, servicios, conocimientos y tecnologías que favorecen un crecimiento económico más equitativo y sostenible. Desde mi experiencia, he sido testigo de los beneficios de la colaboración regional en la promoción de un desarrollo sostenible e inclusivo.

Dentro la gama de oportunidades que ofrece la integración regional, se enlistan el fomento a la cooperación en áreas clave como el comercio, la inversión y la infraestructura sostenible; el establecimiento de acuerdos comerciales y la facilitación del acceso a los mercados regionales, que beneficia y mejora la competitividad de los países en la economía global; y el impulso de la inversión sostenible en sectores como la energía renovable, la agricultura sostenible y la infraestructura verde, que puede contribuir al desarrollo económico y, al mismo tiempo, reducir el impacto ambiental negativo.

La integración regional también puede ayudar a coordinar políticas y adoptar medidas conjuntas para abordar desafíos transnacionales como el cambio climático, la gestión de recursos naturales y la protección del medio ambiente. Al trabajar juntos, los países pueden concebir estrategias más efectivas para enfrentar los obstáculos y lograr un desarrollo sostenible en toda la región de manera que impulsen una mejor calidad de vida de las personas a través de la inversión en educación y salud. El intercambio de mejores prácticas educativas y sanitarias, así como la movilidad estudiantil y profesional dentro de la región, contribuye a fortalecer los sistemas educativos y de salud de los países que participan. Esto queda plasmado en la colaboración en la investigación y el desarrollo científico, que puede conducir a avances significativos en la prevención y el tratamiento de enfermedades, así como en la innovación en sectores clave.

Otro aspecto importante es el empoderamiento de las comunidades locales y el incentivo de la participación ciudadana

en los procesos de toma de decisiones. Mediante el intercambio de experiencias y conocimientos entre las autoridades locales, se pueden delinear políticas más inclusivas y centradas en las necesidades de la población. Al involucrar a las comunidades en la planificación y ejecución de proyectos de desarrollo, se puede garantizar una mayor sostenibilidad y aceptación social de las iniciativas regionales.

Por último, el desarrollo sostenible aplicado al proceso de integración regional mejora la capacidad de los países para hacer frente a los desastres naturales y otros riesgos ambientales. La coordinación en la gestión de riesgos y la respuesta a emergencias, así como la inversión en infraestructuras resilientes, pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos extremos como huracanes, inundaciones y sequías. Como ya se ha dicho, la colaboración para conservar y gestionar los recursos naturales de modo sostenible puede contribuir a proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la región. Por ello, se vuelve necesario priorizar la protección social como eje central en la gestión del riesgo de desastres y el abordaje de los impulsores del riesgo, como la pobreza y la desigualdad. Dada la importancia de comprender con mayor profundidad las vulnerabilidades de los grupos más afectados, se necesita promover capacidades en la gestión del riesgo con un enfoque en la protección social para orientar políticas que tiendan a reducirlo e implementar medidas de recuperación económica y social que salvaguarden los ingresos y el acceso a servicios públicos esenciales.

La relación entre las crisis ambientales, económicas y sociales, y el desarrollo sostenible se enmarca en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU en el año 2015. La Agenda 2030 es un plan de acción global que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad de todos para el año 2030. Los diecisiete ODS, que abordan una amplia gama de desafíos, desde la reducción de la desigualdad hasta la acción

climática y la promoción de la paz y la justicia (ONU, 2015), son los siguientes:

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsables.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos.

En este contexto, las crisis mencionadas plantean serios obstáculos para alcanzar los ODS, especialmente aquellos relacionados con la salud, el bienestar, la igualdad y el medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación del aire y el cambio climático afectan directamente al ODS 3, que busca garantizar una vida saludable y promover el bienestar para los ciudadanos de todas las edades. Asimismo, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad pueden socavar los esfuerzos para lograr el ODS 15, que se centra en la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, y en el apoyo de un uso sostenible de los recursos naturales.

Por lo tanto, las crisis ambientales, económicas y sociales se deben encarar de manera integral y en línea con los princi-

pios y objetivos de la Agenda 2030, y los ODS. Tal estrategia requiere políticas y acciones que promuevan la sostenibilidad en todas sus dimensiones, desde la reducción de gases de efecto invernadero hasta el fomento de prácticas agrícolas sostenibles y la protección de la biodiversidad (ONU, 2015). Solo mediante un enfoque colaborativo y multisectorial, se podrán alcanzar los ODS y garantizar un futuro próspero y equitativo para las generaciones presentes y futuras.

Figura 13

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030



Nota: La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015, ONU (<https://www.un.org/sustainable-development/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/#>).

Dimensiones del desarrollo sostenible

Además de examinar el papel de la innovación y la productividad, es fundamental considerar el impacto de las políticas de desarrollo económico en la reducción de las desigualdades y la promoción de la inclusión social. Vale destacar el rol de la innovación tecnológica, que no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también puede generar oportunidades

de empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Al respecto, no se puede pasar por alto el abordaje de las brechas estructurales que limitan la capacidad de ciertos grupos de acceder a oportunidades económicas, como la falta de acceso a la educación y la formación profesional. Al fomentar estructuras productivas diversificadas y resilientes, se pueden crear condiciones para una mayor estabilidad económica y una menor vulnerabilidad frente a los choques externos. Dicho escenario puede alcanzarse a través de sectores económicos sostenibles y estratégicos, así como del fortalecimiento de las cadenas de valor regionales para aumentar la competitividad en los mercados globales (Campos Ríos, 2023).

La inversión en infraestructura física y digital también es crucial a fin de mejorar la conectividad y facilitar el acceso a los mercados, especialmente en áreas rurales y remotas, donde se registran mayores brechas digitales con respecto a las áreas urbanas. Es imprescindible ocuparse de este obstáculo para impulsar el desarrollo sostenible en la región. Las tecnologías digitales ofrecen un potencial significativo de mejorar la productividad agrícola y aumentar los ingresos de los agricultores en las zonas rurales; para lograrlo, se deben implementar políticas públicas efectivas que fomenten la inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones adecuada para las áreas rurales, así como promover la capacitación técnica y financiera en estas comunidades.

En materia de educación y salud, es importante destacar la estrecha relación entre estos dos ámbitos y el desarrollo social en general. La educación de calidad proporciona a las personas las habilidades y los conocimientos necesarios para participar plenamente en la sociedad y contribuir al crecimiento económico. Pese a esto, persisten desafíos significativos en la región en cuanto al acceso, la calidad y la equidad en la educación. En lo que respecta a la salud, se debe garantizar un acceso equitativo a servicios de atención médica de calidad, así como abordar las desigualdades en los determi-

nantes sociales de la salud, como la vivienda, el empleo y el medio ambiente. Tales situaciones cobraron relevancia a partir de la pandemia de COVID-19, que ha puesto de manifiesto las disparidades existentes en el acceso a la atención médica y la necesidad de fortalecer los sistemas de salud para hacer frente a futuras crisis sanitarias.

Para mejorar el acceso equitativo a estos servicios básicos, es necesario implementar políticas y programas que contemplen las barreras económicas, geográficas y culturales que enfrentan diversos grupos de la población. Esto incluye expandir la infraestructura educativa y de salud en áreas rurales y marginales, fortalecer la capacitación docente y del personal de salud, e impulsar prácticas inclusivas y culturalmente sensibles. En vistas de que las acciones mencionadas son decisivas, deben formar parte de las estrategias de desarrollo para que este sea sostenible.

En la línea de un desarrollo de este tipo, es crucial integrar la dimensión de género para garantizar la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de todas las personas, independientemente de su género. En pos de tal fin, es menester eliminar las barreras que enfrentan las mujeres y las niñas en áreas como la educación, el empleo, la participación política y el acceso a servicios de salud reproductiva.

Por su parte, es importante reconocer los desafíos y las oportunidades relacionados con las migraciones en la región, especialmente en un contexto marcado por crisis humanitarias, conflictos y desastres naturales. Garantizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas es fundamental, así como promover enfoques inclusivos y basados en tales derechos. A fin de lograr avances significativos en materia de derechos humanos, es necesario fortalecer el marco legal y las instituciones encargadas de su defensa, así como fomentar la sensibilización y su enseñanza en todos los niveles de la sociedad. Además, se debe ahondar en las causas subyacentes de las violaciones de derechos huma-

nos, como la discriminación, la pobreza y la exclusión social.

En relación con los desafíos ambientales que enfrenta la región, la minería ilegal, la deforestación y el riesgo de desastres naturales son problemas urgentes que requieren una atención inmediata y acciones coordinadas. La primera representa una seria amenaza para el medio ambiente y la salud de las comunidades locales, así como para la economía de la región, por lo que se vuelve necesario aplicar políticas efectivas para combatir esta actividad ilícita y promover prácticas mineras responsables y sostenibles. La deforestación, por su parte, afecta negativamente la biodiversidad, el clima y los medios de vida de las comunidades locales; en consecuencia, se torna imperioso fortalecer la protección de los bosques y apoyar iniciativas de reforestación y uso sostenible de los recursos naturales.

No se debe perder de vista que la región está expuesta a diversos riesgos de desastres naturales, como huracanes, terremotos e inundaciones, que pueden tener consecuencias devastadoras para las poblaciones afectadas. En este escenario, es ineludible llevar adelante acciones para fortalecer la capacidad de respuesta y la resiliencia ante estos eventos, así como impulsar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Los acuerdos medioambientales constituyen esfuerzos de integración regional para abordar el cambio climático y proteger los recursos naturales compartidos, dado que facilitan la cooperación entre los países participantes y promueven acciones conjuntas para enfrentar los desafíos ambientales transfronterizos. El SELA, junto con otros organismos, ha avanzado en materia de cooperación regional para enfrentar estos sucesos.

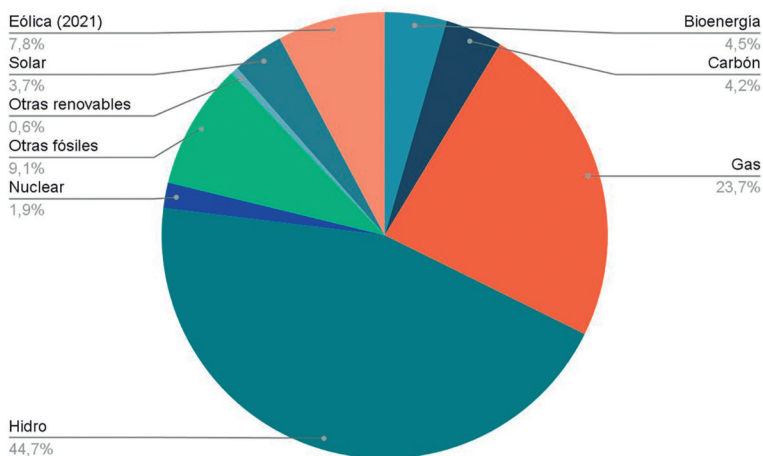
Además de los temas mencionados, existen otros puntos clave, como la transición hacia energías renovables, la gestión sostenible de los recursos naturales y el impulso de la inclusión financiera y el emprendimiento. Estos aspectos

son fundamentales para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible que beneficie a todas las personas en la región. Asimismo, es importante fortalecer la resiliencia comunitaria y estimular la adaptación al cambio climático, además de fomentar la colaboración regional y la cooperación internacional en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos ambientales y sociales.

El futuro de la región depende de nuestra capacidad para trabajar juntos hacia objetivos comunes basados en la equidad, la justicia social y la protección del medio ambiente. A través de la cooperación regional y la implementación de políticas y prácticas sostenibles, podemos construir un futuro más próspero y resiliente para todos los habitantes de América Latina y el Caribe.

Figura 14

Generación eléctrica de América Latina y el Caribe por fuente (en porcentaje), 2022



Nota: adaptado de *Explore open data*, de EMBER, (s. f.), (<https://ember-climate.org/countries-and-regions/regions/latin-america-and-caribbean/>).

Trayectorias de convergencia regional en América Latina y el Caribe

A la hora de indagar sobre la integración regional, hay que tener en cuenta el concepto de convergencia, que ha sido objeto de un interés creciente. La convergencia regional se refiere a la tendencia de las economías de diferentes regiones o países a acercarse entre sí en términos de su desarrollo económico, la reducción de las disparidades de ingresos, productividad y otros indicadores clave. En América Latina y el Caribe, la convergencia implica un proceso mediante el cual los países trabajan en conjunto para reducir las brechas económicas y sociales entre ellos, buscando alinear sus políticas y agendas en pos del desarrollo sostenible y la integración regional. Es importante en este proceso la colaboración multisectorial y multiagente, que involucra a diversos actores y sectores económicos, así como la transversalidad a todos los aspectos relevantes para la vida de los habitantes de la región. Se busca convertir las agendas divergentes en agendas convergentes de manera que estas acciones promuevan la cooperación y la coordinación entre los diferentes mecanismos de integración regional.

La convergencia regional involucra un esfuerzo conjunto para superar los desafíos y conflictos, y encontrar puntos de encuentro que impulsen el desarrollo y la prosperidad compartidos. Existen diversos tipos de convergencia que pueden clasificarse en tres categorías principales, cada una con ca-

racterísticas distintivas y un enfoque específico para ampliar la libre circulación de bienes originarios de los acuerdos (Cornejo, 2018). El primero es la convergencia institucional, que implica el nivel más formal, donde se establece la convergencia como un objetivo dentro del marco normativo e institucional de una organización o un acuerdo. Un ejemplo de esto es la ALADI, donde la convergencia está prevista como parte de su estructura y sus objetivos. El segundo tipo es la convergencia espontánea, que se produce cuando los países desean profundizar sus vínculos comerciales a través de un acuerdo de esta índole que los englobe. Algunos ejemplos son el Mercosur y la CAN, mientras que un caso más reciente es la Alianza del Pacífico. Por último, se encuentra la convergencia operativa, la cual conlleva la extensión de los beneficios de un acuerdo a los insumos de terceros países bajo ciertas condiciones. Aquí, los países pueden negociar para ampliar su participación en los beneficios del acuerdo y cumplir con ciertas obligaciones.

El análisis de estas trayectorias ofrece información crucial sobre el progreso económico y el bienestar de los países de la región. Al entender cómo las economías de América Latina y el Caribe están evolucionando en comparación con sus pares regionales e internacionales, se pueden identificar áreas de oportunidad, desafíos y posibles vías para promover un desarrollo más equitativo y sostenible.

No solo es necesario entender cómo las economías convergen o divergen entre sí, sino también examinar los factores subyacentes que impulsan estas tendencias. Desde políticas económicas y sociales hasta la calidad de las instituciones y la infraestructura, una amplia gama de variables puede influir en la capacidad de un país para converger con sus vecinos o con las economías líderes a nivel mundial. Aquí los organismos internacionales son indispensables, y la convergencia regional entre las agendas de estos organismos y las de los Gobiernos es un factor que ayuda al crecimiento económico, el desarrollo y la integración.

Cabe señalar que las trayectorias de convergencia tienen implicaciones tanto económicas como sociales y políticas, puesto que las disparidades económicas pueden conducir a tensiones sociales, desigualdades en el acceso a oportunidades y recursos, y así generar un ambiente con dificultades para garantizar la estabilidad política y social. Por lo tanto, al analizar las trayectorias de convergencia, se debe tener en cuenta su impacto en la cohesión social, la equidad y la gobernabilidad en la región. Esto permitirá no solo comprender mejor la dinámica económica, sino también formular políticas y estrategias que promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe.

Convergencia, complementariedad y concertación

La convergencia regional se refiere a la alineación y coordinación de políticas y agendas entre los países de un territorio, en este caso, América Latina y el Caribe. El concepto implica buscar puntos de encuentro en diversos aspectos económicos, sociales y políticos con el propósito de avanzar hacia objetivos comunes de desarrollo y crecimiento. Uno de los aspectos más relevantes de la convergencia regional es que motoriza la integración agilizando los procesos de cooperación entre los países miembros. Al alinear las políticas y las agendas, se reducen las barreras burocráticas y se facilita la toma de decisiones conjuntas, lo que acelera los avances hacia una mayor integración económica y política. Con esa convicción, desde mi cargo en el SELA, he impulsado un trabajo conjunto y cooperativo con otros organismos de la región para la convergencia en las agendas, entendiendo los beneficios que trae aparejados este proceso.

Además, la convergencia regional promueve la complementariedad económica entre los países, identificando áreas en las que pueden colaborar y beneficiarse mutuamente, y dando origen a la creación de cadenas de valor regionales y al

fomento de un mayor comercio intrarregional. Así, se fortalecen los lazos económicos y comerciales entre los países participantes. La convergencia regional, asimismo, genera sinergias entre los países, pues les permite compartir mejores prácticas y experiencias exitosas que los lleven a aumentar la eficiencia y efectividad de las iniciativas de integración, y a maximizar los recursos y los esfuerzos colectivos hacia objetivos comunes. También contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y solidaridad entre los países miembros, puesto que, al trabajar juntos hacia metas compartidas, se logra un mayor compromiso con la integración regional a largo plazo, y se crea una base sólida para el desarrollo y el crecimiento sostenible en América Latina y el Caribe.

La convergencia económica en la región se relaciona estrechamente con la complementariedad entre los países que la integran, toda vez que esta última se refiere a la capacidad de estos Estados de trabajar juntos y aprovechar sus diferencias y ventajas comparativas para promover un desarrollo económico mutuamente beneficioso. En este contexto, la convergencia económica implica no solo reducir las disparidades en esta materia entre los países, sino también estimular la cooperación y la integración regional para explotar al máximo el potencial de cada economía.

Un ejemplo claro de complementariedad económica en la región es la integración de sus cadenas de valor. Muchos países latinoamericanos y caribeños tienen ventajas comparativas en sectores específicos, como la agricultura, la minería, la manufactura y los servicios, por lo que trabajar juntos y especializarse en diferentes etapas de la cadena de valor aumenta la eficiencia y la competitividad de la región en su conjunto. Un país puede ser experto en la producción de materias primas, mientras que otro tiene una ventaja comparativa en la fabricación de productos intermedios o en la prestación de servicios especializados; esta situación da pie al círculo virtuoso de la cooperación en la integración de cadenas de

valor regionales, que genera sinergias y crea nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo (Campos Ríos, 2023). El trabajo del SELA en la identificación de nichos que puedan explotarse y mejorar el encadenamiento productivo regional es aquí sumamente importante (SELA, 2023c).

La cooperación en infraestructura muestra otro aspecto de la complementariedad económica en América Latina y el Caribe porque, como región, esta enfrenta desafíos significativos en términos de infraestructura física, incluido el transporte, la energía, las telecomunicaciones y la logística. Al colaborar en proyectos de infraestructura a nivel regional, los países pueden mejorar la conectividad y reducir los costos de transporte, y facilitar así el comercio y la integración económica. Por ejemplo, construir carreteras, puertos y redes de transporte ferroviario mejora la accesibilidad a los mercados internacionales y la movilidad de bienes y personas dentro del ámbito de su influencia. A la vez, la cooperación en infraestructura energética contribuye a garantizar un suministro confiable y sostenible de energía para todos los países de la región, lo que reduce la dependencia de fuentes de energía costosas o no renovables.

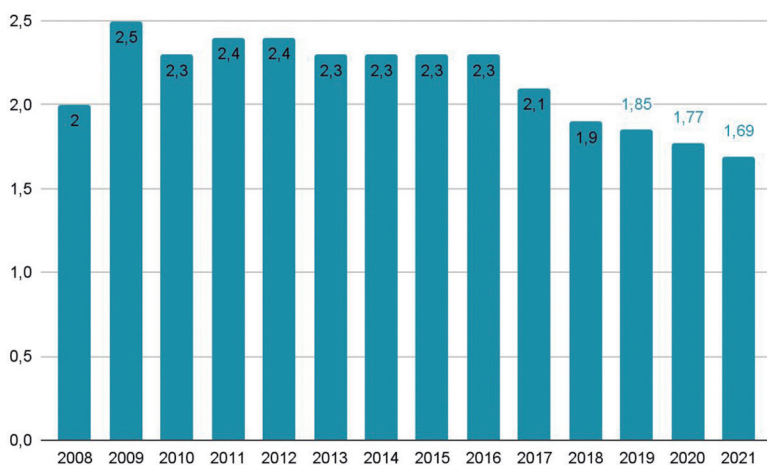
Además de los indicadores económicos mencionados, varios factores influyen en la convergencia regional, tales como las políticas macroeconómicas consistentes, instituciones sólidas y transparentes, acceso a capital humano y tecnológico, y una infraestructura adecuada. Es indispensable contar con una batería de políticas macroeconómicas estables y congruentes a fin de crear un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico sostenido. Dicho entorno supone gestionar de modo prudente la política fiscal y monetaria, así como promocionar políticas comerciales que fomenten la integración regional y la diversificación productiva. Por su parte, las instituciones sólidas y transparentes garantizan un clima de negocios favorable, protegen los derechos de propiedad y aseguran el cumplimiento de los contratos. En tal sentido,

un marco institucional robusto promueve la confianza de los inversores, estimula la competencia y facilita la innovación y la transferencia de tecnología.

Puesto que el acceso a capital humano de calidad es otro factor crucial para impulsar la convergencia económica, no puede dejar de ponerse el acento en invertir en educación y capacitación con el objetivo de mejorar la productividad laboral y estimular la innovación. El acceso a tecnologías de vanguardia, por su parte, permite a las economías adoptar prácticas más eficientes y competitivas. Finalmente, se requiere una infraestructura adecuada en áreas como transporte, energía y telecomunicaciones para reducir los costos de producción, facilitar el comercio y promover el desarrollo regional equitativo. La inversión en infraestructura también puede contribuir a cerrar las brechas de desarrollo entre zonas urbanas y rurales, así como a mejorar la resiliencia frente a desastres naturales y al cambio climático.

Figura 15

Inversión pública en infraestructura en América Latina y el Caribe (como porcentaje del PIB), 2008-2017



Nota: adaptado de *Inversión pública en infraestructura como porcentaje del PIB*. To-

tal Países, de la web de INFRALATAM (<https://www.infralatam.info/>).

Virando la discusión hacia el aspecto conceptual, la concertación, entendida como un proceso de negociación, diálogo y debate para establecer prioridades en la convergencia de agendas de organismos y Gobiernos, juega un papel crucial en el camino hacia la convergencia regional en América Latina y el Caribe (SELA, 2023b). Este ejercicio previo permite fijar objetivos comunes y facilitar la convergencia —definida como el punto de intersección de las agendas de las diferentes instancias regionales— en vistas de que implica plantear posiciones intra- y extrarregionales coincidentes sobre los principales desafíos y asuntos de la agenda global, regional y subregional.

La convergencia no solo apunta a superar desafíos estructurales, sino también a aprovechar las oportunidades que ofrece y trabajar en pos de una visión multidimensional que incorpore la cuestión social y la ambiental, y promueva el desarrollo sostenible y equitativo en la región. Se convierte, entonces, en un proceso circular que busca tanto el fortalecimiento económico como la cohesión regional y la consolidación de la unidad regional (SELA, 2023b).

La cooperación y la concertación son herramientas clave en este proceso, ya que permiten articular esfuerzos y definir estrategias compartidas para abordar los desafíos comunes de la región. La convergencia implica, además de trabajar las agendas divergentes y convertirlas en agendas convergentes, consolidar coaliciones y plataformas unificadas que promuevan el desarrollo y el crecimiento regional. En última instancia, la convergencia es una condición necesaria para avanzar hacia un regionalismo complejo, donde se fomente una integración profunda y una gobernanza regional efectiva en América Latina y el Caribe (SELA, 2023b).

El impulso de la convergencia regional al desarrollo económico

Como se aprecia hasta aquí, la convergencia regional desempeña un papel clave en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe al promover un crecimiento equitativo, inclusivo y sostenible en toda la región. Esto sucede porque la convergencia económica fomenta un desarrollo más justo al reducir las disparidades de ingresos y riqueza entre los países y dentro de ellos. Cuando los Estados convergen en términos del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y otras medidas de desarrollo económico, se espera que también haya una convergencia en los niveles de vida y bienestar de sus ciudadanos. Una situación tal conduce a una distribución más justa del ingreso y la riqueza, lo que a su vez puede reducir la pobreza y la desigualdad social en la región.

Además, la convergencia económica tiene un impacto positivo en la estabilidad política y social de la región, que no es ajena a las brechas económicas significativas. Tales brechas generan tensiones sociales y políticas, especialmente si se percibe que ciertos grupos o subregiones están siendo marginados o excluidos del proceso de desarrollo. Al reducir estas diferencias, se promueve la cohesión social y la estabilidad política, lo que a su vez permite la creación de un entorno más propicio para la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible a largo plazo.

Otro aspecto importante es cómo la convergencia económica puede impulsar la integración regional y la cooperación entre países cuando estos coinciden en términos de desarrollo económico, ya que tienden a tener intereses y objetivos más similares. Ello facilita la colaboración en áreas como el comercio, la inversión, la infraestructura y la protección del medio ambiente. Esta mayor cooperación genera beneficios mutuos y permite un desarrollo más armonioso y equilibrado en toda la región. A partir de este alineamiento en los intereses, se da también una alineación gradual de políticas, estrategias y agendas entre los países intervinientes.

Cuando los países coinciden en sus enfoques económicos y políticos, los procesos y mecanismos de integración se vuelven más ágiles por varias razones, entre ellas, tener políticas económicas más alineadas para tomar decisiones conjuntas de manera más rápida y eficaz. Esto reduce la burocracia y los obstáculos administrativos que pueden surgir cuando hay diferencias significativas en las políticas económicas y comerciales. Además, las agendas divergentes se convierten en agendas convergentes y se simplifica la coordinación y la colaboración entre los diferentes mecanismos de integración regional. En lugar de trabajar en direcciones opuestas o enfocarse en objetivos individuales, los países pueden unir esfuerzos para abordar desafíos comunes y aprovechar las oportunidades compartidas.

Este enfoque también permite asignar mejor los recursos e implementar políticas y programas regionales de forma más eficiente. Al tener una visión más unificada y coordinada, los países evitan duplicar esfuerzos y maximizan el impacto de las iniciativas de integración, razón por la que es importante destacar cómo la convergencia puede impulsar la capacidad de resiliencia de la región frente a choques externos y crisis económicas. Cuando los países convergen en términos de desarrollo económico, tienden a tener economías más diversificadas y robustas que los hacen menos vulnerables a eventos adversos, como las fluctuaciones en los precios de las materias primas o las crisis financieras internacionales. Esta mayor resiliencia ayuda a mitigar los impactos negativos de tales choques y a acelerar la recuperación económica en momentos de dificultad.

Adicionalmente, la convergencia regional genera efectos positivos en la movilidad social y la igualdad de oportunidades en la región. Cuando los países reducen las brechas económicas y mejoran su desempeño en términos de desarrollo, también crean un entorno más propicio para la movilidad ascendente de sus ciudadanos. De esa forma, las personas de todos los estratos socioeconómicos tienen más oportuni-

dades de mejorar sus condiciones de vida y de alcanzar su máximo potencial, lo que redundaría en una sociedad más justa y cohesionada en el largo plazo.

Cornejo (2018) subraya la importancia de la convergencia regional en los acuerdos comerciales latinoamericanos y destaca que, a pesar de ser un objetivo compartido, su avance no ha sido fácil de lograr. A su vez, resalta la necesidad de promover esta convergencia para aumentar el comercio regional y facilitar la formación de cadenas de valor eficientes, lo que implicaría ampliar la oferta de insumos libres de aranceles sin perder su condición de originarios. Sin embargo, se identifican desafíos en la aplicación de las reglas de origen, y ello lleva a destacar la importancia de difundir y uniformizar el concepto de acumulación de origen. Este autor propone estrategias pragmáticas, como concentrarse en la liberación de bienes y negociar un reglamento de acumulación ampliada, sin dejar de señalar que el éxito requerirá coordinación y voluntad política entre los países involucrados para implementar los cambios necesarios.

Perspectivas de la convergencia regional en América Latina y el Caribe

La convergencia en el contexto de América Latina y el Caribe refiere al proceso mediante el cual las economías de la región tienden a acercarse entre sí en términos de su desarrollo económico, lo cual reduce las disparidades en ingresos, productividad y otros indicadores clave. Este fenómeno es de gran relevancia, ya que una mayor convergencia regional puede contribuir a una distribución más equitativa de la riqueza, a una mayor estabilidad económica y social, y a un mayor bienestar para la población en general. La convergencia de los acuerdos bilaterales es crucial para expandir los beneficios y facilitar el comercio dentro de los procesos de integración regional.

Cornejo (2018) menciona el surgimiento de la CAN y del Mercosur a partir de acuerdos bilaterales preexistentes, y la ampliación de las áreas de libre comercio entre sus miembros según modelos de integración influenciados por experiencias europeas. Señala que América Latina ha intentado crear durante más de medio siglo un área de libre comercio regional sin haberlo logrado hasta el momento. No obstante, existe un elevado número de acuerdos que han alcanzado una liberación muy amplia de sus aranceles y disponen de las medidas necesarias para su efectiva aplicación. Desde hace varias décadas, muchos países latinoamericanos se han propuesto profundizar sus acuerdos comerciales a través de la convergencia. Cabe mencionar como antecedentes el Tratado de la ALADI, de 1980, y otros acuerdos comerciales de menor alcance que prevén cláusulas especiales para la utilización de insumos de terceros países como si fueran *originarios*. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, ni la ALADI ni la mayoría de los restantes acuerdos han logrado aún implementar un área de libre comercio.

En el contexto actual, se produce un peculiar entrecruzamiento y una superposición de acuerdos que, por un lado, dividen el comercio preferencial y, por otro, liberan totalmente los mismos productos entre sus miembros; a pesar de esto, no existe una libre circulación en igualdad de condiciones. Actualizar los regímenes de origen es clave para implementar o promover de manera eficiente y competitiva los encadenamientos productivos regionales. Si bien es difícil definir un patrón de contenidos y la estructura de una eventual negociación de convergencia en el entramado comercial vigente en la región, existe consenso en cuanto a que los regímenes de origen deben formar parte de cualquier proyecto de integración y convergencia de los vínculos comerciales.

La ALADI ha previsto un mecanismo de convergencia desde sus orígenes aunque ha perdido peso en las negociaciones comerciales, y su incidencia institucional ha disminuido. Sin

embargo, las normas y los mecanismos relacionados con la convergencia en su tratado constitutivo podrían contribuir a avanzar en este objetivo y restablecer su importancia en la integración regional. Otras iniciativas más recientes, como los acuerdos entre México y Centroamérica, y la Alianza del Pacífico, también representan adelantos significativos en la ampliación de zonas de libre comercio y pueden servir de referencia para perseguir la convergencia en la región (Cornejo, 2018). Estos acuerdos buscan crear una zona de libre comercio más grande bajo un mismo marco normativo, eliminar los regímenes de origen diferentes y facilitar la circulación de insumos entre los países involucrados.

Rodríguez Benavides *et al.* (2015), llevaron a cabo una investigación centrada en analizar la hipótesis de convergencia del PIB per cápita en América Latina durante el período 1950-2010 utilizando distintos métodos lineales y no lineales de estimación de datos en panel. Los autores no detectaron convergencia en el grupo de países con niveles más altos de ingreso per cápita ni en la totalidad de los países de la región considerados en el análisis. En lugar de pruebas de convergencia, se encontró una inclinación a la divergencia, lo que cuestiona estudios anteriores que sugerían una convergencia condicional en la región. Por ello, es aún necesario resaltar los beneficios de la convergencia para impulsar su proceso.

Si bien la convergencia no está exenta de conflictos y dificultades, es fundamental encontrar puntos de encuentro. A pesar de que no es un concepto nuevo, existen muchas iniciativas regionales en este sentido, lo que destaca su relevancia en el ámbito regional e internacional como una política exterior común emergente para América Latina y el Caribe (SELA, 2023b). Los desafíos y las oportunidades relacionados con la convergencia regional son diversos y requieren un enfoque cuidadoso para abordarlos de manera efectiva. Uno de los principales retos que plantea es la heterogeneidad económica y social entre los países de la región, diversidad que puede

dificultar la convergencia, ya que cada Estado puede tener diferentes prioridades, capacidades y necesidades. Además, las divergencias en términos de políticas económicas, regulaciones y estructuras institucionales pueden generar fricciones y obstáculos en el proceso de integración. Otro desafío importante son los conflictos políticos, comerciales o territoriales entre algunos países que pueden entorpecer la cooperación y la coordinación, y, por ende, la convergencia regional.

Sin embargo, también existen oportunidades significativas, como las complementariedades económicas y comerciales entre los países, que pueden impulsar el crecimiento y el desarrollo en toda la región. Además, la convergencia puede fortalecer la capacidad de negociar y la influencia de la región en el ámbito internacional porque, al actuar de manera unificada, los países pueden tener una voz más fuerte en temas globales y defender mejor sus intereses comunes. Afrontar los desafíos de la convergencia regional para encontrar puntos de encuentro requiere un diálogo abierto y constructivo, así como un compromiso firme con los principios de cooperación y solidaridad regional.

El valor de la cooperación radica en su potencial para unir esfuerzos y recursos en pos de objetivos comunes y soluciones compartidas. En el contexto de la convergencia regional, es fundamental para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta el proceso de integración. La cooperación permite superar las barreras y obstáculos que pueden surgir en el camino hacia la convergencia regional, dado que, a partir del trabajo conjunto, los países pueden compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, lo que ayuda a identificar y aplicar soluciones efectivas a problemas comunes. También fomenta la coordinación y la cohesión entre los diferentes mecanismos de integración regional, que al unir esfuerzos pueden evitar duplicaciones innecesarias de trabajo y recursos, y promover una mayor coherencia en las políticas y estrategias adoptadas por los países miembros. Por

otro lado, la cooperación también fortalece la solidaridad y la cohesión regional al permitir desarrollar un sentido de pertenencia en los países que enfrentan desafíos en común, junto con el aumento del compromiso compartido con la región; esto, a su vez, puede contribuir a fortalecer la integración y la unidad regionales.

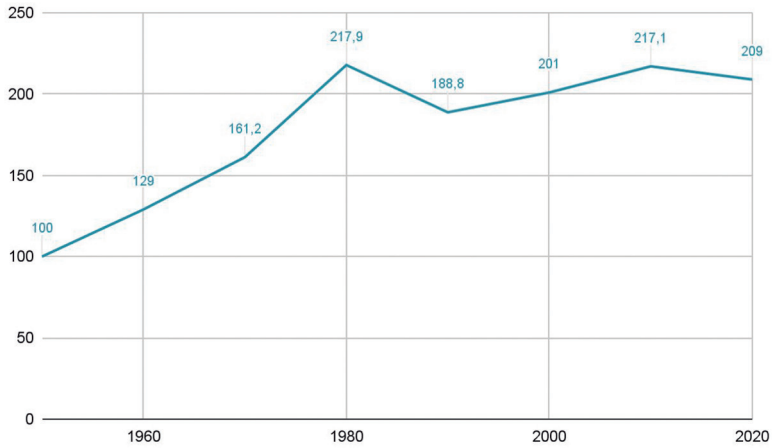
Aunque la convergencia no es un concepto nuevo, y existen muchas iniciativas regionales en este sentido, cada nuevo esfuerzo presenta sus propios desafíos y oportunidades. Es importante aprender de las experiencias pasadas y adaptar las estrategias a las realidades cambiantes de la región para lograr avances significativos hacia una mayor integración y un desarrollo sostenible.

Durante las últimas décadas, la región ha experimentado diversos patrones de convergencia y divergencia, especialmente en lo referido a la cuestión económica. Si bien algunos países han logrado reducir la brecha con respecto a las economías más avanzadas, otros han enfrentado dificultades para mantener un ritmo de crecimiento sostenido y han visto ampliarse la distancia que los separa de los líderes económicos mundiales. Estas divergencias pueden atribuirse a una serie de factores, incluidas las diferencias en las políticas económicas, la calidad de las instituciones, la dotación de recursos naturales y la capacidad de innovación.

Para medir la convergencia económica en la región, se utiliza una variedad de indicadores, entre los que se destacan el PIB per cápita, la productividad laboral, el nivel de inversión y la infraestructura, entre otros. Estos indicadores proporcionan una visión holística de la dinámica económica y permiten identificar tanto áreas de éxito como desafíos pendientes en el proceso de convergencia regional.

Figura 16

América Latina (18 países seleccionados): productividad laboral, 1950-2020 cada 10 años (Índice 1950 = 100)*

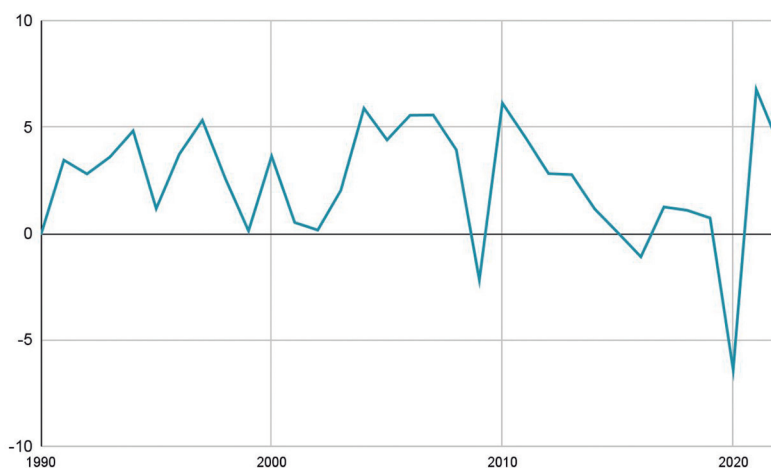


*Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).

Nota: adaptado de *Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. Diciembre de 2022. Número 27. Dinámica de la productividad laboral en América Latina* (p. 21), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la base de cifras oficiales y Conference Board.

Figura 17

Tasa de crecimiento del PIB total anual de América Latina y el Caribe a precios constantes (porcentaje), 1990-2022



Nota: adaptado de *Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas*, de CEPALSTAT, 2023, CEPAL (<https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html>).

Los países de América Latina y el Caribe están reconociendo cada vez más la importancia de trabajar juntos y coordinar sus esfuerzos en el ámbito internacional. En lugar de actuar de manera aislada o independiente, están buscando converger en sus agendas y prioridades para promover sus intereses comunes en el escenario global, perspectiva que refleja un cambio significativo en la forma en que abordan las relaciones internacionales. En vez de competir entre sí o adoptar enfoques unilaterales, aprecian el valor de la cooperación y la coordinación para el tratamiento de los desafíos globales y el logro de sus objetivos compartidos.

La convergencia como política exterior implica trabajar juntos en temas clave como el comercio exterior, la seguridad regional, el cambio climático, los derechos humanos y la gobernanza global. Al unir sus voces y recursos, los países de

América Latina y el Caribe pueden tener un mayor impacto en la toma de decisiones a nivel internacional y defender mejor sus intereses en un mundo cada vez más interconectado. Esto también ayuda a fortalecer la posición de la región en el escenario mundial al presentar una perspectiva unificada y coherente en asuntos de importancia global; aumenta su influencia en la formulación de políticas internacionales y en la resolución de conflictos, y mejora su capacidad para enfrentar desafíos comunes de manera efectiva.

El SELA emerge como un actor clave en la promoción de la convergencia regional en América Latina y el Caribe, que funge como plataforma facilitadora del diálogo y la coordinación entre los países miembros. A través de la organización de reuniones, conferencias y foros, propicia un espacio para que las naciones de la región discutan y compartan ideas sobre políticas y estrategias de convergencia en áreas de interés común. Con asistencia técnica y capacitación a los países miembros, ayuda a desarrollar e implementar políticas y programas de índole económica y social que abarcan desde el intercambio de mejores prácticas hasta la realización de estudios de investigación y el asesoramiento experto en áreas específicas relacionadas con la convergencia. En el ámbito económico, contribuye significativamente a promover la integración económica y comercial en la región mediante la armonización de políticas mercantiles, la reducción de barreras comerciales y el fomento de la cooperación en áreas como la infraestructura y la logística. Asimismo, impulsa la convergencia en políticas sociales, pues facilita el intercambio de experiencias y conocimientos sobre programas y políticas exitosos en áreas como la educación, la salud y la protección social.

Ahora bien, en relación con lo expuesto, es interesante poner el foco en el índice de integración de la Unión Económica Euroasiática (UEE), una herramienta que mide el grado de integración económica entre los Estados miembros de la UEE a partir de variables cuantitativas y cualitativas. Este índice se

basa en indicadores clave que reflejan diversos aspectos de la integración regional y el nivel de convergencia entre las distintas economías. El primer componente es la convergencia macroeconómica, que evalúa el grado de alineación entre las economías y las políticas de los Estados miembros. Este aspecto se centra en indicadores macroeconómicos clave como la inflación, el déficit fiscal y la deuda pública, y mide la estabilidad y la coherencia de las políticas económicas entre los países. El segundo componente se enfoca en la integración de los mercados comunes y analiza la integración real en los mercados de bienes, servicios, personas y capital. Este indicador muestra cómo los agentes económicos, tanto nacionales como extranjeros, aprovechan las oportunidades de la integración regional, como el libre comercio y el movimiento de trabajadores. Por último, el componente de integración institucional y órganos supranacionales evalúa las condiciones de integración relacionadas con las leyes e instituciones supranacionales, los organismos regulatorios y la puesta en marcha de políticas de integración. Esto abarca la armonización de normas y regulaciones, así como la coordinación de políticas.

Herramientas como este índice son importantes para monitorear y fomentar la integración regional, ya que, al proporcionar datos y análisis sobre estos aspectos clave, guían el diseño de políticas y estrategias destinadas a fortalecer la integración y promover el crecimiento y el desarrollo sostenible en la región euroasiática.

Figura 18*Tabla de indicadores de convergencia económica*

Indicador	Descripción
PIB per cápita	Mide el nivel de ingresos y desarrollo económico por persona en cada país, reflejando el bienestar general.
Productividad laboral	Evalúa la eficiencia de la fuerza laboral y su contribución al crecimiento económico en los países de la región.
Nivel de inversión	Indica el gasto en bienes de capital y proyectos de desarrollo, clave para el crecimiento sostenible.
Inflación	Mide el cambio porcentual en el nivel general de precios, afectando el poder adquisitivo y la estabilidad económica.
Déficit fiscal	Refleja la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno, importante para la sostenibilidad fiscal.
Deuda pública	Muestra el nivel de endeudamiento del gobierno en relación con el PIB, un indicador clave de sostenibilidad.
Deuda externa	Mide la proporción de deuda del país frente a acreedores extranjeros, un indicador de estabilidad macroeconómica.
Desigualdad de ingresos (coeficiente de Gini)	Indica la distribución del ingreso dentro de un país y su impacto en la equidad económica y social.
Acceso a servicios básicos (agua, electricidad, etc.)	Mide la disponibilidad de servicios esenciales, lo cual afecta la calidad de vida y el desarrollo sostenible.

Balanza comercial	Indica la diferencia entre exportaciones e importaciones, reflejando el equilibrio en el comercio internacional.
Regímenes de origen	Evalúa la compatibilidad de los requisitos de origen en acuerdos comerciales, clave para la integración regional.
Eficiencia institucional	Mide la calidad de las instituciones públicas y su capacidad para implementar políticas económicas efectivas.
Coordinación de políticas públicas	Evalúa la armonización de políticas económicas y sociales entre los países de la región.

Nota: elaboración propia.

6

La relevancia del multilateralismo en la integración regional

La integración regional en América Latina y el Caribe es un anhelo que ha estado presente desde las primeras declaraciones de independencia y que ha sido guiada con el objetivo de fortalecer la cooperación entre países vecinos y avanzar hacia un desarrollo conjunto y sostenible. En este contexto, el multilateralismo ha surgido como un enfoque fundamental para promoverla y abordar los desafíos comunes que enfrenta la región: desde los primeros intentos de integración regional, en el siglo XIX, hasta los esfuerzos más recientes, en el siglo XXI, América Latina y el Caribe ha experimentado una evolución significativa en su búsqueda de la cooperación multilateral. Desde la formación de la OEA, en 1948, hasta la creación de la CELAC, en 2011, la región cobija una variedad de instituciones y mecanismos para fomentar la colaboración en áreas como el comercio, la seguridad, el medio ambiente y los derechos humanos.

El multilateralismo presenta ventajas en diversos aspectos, entre los que se destaca el papel primordial de la integración regional como marco inclusivo y democrático para la toma de decisiones entre múltiples actores. Sumado a esto, permite a los países trabajar juntos para abordar desafíos transnacionales, como el cambio climático, la migración y el crimen organizado, que no pueden resolverse de manera efectiva a

nivel nacional. Además, promueve la paz y la estabilidad al fomentar el diálogo y la cooperación entre países, de modo que se reducen las tensiones y los conflictos que pueden surgir en la región.

A pesar de los beneficios evidentes del multilateralismo, la integración regional se enfrenta a una serie de desafíos en el siglo XXI, como la polarización política y la división ideológica, a nivel nacional y regional, que han obstaculizado los esfuerzos de colaboración. De igual manera, la fragmentación de los esfuerzos de integración y la competencia entre diferentes instituciones multilaterales han debilitado la cohesión regional. A su vez, la escasez de recursos y capacidades institucionales también ha limitado la efectividad de la cooperación multilateral en la región.

Más allá de estos obstáculos, el multilateralismo sigue siendo un instrumento indispensable para promover la integración regional y encarar los problemas comunes que enfrenta América Latina y el Caribe.

Instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe

El multilateralismo, como concepto clave en la política internacional contemporánea, ha sido objeto de diversas interpretaciones y enfoques. Weck y Marten (2020) definen el multilateralismo como la cooperación entre tres o más Estados en asuntos de política internacional y lo diferencian del unilateralismo y el bilateralismo. Además, distinguen tres niveles de multilateralismo: orientado a objetivos, orientado a valores y una forma más reciente que involucra la participación de actores no estatales, como empresas y organizaciones de la sociedad civil. Esta evolución del multilateralismo refleja una adaptación a las nuevas realidades globales, donde la colaboración entre diversos actores es esencial para abordar cuestiones complejas como el cambio climático o la pandemia de COVID-19.

No obstante su importancia, el multilateralismo enfrenta desafíos significativos: por un lado, la falta de obligatoriedad en los acuerdos multilaterales (Weck y Marten, 2020) hace que, a menudo, estos acuerdos dependan del compromiso voluntario de los países participantes y carezcan de mecanismos efectivos de control y sanciones para garantizar su cumplimiento. Por otro lado, la composición y los mecanismos tradicionales de los organismos multilaterales pueden no reflejar las realidades globales de hoy en día, lo que dificulta encontrar soluciones efectivas para los problemas urgentes.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, una serie de instituciones multilaterales desempeñan un papel crucial en el fomento de la cooperación regional y el desarrollo sostenible, entre las que se puede mencionar a la OEA; la Alianza del Pacífico; la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS); el SELA; la CAN; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); el SICA; la AEC; la CARICOM; la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA); la ALADI; la CELAC; el Proyecto Mesoamérica; la ALBA-TCP; el Mercosur; la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); la Comisión Interamericana de Cultura (CIC), entre otras.

Estas instituciones multilaterales tienen diversas funciones y objetivos que incluyen promover la cooperación entre países miembros en áreas de interés común; facilitar el diálogo político y la resolución pacífica de conflictos; fomentar el desarrollo económico y social sostenible; defender los principios de democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, y representar los intereses de la región en la arena internacional. En ese sentido, han llevado a cabo una variedad de iniciativas y proyectos multilaterales para impulsar la integración regional y abordar desafíos comunes, como programas de cooperación técnica y financiera para apoyar el desarrollo socioeconómico de países miembros; proyectos de infraestructura regional para mejorar la conectividad y fa-

cilitar el comercio entre países vecinos; iniciativas de protección ambiental y conservación de recursos naturales; campañas de promoción de los derechos humanos y la igualdad de género, y misiones de observación electoral para garantizar la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales en los países que las integran. Dichos ejemplos ilustran el compromiso de las instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe con la promoción del desarrollo sostenible y la cooperación regional.

Rasgos del multilateralismo en el siglo XXI

El multilateralismo en América Latina y el Caribe enfrenta una serie de desafíos en el siglo XXI que dificultan la integración regional y la cooperación efectiva entre los países miembros. Entre estos, la polarización política y la división ideológica han entorpecido la búsqueda de consensos y la adopción de políticas comunes en áreas clave como el comercio, la seguridad y el medio ambiente. Esta polarización ha debilitado la cohesión regional al disminuir la capacidad de las instituciones multilaterales para abordar los desafíos comunes de manera eficaz. Por ello, se debe evitar que los mecanismos de integración se politicen, ya que lo que realmente se necesita es trabajar en una integración que vaya más allá de los modelos políticos adoptados por los países. Si bien algunos de ellos buscan integrarse según las afiliaciones políticas de sus Gobiernos —de derecha a izquierda y pasando por todo el espectro del arco político—, este enfoque no conduce a una integración genuina, y es una tarea pendiente explorar nuevos tipos de integración que superen las divisiones políticas e ideológicas.

Un aspecto importante por tener en cuenta es que la proliferación de iniciativas de integración regional puede llevar a fragmentar los esfuerzos de cooperación en América Latina y el Caribe. La existencia de una pluralidad de instituciones

multilaterales podría generar una competencia de los organismos entre sí, además de una superposición de objetivos y falta de coordinación. Una fragmentación tal dificultaría el afianzamiento de una agenda regional unificada y limitaría el alcance y la eficacia de la cooperación multilateral. Por ello, es importante el trabajo de convergencia en las agendas de estos organismos y en la alineación de objetivos y caminos.

La creciente interdependencia económica y política entre países, impulsada por la globalización, presenta retos adicionales para el multilateralismo en América Latina y el Caribe. Tal situación se evidencia con los cambios en el orden mundial derivados del ascenso de potencias emergentes y la evolución de las relaciones internacionales en términos de la dinámica de la cooperación regional y el papel de las instituciones multilaterales en la región. Adaptarse a estos cambios y mantener la relevancia en un entorno globalizado es crucial para el multilateralismo en el siglo XXI.

Respecto de las cuestiones socioeconómicas, las desigualdades persistentes en la región representan un desafío significativo para el multilateralismo. Entre ellas, se encuentran la falta de inclusión social, la pobreza, la marginalización y la falta de acceso a servicios básicos, problemas urgentes que requieren una atención prioritaria por parte de las instituciones multilaterales. Vencer estas desigualdades y promover un desarrollo equitativo es fundamental para fortalecer la cohesión social y la estabilidad.

El estallido de crisis sanitarias, como lo ha sido la pandemia de COVID-19, ha puesto de manifiesto la necesidad de una cooperación multilateral efectiva para abordar emergencias globales en América Latina y el Caribe. Las instituciones multilaterales deben estar preparadas para responder de manera coordinada y eficiente a las crisis sanitarias, ambientales y humanitarias, y asegurar una distribución equitativa de recursos y una respuesta integral que proteja a los más vulnerables de la región.

El multilateralismo en la región también enfrenta otros obstáculos importantes, como la corrupción, la inestabilidad política, la violencia y el crimen organizado. Asimismo, existen actores externos con una creciente influencia que pueden socavar la confianza en las instituciones multilaterales y dificultar la construcción de consensos y el trazado de políticas efectivas para abordar los desafíos regionales.

Figura 19

Desafíos, obstáculos y propuestas del multilateralismo en el siglo XXI

Desafíos y obstáculos del multilateralismo en América Latina y el Caribe	Propuestas para afrontarlos
Polarización política y división ideológica.	Promover un diálogo inclusivo, constructivo y desideologizado entre los países miembros para encontrar consensos y adoptar políticas comunes.
Fragmentación de los esfuerzos de cooperación.	Trabajar en la convergencia de las agendas de las instituciones multilaterales y alinear objetivos para evitar la duplicidad de funciones.
Interdependencia económica y política impulsada por la globalización.	Adaptarse a los cambios globales y mantener la relevancia del multilateralismo en un entorno globalizado mediante la flexibilidad y la innovación en las estrategias de cooperación regional.
Persistentes desigualdades socioeconómicas.	Priorizar la atención a las desigualdades sociales y económicas mediante políticas inclusivas que promuevan la igualdad de acceso a servicios básicos, la reducción de la pobreza y la marginalización.

Crisis sanitarias y emergencias globales.	Preparar a las instituciones multilaterales para responder de manera coordinada y eficiente ante crisis sanitarias, ambientales y humanitarias, asegurando una distribución equitativa de recursos y una respuesta integral.
Corrupción, inestabilidad política e inseguridad.	Implementar medidas efectivas de lucha contra la corrupción, fortalecer las instituciones democráticas y promover la seguridad ciudadana para garantizar un entorno propicio para la cooperación multilateral.
Influencia creciente de actores externos.	Reforzar la cooperación y la solidaridad entre los países miembros para contrarrestar la influencia de actores externos, así como promover la autodeterminación y la defensa de los intereses regionales frente a presiones externas.

Nota: elaboración propia.

La crisis de la cooperación multilateral y las perspectivas futuras

Aunque los acuerdos de integración recientes han puesto un énfasis renovado en la política, lo social y las asimetrías, también enfrentan desafíos y tensiones, como las diferencias de enfoque y objetivos entre los distintos acuerdos y países miembros, además de tensiones geopolíticas y económicas en la región. Ejemplo de ello es la fragilidad durante la pandemia de COVID-19 y la posterior reactivación de tipos de multilateralismo (González Palacios, 2022; Parthenay, 2022). También se destaca la emergencia de la multipolaridad, con la aparición de nuevos polos de poder como los BRICS (actualmente compuesto por Arabia Saudita, Brasil, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, India, Irán, Rusia y Sudáfrica) y el ascenso de China, lo que plantea desafíos al sistema multilateral dominante (Merino *et al.*, 2021; González

Palacios, 2022). Este panorama dinámico y cambiante refleja la complejidad de las relaciones multilaterales tanto a nivel global como regional.

En ese sentido, algunos autores como Van Klaveren (2020) sostienen que la crisis global del multilateralismo ha erosionado las instituciones regionales y ha generado una creciente desconfianza hacia esta forma de cooperación, alimentada por los ciclos políticos internos y la percepción de que el derecho internacional responde a intereses transnacionales. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la región mantiene su tradición multilateralista y continúa siendo una zona de paz internacional, lo que refleja la resistencia de su orden normativo y práctica regional ante los embates políticos. No obstante, son necesarias las reformas en las instituciones multilaterales y las acciones conjuntas entre los países de la región para abordar los desafíos comunes. En este contexto, el multilateralismo latinoamericano estará condicionado por las tendencias globales, mientras que el diálogo y la cooperación entre regiones emergen como elementos cruciales para fortalecer la institucionalidad internacional y enfrentar los desafíos actuales (Van Klaveren, 2020).

Partiendo de este escenario, el futuro del multilateralismo en América Latina y el Caribe depende en gran medida de la capacidad de los países miembros y las instituciones para adaptarse a los desafíos emergentes y aprovechar las oportunidades que se presentan. Por ello, es importante considerar varias estrategias y enfoques para fortalecer la cooperación regional, explorar nuevas formas de colaboración y promover la participación de diversos actores.

Una estrategia clave para afianzar el multilateralismo en la región es reafirmar el compromiso político de los países miembros con los principios y objetivos de las instituciones multilaterales existentes. Esto implica promover un diálogo constructivo y una mayor cooperación en áreas prioritarias

como el comercio, la seguridad, el medio ambiente y el desarrollo social, además de mejorar la eficacia y la transparencia de las instituciones multilaterales, para fortalecer sus capacidades institucionales y asegurar una distribución equitativa de recursos.

Nuevas formas de cooperación multilateral pueden ayudar a abordar desafíos emergentes y promover un desarrollo más inclusivo y sostenible en la región; estas deben comprender alianzas público-privadas para impulsar la innovación y el crecimiento económico, así como la cooperación sur-sur a fin de compartir conocimientos y mejores prácticas entre países en desarrollo. Además, el uso de herramientas digitales y tecnologías emergentes puede facilitar la colaboración transfronteriza y mejorar la eficiencia de los programas y proyectos multilaterales.

El fortalecimiento del multilateralismo en la región requiere la participación coordinada de diversos actores, incluidos los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Los Gobiernos tienen un papel fundamental en la formulación de políticas y la toma de decisiones a nivel regional e internacional, mientras que la función de la sociedad civil es promover la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Por su parte, el sector privado contribuye al desarrollo económico y social sostenible a través de inversiones responsables y la creación de empleo.

Al promover la cooperación multilateral en la región, es crucial tener en cuenta el desarrollo sostenible y la equidad, lo que implica adoptar un enfoque integrado que aborde sus dimensiones económicas, sociales y ambientales, y asegurar que ninguna comunidad o grupo quede rezagado. También se debe garantizar la igualdad de acceso a los beneficios de la cooperación multilateral y promover la participación equitativa de todos los actores, especialmente aquellos históricamente marginados o excluidos.

Otra de las áreas fértiles para expandir la cooperación multilateral es el fortalecimiento de la integración económica; esto se consigue al armonizar políticas comerciales, eliminar barreras no arancelarias y promover la inversión extranjera directa. Además, la cooperación en infraestructura regional, como carreteras, puertos y energía, puede mejorar la conectividad y facilitar el comercio entre los países.

En un mundo cada vez más interconectado, la cooperación multilateral es esencial para abordar las amenazas a la paz y la seguridad regionales; por tanto, se necesita fortalecer los mecanismos de prevención y resolución de conflictos, así como la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Fomentar la confianza y construir capacidades en materia de seguridad también contribuye a la estabilidad y al desarrollo sostenible en la región.

Por su parte, el cambio climático representa otro desafío urgente que requiere una respuesta coordinada a nivel regional e internacional. La cooperación multilateral puede desempeñar una tarea clave para mitigar los efectos del cambio climático e impulsar la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe al incluir la implementación de políticas de energía renovable, la protección de los ecosistemas vulnerables y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles.

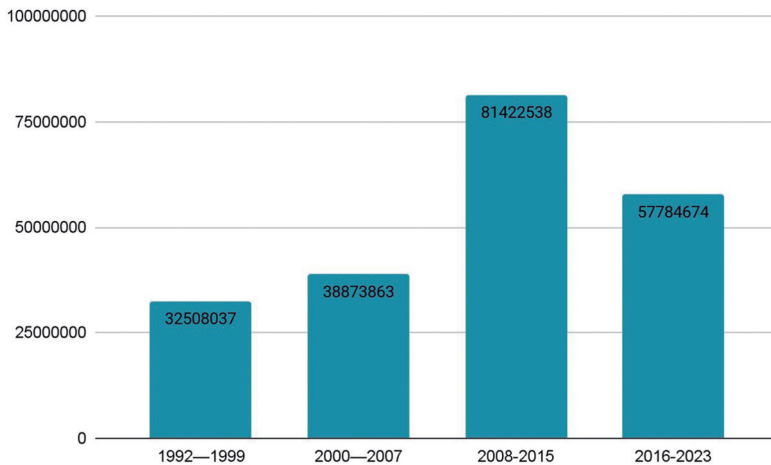
En relación con estos desafíos, la innovación y la tecnología tienen el potencial de impulsar el desarrollo económico y social en la región. La cooperación multilateral fomenta la transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos y la colaboración en investigación y desarrollo; ello contribuye a mejorar la competitividad en el ámbito global y a abordar desafíos emergentes como la transformación digital y la economía del conocimiento.

Ser capaz de responder ante crisis y emergencias (como pandemias, desastres naturales y crisis humanitarias) es fundamental para la estabilidad y la seguridad en la región.

La cooperación multilateral puede fortalecer la resiliencia de los países de América Latina y el Caribe mediante esfuerzos coordinados de ayuda humanitaria, sistemas de alerta temprana y medidas de preparación y mitigación de riesgos. En ese sentido, el Acuerdo para el Establecimiento del Fondo de Adaptación Climática y la Respuesta Integral a Desastres de la CELAC (FACRID/CELAC), por ejemplo, provee fondos y asistencia técnica para enfrentar los retos que atraviesan los países de la región. Sin embargo, se requiere asignar más recursos para asegurar que el fondo pueda satisfacer de manera efectiva las crecientes necesidades de adaptación al cambio climático y gestión de desastres.

Figura 20

Cantidad de personas directamente afectadas por eventos extremos y desastres en América Latina y el Caribe, 1992-2023



Nota: Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2023 (p. 83), de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2024, CEPAL.

El futuro de la cooperación multilateral dependerá de la capacidad de los países miembros y las instituciones para abordar los desafíos emergentes y aprovechar las oportunidades. Al

centrarse en áreas clave como la integración económica, la paz y la seguridad, la sostenibilidad ambiental, la innovación y la resiliencia ante crisis, la cooperación multilateral puede desempeñar un papel crucial para un futuro más próspero y seguro en la región.

El rol de la educación y la cultura en el fortalecimiento del multilateralismo en América Latina y el Caribe

La educación y la cultura desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y fortalecimiento de diversas áreas y cuestiones, y el multilateralismo en América Latina y el Caribe no es una excepción. A través de programas educativos y culturales que ayuden a promover la comprensión mutua, el diálogo intercultural y la construcción de una identidad regional compartida, los países pueden fomentar la cooperación y el intercambio entre sí; ello contribuye a consolidar la integración regional y a desarrollar relaciones más sólidas y armoniosas. La promoción de la educación intercultural es entonces esencial para superar las barreras lingüísticas, culturales y sociales que pueden obstaculizar la colaboración entre países. Al fomentar el aprendizaje de idiomas extranjeros y la comprensión de las diferentes tradiciones y costumbres de la región, se facilita la comunicación y se promueve el respeto por la diversidad cultural.

El intercambio cultural a través de actividades como festivales, exposiciones y espectáculos artísticos puede ayudar a construir puentes entre las naciones y a fortalecer los lazos humanos, ya que estas iniciativas no solo impulsan el entendimiento mutuo, sino que también generan un sentido de pertenencia e identidad compartida entre los pueblos de la región. Por otro lado, la educación y la cultura pueden servir como herramientas para abordar temas sensibles y superar divisiones políticas e ideológicas. Al promover valores como la paz, la tolerancia y el respeto mutuo, se contribuye a la

construcción de una región más cohesionada y solidaria, donde las diferencias se ven como oportunidades para el enriquecimiento mutuo en lugar de obstáculos insalvables.

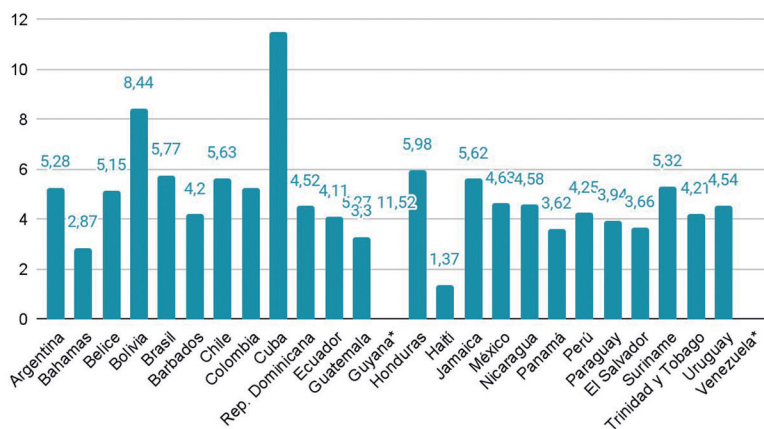
En el contexto de América Latina y el Caribe, donde la diversidad étnica, lingüística y cultural es una característica distintiva, la inclusión y la valoración de la diversidad son fundamentales para fortalecer el multilateralismo. La educación y la cultura desempeñan un papel crucial en este sentido al ofrecer oportunidades equitativas de aprendizaje y al celebrar la riqueza de las diferentes expresiones culturales presentes en la región.

Es importante destacar que la inclusión no se limita únicamente al acceso a la educación y la participación en actividades culturales, sino que también implica el reconocimiento y la valoración de las múltiples identidades y perspectivas presentes en la región. Al promover un enfoque inclusivo en la educación y la cultura, se fomenta un sentido de pertenencia y respeto por todas las comunidades y grupos étnicos, lingüísticos y culturales, lo que contribuye a construir sociedades más cohesionadas y justas. De esta forma es que nuestra cultura en común tiende puentes hacia una mayor y mejor integración.

Figura 21

Gasto público en educación (% del PIB) en países miembros del SELA, 2020

*Sin datos disponibles



Nota: adaptado de *Gasto público en educación, total (% del PIB)*, de Banco Mundial, 2024, (<https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>)

Vías digitales: integración tecnológica y digital en América Latina y el Caribe

Desde hace algunas décadas, el mundo vive en lo que Castells (2009) llama *la era de la información*, donde la conectividad global y la tecnología digital se han convertido en un motor clave para el desarrollo económico y social en todas partes del globo. En este contexto, en América Latina y el Caribe la integración tecnológica está emergiendo como un elemento fundamental para fortalecer la cooperación regional y promover la inclusión digital.

Así, se ha experimentado un crecimiento significativo en la adopción de tecnología durante este período, con un aumento en la penetración de internet, la expansión de la telefonía móvil y el empleo de tecnologías emergentes en varios sectores económicos (Becerra, 2023). Sin embargo, a pesar de los avances que muestran algunos estudios, también persisten desafíos importantes en términos de acceso equitativo a la tecnología y la conectividad, especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas.

La integración tecnológica no solo tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la competitividad de las economías latinoamericanas y caribeñas, sino que también puede fomentar la colaboración entre los países de la región y fortalecer sus lazos comerciales y políticos. Además, la digitalización ofrece oportunidades para desarrollar nuevos modelos de negocio

y crear ecosistemas empresariales innovadores que pueden impulsar el crecimiento económico a largo plazo.

Tejido digital y conexión *tech* en la región

La tecnología y la conectividad son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe, donde la infraestructura tecnológica varía considerablemente, desde áreas con alta penetración de internet y amplia disponibilidad de banda ancha hasta aquellas con acceso limitado a servicios de conectividad. La injerencia de internet ha experimentado un crecimiento notable en las últimas décadas, con un aumento en el número de usuarios y una mayor adopción de servicios en línea, aunque aún persisten desafíos significativos en términos de acceso equitativo y calidad de la conexión, especialmente en áreas rurales y en locaciones de bajos ingresos.

En relación con esos desafíos, la convivencia de diversas formas de comunicación ha dado lugar a lo que se conoce como *convergencia mediática* —concepto que considera la convergencia en un sentido diferente del que lo hace el proceso de integración regional—. En el área de comunicación y de análisis de medios, este fenómeno implica la coexistencia de medios tradicionales, como la televisión y la radio, con plataformas digitales y redes de comunicación en línea. Según Castells (2009), esta convergencia ha generado una cultura global impulsada por empresas de comunicación que implementan estrategias de concentración de propiedades y alianzas empresariales; además, no solo se limita a los medios de comunicación, sino que también implica un cambio cultural significativo. Por su parte, Jenkins (2006) aporta que el fenómeno entraña un flujo de contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, así como la cooperación entre diferentes industrias del rubro, cambio cultural que se manifiesta en la manera en que los

consumidores interactúan con los medios y cómo perciben y consumen información y entretenimiento.

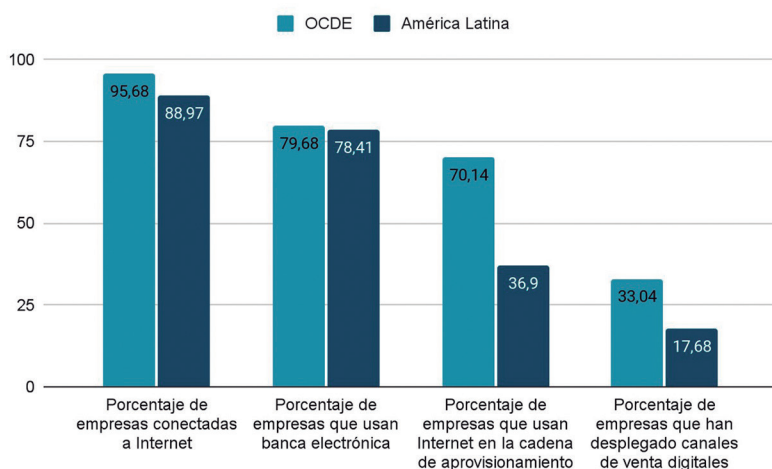
Sin embargo, este proceso de convergencia también ha traído consigo desafíos, especialmente en términos de concentración de la propiedad de los medios y la mercantilización de la cultura. De acuerdo con Becerra y Mastrini (2017), la convergencia mediática ha contribuido a la consolidación de monopolios en la industria de los medios en América Latina y el Caribe, lo que ha llevado a la unificación de la línea editorial y la concentración geográfica de los medios de comunicación.

La disponibilidad de banda ancha es otro aspecto relevante de la infraestructura tecnológica. Si bien se han realizado avances en su expansión en el continente —gracias a lo cual ha habido un aumento significativo en el uso de celulares los últimos años (Becerra, 2023)—, aún existen disparidades en términos de acceso y calidad del servicio. La mayoría de los países de la región tienen una cobertura relativamente amplia; no obstante, las áreas urbanas suelen tener una mejor cobertura de banda ancha en comparación con las zonas rurales, donde la infraestructura de telecomunicaciones puede no solo ser limitada o inexistente, sino también más costosa. Por esta razón, es necesario mejorar la disponibilidad de banda ancha en aquellos lugares para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios en línea y oportunidades económicas.

Además de la infraestructura básica de conectividad, la región está experimentando un crecimiento significativo en la adopción de tecnologías emergentes. La inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la computación en la nube y la tecnología *blockchain* son solo algunos ejemplos de tecnologías que están impactando diversos sectores y ofrecen oportunidades para mejorar la eficiencia, la productividad y la innovación en áreas como la salud, la educación, la agricultura y la industria manufacturera.

Figura 22

OCDE y América Latina, digitalización de procesos productivos, 2018 (en porcentajes)



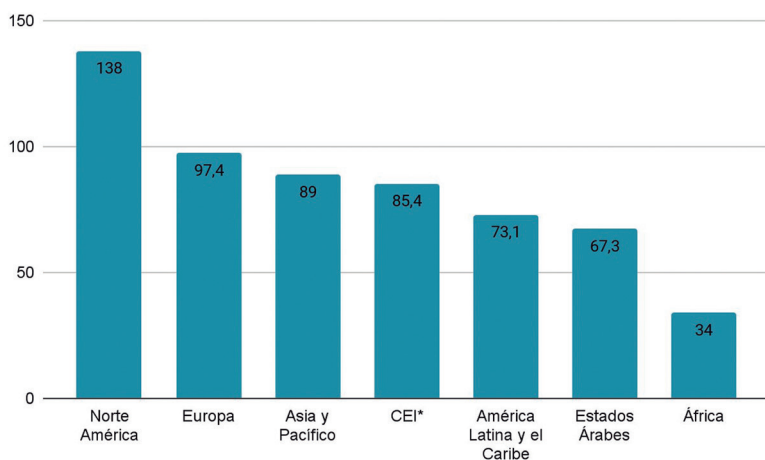
Nota: Datos y hechos sobre la transformación digital (p. 21), de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021, Documentos de proyectos (LC/TS.2021/20), CEPAL.

Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, aún existen brechas digitales significativas en la región. Además de las existentes entre áreas urbanas y rurales, es importante destacar la brecha de género en el acceso y uso de la tecnología (Vaca Trigo y Valenzuela, 2022). Las mujeres en América Latina y el Caribe tienen menos acceso a internet que los hombres y están subrepresentadas en los campos tecnológico y científico, disparidad que no solo limita sus oportunidades económicas, sino que también obstaculiza el desarrollo y la innovación. Por lo tanto, es fundamental implementar políticas y programas que promuevan la inclusión digital de las mujeres y aborden las barreras de género en el acceso a la tecnología. También es importante centrarse en las brechas digitales entre áreas urbanas y rurales, y abordar las diferencias en cuanto al acceso y

uso de la tecnología entre distintos grupos de edad, ya que los jóvenes suelen tener un mayor dominio, mientras que las personas mayores suelen enfrentar dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas digitales.

Figura 23

Regiones del mundo, penetración de banda ancha móvil, 2019

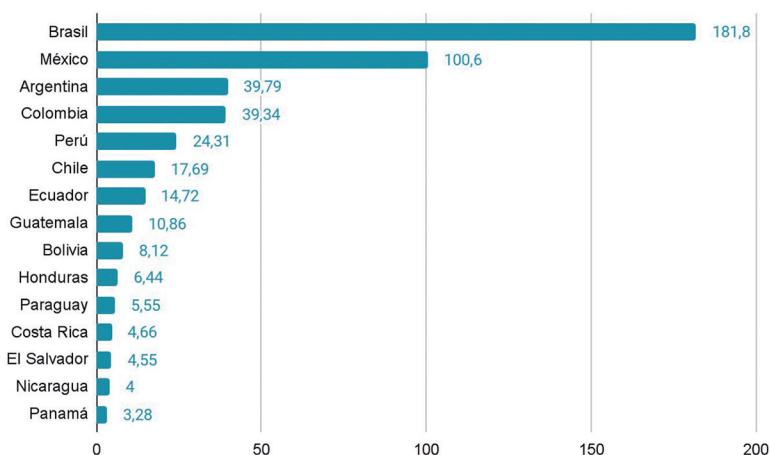


*Comunidad de Estados Independientes.

Nota: Datos y hechos sobre la transformación digital (p. 12), de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2021, *Documentos de proyectos* (LC/TS.2021/20), CEPAL.

Figura 24

Número de usuarios de internet por país en América Latina en enero de 2023 (en millones)



Nota: Número de usuarios de internet por país en América Latina en enero de 2023 (en millones), por Statista, 2024, (<https://es.statista.com/estadisticas/1073677/usuarios-internet-pais-america-latina/>).

Además de los desafíos de infraestructura y acceso, la calidad de la educación y la capacitación en tecnología también juegan un papel crucial en la reducción de las brechas digitales en América Latina y el Caribe. Debe promoverse la alfabetización digital y brindar oportunidades de formación en habilidades tecnológicas, tanto en el ámbito formal como en el informal, para garantizar que todos los ciudadanos puedan aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas por la tecnología. Esto incluye programas de educación digital en escuelas y universidades, así como iniciativas de capacitación laboral para adultos en habilidades digitales relevantes para el mercado laboral actual.

Otro aspecto importante que considerar es la regulación y las políticas públicas en materia de tecnología y conectividad

en la región. La creación de un entorno regulatorio favorable ayuda a fomentar la inversión en infraestructura tecnológica y a promover la competencia en el mercado de telecomunicaciones; también es necesario implementar políticas que incentiven la innovación y la adopción de tecnologías emergentes, al tiempo que protejan la privacidad y la seguridad de los ciudadanos en línea.

Por otro lado, se debe considerar el impacto ambiental de la integración tecnológica y digital en la región. Si bien la tecnología es un motor de crecimiento económico y de desarrollo, también conlleva desafíos ambientales, como el aumento del consumo de energía y la generación de residuos electrónicos. Por ello, es imperioso adoptar enfoques sostenibles en el desarrollo y uso de tecnologías digitales a fin de impulsar la eficiencia energética, la gestión adecuada de residuos y la utilización de energías renovables. Por otro lado, la tecnología también puede mitigar el cambio climático o ayudar a adaptarse a él mediante la monitorización ambiental, la gestión de recursos naturales y la promoción de prácticas sostenibles en sectores como la agricultura y la energía.

Finalmente, es importante destacar el rol de la cooperación y la colaboración entre los países de América Latina y el Caribe en el impulso de la tecnología y la conectividad. La integración regional reduce las brechas digitales al facilitar la colaboración en proyectos de infraestructura tecnológica compartida y la armonización de políticas y regulaciones en materia de tecnología y telecomunicaciones. A su vez, la cooperación promueve el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el desarrollo y la implementación de iniciativas digitales, lo que beneficia a todos los países de la región.

La tecnología como motor de integración y desarrollo en América Latina y el Caribe

En esta era de la información, la tecnología se convierte en un catalizador esencial para la integración regional en América Latina y el Caribe. En el contexto actual, además de

preguntarse de qué manera la tecnología y la digitalización impulsan el comercio y la inversión en la región, también es importante identificar si tienen un impacto significativo en diversos sectores productivos. El siglo XXI ha introducido a la región en un escenario de desafíos complejos y dinámicos, donde los avances tecnológicos, el crecimiento demográfico y el cambio climático se entrelazan con las nuevas formas de trabajo y las demandas de soberanía tecnológica. Se ha presenciado un período inusual de convergencia entre Gobiernos y un cambio en las prioridades geopolíticas que favorecieron el impulso hacia la soberanía tecnológica (Ceballos *et al.*, 2020). A pesar de ello, aún persisten desafíos significativos, por ejemplo, la concentración oligopólica en sectores clave como la infraestructura y la información, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la región en un mundo cada vez más interconectado. Es crucial que los países latinoamericanos y caribeños prioricen la educación tecnológica, reten gan talento especializado y establezcan políticas coordinadas de patentes y propiedad intelectual para avanzar hacia la autonomía digital, en la cual el Estado cree un entorno favorable para este fin.

En ese sentido, la tecnología y la digitalización pueden eliminar algunas barreras comerciales para la integración regional. A través de la automatización de procesos y la implementación de sistemas digitales de gestión, es posible simplificar los trámites aduaneros y armonizar estándares y regulaciones entre países; así se facilita el intercambio comercial dentro de la región y más allá de sus fronteras. Además, la digitalización agiliza las transacciones internacionales al proporcionar plataformas seguras y eficientes para el comercio electrónico y los intercambios financieros; estas no solo promueven el comercio entre los países de América Latina y el Caribe, sino que también fortalecen los lazos comerciales con socios internacionales, pues fomentan un ambiente propicio para la inversión extranjera.

En cuanto al impacto en sectores productivos específicos, la digitalización está revolucionando la forma en que se llevan a cabo actividades en diversos ámbitos. La agricultura de precisión y los sistemas de información geográfica (SIG), por ejemplo, están mejorando la eficiencia y la sostenibilidad de la producción agrícola, mientras que, en la manufactura, la automatización y la personalización están impulsando la productividad y la competitividad de la industria.

La integración tecnológica también fomenta el desarrollo de ecosistemas empresariales digitales en la región que promueven la colaboración entre empresas locales y atraen inversión extranjera, componente que influye en el crecimiento económico de la zona. En lo que respecta a la competitividad de las empresas en la región, aquellas que adoptan tecnologías digitales mejoran su eficiencia operativa, su capacidad de respuesta al mercado y su innovación, lo que les permite competir de manera más efectiva a nivel local e internacional. Ello es posible porque la digitalización impulsa la integración de las cadenas de valor regionales, lo que facilita que empresas de diferentes países colaboren entre sí en áreas como la producción, la distribución y la logística. En este sentido, la transformación digital ha emergido como un catalizador clave para mejorar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana en la gestión gubernamental (Campos Ríos, 2023), y resulta clave reconocer el papel central de la información en la toma de decisiones informadas y en la creación de valor público. La gestión eficiente de datos se erige como un pilar esencial para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la era digital, además de destacar la necesidad de promover la colaboración entre el sector público y el privado como un medio para estimular la innovación y la competitividad en el ámbito de la ciberdiplomacia (Campos Ríos, 2023).

Entre otras áreas o sectores, resalta el de servicios financieros, ya que la digitalización está democratizando su acceso a través de la expansión de la banca móvil, los pagos electró-

nicos y el crecimiento de las *fintech*. Esta transformación no solo beneficia a los consumidores al ofrecerles mayor acceso y conveniencia, sino que también impulsa la inclusión financiera en la región. Mientras tanto, en el turismo, la tecnología está cambiando la forma en que se planifican y se llevan a cabo los viajes, desde la reserva de alojamientos hasta la gestión de paseos y excursiones: las plataformas digitales y las aplicaciones móviles facilitan y personalizan las experiencias turísticas, al tiempo que promueven prácticas sostenibles y responsables.

Además de impulsar el comercio y la inversión, la tecnología y la digitalización también reducen las disparidades económicas y sociales entre los países de América Latina y el Caribe. A partir del acceso a herramientas y recursos digitales, se pueden crear oportunidades de negocio y empleo en comunidades marginadas y áreas rurales; esto contribuye a la reducción de la pobreza y la desigualdad en la región, sumado a que la tecnología puede mejorar la prestación de servicios públicos, como la educación y la salud, ya que permite el acceso a la información y los recursos en línea.

En el ámbito gubernamental, la tecnología y la digitalización mejoran la eficiencia y la transparencia en la Administración pública, lo que facilita la prestación de servicios y la toma de decisiones basada en datos. La implementación de sistemas de gobierno electrónico y la digitalización de trámites administrativos reducen la burocracia y la corrupción; así, se promueve un entorno empresarial más favorable para atraer inversión tanto nacional como extranjera.

Por último, es importante destacar el papel de la colaboración regional en el impulso hacia el desarrollo de la tecnología y la digitalización en América Latina y el Caribe. Esta cooperación redundará en la armonización de políticas y regulaciones, la transferencia de conocimientos y tecnología, y la inversión en proyectos de infraestructura digital a nivel regional, que,

sumado a la colaboración entre el sector público y privado, es fundamental para impulsar la innovación y adoptar tecnologías emergentes en la zona; de esta manera, es posible crear un ecosistema digital robusto y dinámico que beneficie a todos los países involucrados.

De acuerdo con Campos Ríos (2023), existe la posibilidad de adaptar modelos exitosos de Gobiernos de otras regiones al contexto latinoamericano, lo cual implica asumir estrategias que fortalezcan la infraestructura tecnológica, fomenten la educación en ciencias de la computación y respalden políticas de innovación para estimular el surgimiento de *startups* y tecnoemprendimientos en la región. Asimismo, se vislumbra una oportunidad significativa en el establecimiento de alianzas estratégicas entre Gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones civiles para desarrollar capacidades avanzadas en áreas cruciales como la IA y la seguridad cibernética (Campos Ríos, 2023).

El impacto social de la integración tecnológica

La integración tecnológica en América Latina y el Caribe no solo tiene repercusiones económicas, sino también un impacto significativo en el ámbito social, que va desde efectos en el empleo hasta cómo los servicios públicos digitales están transformando la vida de los ciudadanos en la región.

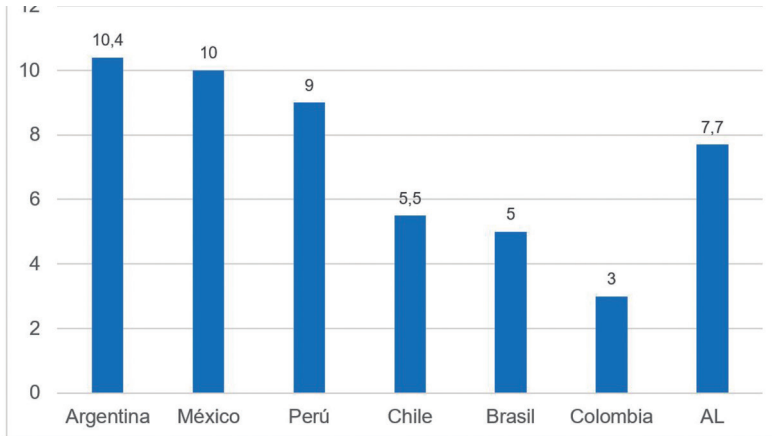
La inclusión digital es un aspecto crucial para garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso a las oportunidades que ofrece la tecnología y, a pesar de los avances tecnológicos, América Latina y el Caribe sigue enfrentando desafíos significativos en términos de brechas digitales. Según Becerra (2023), estas disparidades persisten pese a los esfuerzos realizados para promover la inclusión digital en la región, ya que las brechas digitales no se limitan únicamente al acceso a internet, sino que abarcan una serie de dimensiones que

incluyen la calidad de la conectividad y la capacidad de aprovechamiento de los recursos digitales. Dado que son diferencias multifacéticas y requieren enfoques integrales para su abordaje efectivo, deben implementarse iniciativas que cierren la brecha digital y susciten la inclusión en esta esfera a través de la ampliación del acceso a internet, la capacitación en habilidades digitales y la provisión de dispositivos tecnológicos asequibles. Si bien ha habido avances significativos en el acceso a la conectividad en la región, aún queda mucho por hacer para cerrar las grietas existentes (Becerra, 2023).

La integración tecnológica también tiene un impacto profundo en el empleo en la región. Por un lado, la digitalización está creando nuevos empleos en sectores relacionados con la tecnología, como la programación, el análisis de datos y la ciberseguridad; por otro lado, está transformando los trabajos existentes a partir de la automatización de tareas repetitivas, y ello aumenta la demanda de habilidades digitales en todos los sectores de la economía. Es fundamental que los Gobiernos y las empresas inviertan en programas de formación y reconversión laboral a fin de asegurar que los trabajadores estén preparados para los desafíos y las oportunidades del mercado laboral digital.

Figura 25

Cambio en el gasto en tecnología de la información (TI) en países seleccionados de América Latina en 2021



Nota: Internet de las cosas: La tecnología como aliada de la sostenibilidad (p. 21), de Gallego Gómez, 2022, EAE Business School.

Los servicios públicos digitales desempeñan un papel cada vez más importante en la mejora de la eficiencia y la accesibilidad de los servicios gubernamentales en la región. Implementar plataformas en línea para la educación, la salud y la Administración pública mejora la calidad de vida de los ciudadanos al ofrecer acceso a servicios de manera más rápida, conveniente y transparente; ello no solo optimiza la experiencia del usuario, sino que también aumenta la eficiencia del Gobierno al reducir la burocracia y los costos administrativos asociados con la prestación de servicios tradicionales.

Además de cerrar la brecha digital y promover la inclusión, la tecnología estimula la intervención ciudadana y la democracia en la región. Las herramientas digitales, como las redes sociales y las plataformas de participación en línea, facilitan la comunicación entre los ciudadanos y los Gobiernos, lo que

permite una mayor transparencia, rendición de cuentas y colaboración en la toma de decisiones. Ahora bien, para abordar estos desafíos, las políticas públicas son las herramientas irremplazables que permiten reducir las brechas digitales e impulsar la inclusión digital. Becerra (2023) enfatiza la importancia de implementar políticas orientadas a garantizar una cobertura equitativa y asequible de los servicios de conectividad, así como a mejorar el acceso a la tecnología y desarrollar habilidades digitales en la población. Para ello se debe evaluar la eficacia de los programas implementados y ajustar las políticas públicas a fin de adaptarse a las cambiantes necesidades y desafíos en este ámbito.

Asimismo, es esencial afrontar los desafíos relacionados con la seguridad y la privacidad de los datos en el contexto de la integración tecnológica porque, a medida que más aspectos de la vida cotidiana se vuelven digitales, aumenta la necesidad de proteger la información personal y garantizar la seguridad cibernética. Los Gobiernos y las empresas se ven en la situación de tener que implementar políticas y medidas de seguridad robustas para proteger los datos de los ciudadanos y prevenir el acceso no autorizado y el uso indebido de la información.

Cabe reconocer que la tecnología no afecta a todos los grupos de manera uniforme y puede ampliar las desigualdades existentes si no se aborda de manera adecuada. Por ejemplo, las personas con discapacidades enfrentan barreras adicionales para acceder a la tecnología y beneficiarse de ella, ya que muchas veces no se tienen en cuenta sus necesidades diferenciales. Por lo tanto, es fundamental garantizar que la tecnología sea inclusiva y accesible para todos, independientemente de su capacidad, género, edad o situación socioeconómica.

Figura 26

Indicadores de acceso a la tecnología

Indicador	Descripción
Porcentaje de la población con acceso a internet.	Representa la proporción de la población que tiene acceso a internet en cada país o región.
Velocidad promedio de conexión a internet.	Muestra la calidad de la conexión a internet en términos de velocidad, lo que afecta la experiencia del usuario.
Disponibilidad de dispositivos tecnológicos.	Indica la cantidad de dispositivos tecnológicos, como computadoras y teléfonos inteligentes, disponibles por hogar.
Tasa de alfabetización digital.	Representa el porcentaje de la población que posee habilidades básicas para usar tecnología e internet.
Desglose demográfico del acceso a la tecnología.	Incluye datos sobre el acceso a la tecnología por género, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica.
Uso de servicios públicos digitales.	Muestra el porcentaje de la población que utiliza servicios públicos digitales, como educación y salud en línea.
Inversión en infraestructura tecnológica.	Refleja la inversión realizada por cada país en infraestructura tecnológica para mejorar la conectividad.

Nota: Elaboración propia.

Por último, es importante fomentar la innovación social y el emprendimiento tecnológico en la región como parte de la integración tecnológica. Esto se consigue mediante el apoyo

a los innovadores locales y las *startups* que generan soluciones creativas y adaptadas a los desafíos específicos de estos territorios: desde la prestación de servicios de salud en áreas remotas hasta la promoción de la educación digital en comunidades marginadas; acciones que no solo impulsan el desarrollo económico y social, sino que también fortalecen la capacidad de la región para competir a nivel global en la economía digital.

En el contexto actual, la salida de países de otras regiones de ciertos mercados deja espacios vacantes que presentan oportunidades significativas para los países latinoamericanos, las cuales podrían ser aprovechadas colectivamente por la región (Beylis *et al.*, 2023). Para ello, es crucial promover la diversificación de sus estructuras económicas mediante la inversión intrarregional y una mayor integración económica, lo cual fortalece los lazos económicos entre los países vecinos y abre la puerta a una colaboración más estrecha con naciones distantes que buscan reducir su dependencia o ampliar sus mercados. En este sentido, un proceso de diversificación bien gestionado, respaldado por la innovación y una mayor integración impulsa el crecimiento regional a largo plazo y contribuye a reducir su vulnerabilidad económica.

Tejido cultural: el rol de la cultura en la integración

América Latina y el Caribe es una región conocida por su diversidad cultural y por sus elementos e historias compartidas, riqueza que se refleja en sus tradiciones, idiomas, expresiones artísticas y formas de vida. Desde los paisajes de la selva amazónica hasta las metrópolis y grandes ciudades llenas de arte y música, la región es un crisol de culturas que ha sido moldeado por siglos de intercambios y encuentros entre distintos pueblos. Entre ellas se destacan las culturas ancestrales de los pueblos indígenas que habitaban el continente, como así también elementos de otras culturas, como la afrodescendiente y de distintos países de Europa y Asia. El tejido cultural, entonces, cumple un papel fundamental en el proceso de integración regional, ya que la cultura se erige como un puente que une a las naciones de la región y proporciona un lenguaje común que trasciende las barreras geográficas y políticas. A través de la música, la literatura, el arte y otras manifestaciones culturales, se llega al entendimiento y a la solidaridad entre los pueblos, lo cual forja una identidad compartida que enriquece y fortalece el tejido social de la región. También se logra a través de cosmovisiones compartidas, que hacen que muchos pueblos vean al mundo de una manera similar.

El fomento de la interacción cultural, el uso de la tecnología como herramienta para la difusión y para el acceso a la diver-

sidad cultural, y la geopolítica de esa diversidad se entrelazan para promover una integración inclusiva y sostenible. La existencia de diferentes culturas plantea desafíos, ya que cada país y comunidad en la región tiene sus propias tradiciones, valores y formas de entender el mundo. En este sentido, la integración cultural debe valorar y promover la pluriculturalidad como un activo compartido, reconociendo la importancia de preservar y celebrar la diversidad en todas sus formas.

Por su lado, el desarrollo tecnológico ha transformado la manera en que compartimos y accedemos a la cultura, pues brinda nuevas oportunidades para la difusión y promoción de expresiones culturales. El uso de redes sociales, plataformas digitales y contenidos culturales en línea ha democratizado el acceso a la diversidad, lo cual permite que las voces y las historias de la región lleguen a audiencias globales de manera instantánea y directa. Pese a ello, ha planteado paradojas en torno a la globalización y a la pérdida de las particularidades de algunas culturas, principalmente las de los pueblos indígenas y la afrodescendiente. Además, esta revolución digital suscita desafíos en términos de equidad en el acceso a la tecnología y la preservación del patrimonio cultural, lo que subraya la importancia de su abordaje.

La geopolítica de la diversidad cultural es un aspecto fundamental para considerar en el proceso de integración regional. La valoración y la protección de la diversidad no solo son cuestiones culturales, sino también geopolíticas, que juegan un papel crucial en la identidad y la soberanía de los pueblos. Ejemplos como el concepto de *madre tierra* o *Pachamama* en las cosmovisiones de las culturas ancestrales de los pueblos originarios destacan la estrecha relación entre la diversidad cultural y la protección del medio ambiente, relación que subraya la necesidad de tratar dichos temas desde una perspectiva holística e interconectada. Aspectos como este se han plasmado en las últimas décadas, incluso, en algunas constituciones, como las del Estado Plurinacional de Bolivia o la República del Ecuador.

La integración cultural es imprescindible para fortalecer los lazos entre los países de América Latina y el Caribe. Como individuos y como naciones, hay una historia y una identidad que trascienden las fronteras políticas, una cultura compartida y, a la vez, diversa. Por ello, se deben reconocer y valorar las conexiones culturales, ya que brindan una base sólida para promover la comprensión mutua y la colaboración entre estas sociedades al alimentar la solidaridad y el entendimiento en toda la región. En este sentido, es fundamental que los organismos impulsen activamente la integración cultural, reconociendo la diversidad como un motor clave para el desarrollo regional y la construcción de una comunidad más unida y cohesionada donde los elementos de las diversas culturas puedan coexistir sin perderse.

La diversidad, la creatividad y la educación como puentes culturales

La interacción cultural es decisiva en el proceso de integración regional en América Latina y el Caribe, pues actúa como un puente que conecta a las naciones y fortalece los lazos de solidaridad y comprensión mutua. Por ello, es importante destacar cómo los intercambios artísticos y culturales, el desarrollo de industrias creativas y diversas manifestaciones culturales contribuyen al enriquecimiento de este tejido de la región y promueven una integración más profunda y significativa.

La diversidad cultural es uno de los rasgos distintivos, ya que refleja siglos de historia, tradiciones y mestizaje. Desde las culturas ancestrales precolombinas hasta las influencias europeas, africanas y asiáticas, la región es un mosaico de culturas que enriquece su tejido social y cultural. Sin embargo, esta diversidad también presenta desafíos y oportunidades en el proceso de integración regional, ya que requiere un enfoque inclusivo y respetuoso que valore y promueva la pluriculturalidad como un activo compartido.

En ese sentido, y sobre la cuestión del mestizaje, se deben dejar de lado maneras dicotómicas o binarias para analizar a nuestro continente y pensar estas sociedades a partir del concepto de lo *abigarrado*, cuya traducción al aymara es *ch'ixi*: 'una mezcla de colores que no se pueden fusionar, sino que se dan por yuxtaposición' (Rivera Cusicanqui, 2014). Sin embargo, no hay que confundir este concepto con el de *híbrido* o *mestizo*, ya que lo abigarrado hace hincapié en las diferencias que se mantienen, es decir que no se fusionan ni se sintetizan. Lo *ch'ixi* obedece a la lógica del tercero incluido: algo que es y no es a la vez. Conjuga el mundo indígena con su opuesto sin mezclarse nunca, lo que da lugar a una nueva concepción que moldea y construye sujetos sociales de otra manera.

De esta forma, la situación de los pueblos originarios puede ser repensada desde dicha perspectiva, buscando salir de los estereotipos étnicos a los cuales fueron confinados diversos actores, como los de *indio*, *campesino*, *cholo* o *mestizo*. Esto implica alejarse de los esencialismos y pensar a las poblaciones como abigarradas. Así es como se realiza una crítica a aquellas formas de inclusión que, a pesar de tener buenas intenciones, negaron a los pueblos originarios de su condición de mayoría en las zonas urbanas y los encasillaron bajo una *identidad emblemática* (Rivera Cusicanqui, 2010; 2014).

Los intercambios artísticos y culturales entonces son una forma de promover el entendimiento y la cooperación entre países, que se produce a través de festivales, exposiciones, giras artísticas y programas de residencias; mediante ellos los artistas y creadores tienen la oportunidad de compartir sus experiencias, perspectivas y expresiones culturales con nuevas audiencias. Estos intercambios no solo enriquecen el panorama cultural de la región, sino que también fomentan el diálogo y la colaboración entre diferentes comunidades y sociedades.

El desarrollo de industrias creativas, por ejemplo, el cine, la música, el diseño y la moda juega un papel fundamental en la integración regional por la generación de empleo y riqueza económica, como así también por la promoción de la diversidad cultural y el intercambio de ideas y valores entre países. A través de colaboraciones transnacionales, coproducciones y exportación de productos culturales, las industrias creativas contribuyen al fortalecimiento de los lazos comerciales y culturales en la región.

El sector económico de la industria creativa se basa en el ingenio, la innovación y el talento humano. Debido a su capacidad para fomentar el crecimiento económico, la integración regional y promover la diversidad cultural, estas industrias tienen una estrecha relación con las políticas de desarrollo. Fortalecen la identidad cultural y regional mediante la creación de contenidos locales, lo que aumenta el sentido de pertenencia y cohesión entre las naciones vecinas y da la posibilidad de atraer el interés turístico hacia la cultura, las artes y los eventos en la región. La promoción de la zona como destino turístico tiene el potencial de impactar positivamente en la economía local. Al diseñar estrategias que fomenten la inversión, la educación y el crecimiento de los sectores creativos, las políticas de desarrollo regional pueden obtener beneficios de las industrias creativas. A su vez, impulsar la protección de la propiedad intelectual, fomentar la colaboración transnacional y facilitar el acceso al financiamiento para proyectos creativos puede contribuir aún más al progreso y la sostenibilidad de las estas industrias.

La música, la pintura, la literatura y otras manifestaciones culturales son puentes de conexión entre naciones, formas de expresión que reflejan la identidad y la historia de un pueblo y ofrecen la posibilidad de trascender las fronteras geográficas y lingüísticas para llegar a otros lugares del mundo. A través de la promoción y difusión de estas manifestaciones culturales, se establecen vínculos de solidaridad y hermandad que

fortalecen el tejido social y cultural de la región. Pero, a pesar de los aportes, la pluriculturalidad presenta desafíos en el proceso de integración regional: si bien enriquece la diversidad cultural, también plantea retos en términos de coexistencia pacífica, respeto mutuo y convivencia armoniosa entre diferentes grupos. Por lo tanto, abordar estos problemas requiere un enfoque inclusivo y respetuoso que valore y promueva la pluriculturalidad como un activo compartido, reconociendo la importancia de preservar y celebrar la diversidad en todas sus formas.

Más allá de los intercambios artísticos y culturales formales, es importante destacar, en el fomento de la integración, el papel de las comunidades y organizaciones de base. Estas muestran, a nivel local, numerosas iniciativas comunitarias, festivales y programas de intercambio entre vecinos de diversas locaciones que contribuyen a fortalecer los lazos sociales y culturales dentro de los países y entre ellos. Estas acciones, impulsadas por la creatividad y la pasión de la sociedad civil, son un testimonio del potencial transformador de la cultura para unir a las personas y superar fronteras.

Un ejemplo de estas iniciativas es el proyecto Mercosur Cultural, que reconoce la importancia de impulsar las relaciones internacionales y los procesos de integración en el área de la cultura. Se han realizado algunos avances, como la preservación de patrimonios culturales propuestos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y aún queda mucho por hacer para lograr una verdadera convergencia y participación conjunta entre los Estados miembros (Wilson, 2019). Esta situación provoca que cada uno de los países y las instituciones pertinentes refuercen su compromiso y contribución para alcanzar los objetivos establecidos, mientras que la ciudadanía también desempeña un papel fundamental en la promoción de iniciativas que fomenten la preservación y comunicación de la cultura en la región.

Otros ejemplos relevantes son el Consejo de Pueblos Indígenas y la Mesa Afrodescendiente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Se trata de dos mecanismos establecidos dentro de este organismo regional para abordar las necesidades y preocupaciones de estos pueblos, y para garantizar sus derechos en la toma de decisiones y en el diseño de políticas de desarrollo sostenible y equitativo en el territorio andino; esto se logra mediante el diálogo intercultural y la colaboración entre las distintas comunidades y Gobiernos de los países miembros.

El Consejo de Pueblos Indígenas es un espacio de participación y diálogo creado para representar y defender los intereses de las comunidades indígenas andinas. Busca fortalecer la inclusión y la promoción de los derechos de estos pueblos en el proceso de integración; además fomenta la preservación y la promoción de las culturas, tradiciones y lenguas de la región.

Por su parte, la Mesa Afrodescendiente es un espacio similar, pero enfocado en la comunidad afrodescendiente; su objetivo es promover la inclusión y el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones, así como fortalecer su participación en el proceso de integración regional. Esta Mesa busca impulsar políticas y acciones que mejoren las condiciones de vida de las comunidades a las que representa y su contribución a la diversidad cultural de la región.

Por otro lado, en la construcción de una sociedad más inclusiva y tolerante, es necesario incorporar contenidos y actividades interculturales en los programas educativos, pues esto ayuda a sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la diversidad y a fomentar el respeto y la valoración de las diferencias. Además, el intercambio de estudiantes y docentes entre países, así como la colaboración en proyectos de investigación y enseñanza, contribuyen a enriquecer la experiencia educativa y a fortalecer los lazos académicos y culturales entre naciones.

En este sentido, la educación superior desempeña un papel importante en los procesos de integración latinoamericana, especialmente en un contexto donde se enfrentan alternativas aparentemente excluyentes, como integración versus globalización. Guadarrama (2013) destaca la necesidad de rescatar y difundir el pensamiento integracionista de figuras emblemáticas, cuyas ideas han contribuido históricamente a promover la integración en la región para comprender las bases sobre las cuales se fundamenta el proceso de unificación regional. Además, se resalta la importancia de investigar sobre la identificación de las barreras que obstaculizan la integración y sobre la búsqueda de formas democráticas que la favorezcan. Comprender estas barreras, ya sean económicas, políticas, culturales o educativas, permite diseñar estrategias efectivas de integración. En este sentido, la educación superior tiene la responsabilidad de estimular investigaciones que propongan nuevos modelos de desarrollo específicos para la región latinoamericana y caribeña, considerando no solo los factores económicos, sino también los sociales, ambientales, tecnológicos y culturales.

Asimismo, Guadarrama (2013) hace hincapié en la necesidad de desarrollar un marco teórico enriquecido por los aportes de investigadores regionales que aborden de manera crítica y contextualizada el complejo proceso de integración de esta zona y los obstáculos que enfrenta. Este enfoque teórico debe analizar las realidades presentes, pero también debe proyectarse hacia el futuro, identificando posibles soluciones y estrategias de acción.

Tejidos digitales y cultura interconectada

La tecnología desempeña un papel cada vez más importante para impulsar la integración cultural en América Latina y el Caribe, pues facilita el acceso a la diversidad existente y promueve el intercambio de ideas y expresiones artísticas. El

uso de redes sociales, los contenidos culturales digitales y la preservación del patrimonio autóctono están transformando la forma en que la sociedad latinoamericana y caribeña se relaciona con la cultura y cómo enfrenta los desafíos de equidad en el acceso a la tecnología y la conservación cultural.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para difundir y promocionar la cultura de cada punto de la región: plataformas como Facebook, Instagram, X (ex Twitter), TikTok y YouTube permiten a artistas, instituciones culturales y comunidades compartir sus creaciones con audiencias globales de manera instantánea y accesible. Desde la promoción de eventos culturales hasta la difusión de obras de arte y música, las redes sociales han democratizado el acceso a la cultura y han abierto nuevas oportunidades para este tipo de intercambios entre países y comunidades.

La digitalización de contenidos culturales ha ampliado su acceso, lo cual permite que obras de arte, libros, música, películas y otros recursos estén disponibles en línea para personas de todo el mundo. Bibliotecas digitales, museos virtuales y servicios de *streaming* de música y películas han democratizado el acceso a la cultura, reduciendo las barreras geográficas y económicas que antes limitaban la participación en este tipo de experiencias. Sin embargo, persisten desafíos en términos del acceso equitativo a la tecnología y la conectividad, especialmente en comunidades rurales y zonas de difícil acceso, lo que requiere políticas y programas para garantizar que todos puedan acercarse a estos recursos culturales digitales. Por otro lado, no se puede dejar de señalar los cuestionamientos existentes en torno a la utilización de los datos de los usuarios en las redes y a la estructura de los algoritmos que deciden qué contenidos se visualizan; estos son aspectos por trabajar en dos frentes, uno relativo a los Estados y sus normativas y políticas internas, y otro referido a las estrategias que deben tejer entre ellos.

Desde otra perspectiva, la tecnología también ha revolucionado la preservación del patrimonio cultural: proporciona

nuevas herramientas para documentar, conservar y difundir sitios y tradiciones culturales, como la de los pueblos originarios y la afrodescendiente. Esto se puede conseguir mediante la digitalización de archivos históricos o la creación de modelos tridimensionales de sitios arqueológicos o de museos, acciones que protegen y promueven el patrimonio inmaterial de la región. Sin embargo, es importante no perder de vista los desafíos asociados a la conservación digital, como la obsolescencia tecnológica y la pérdida de datos, para garantizar la preservación a largo plazo del legado cultural latinoamericano y caribeño.

A pesar de los avances en tecnología e integración cultural, persisten obstáculos significativos en términos de equidad en el acceso a la tecnología y la preservación del patrimonio cultural. Las ya mencionadas brechas digitales, tanto en términos de acceso a internet como de habilidades necesarias, continúan siendo un escollo para muchas comunidades, especialmente en áreas rurales y marginadas. A eso se suman la falta de recursos financieros y técnicos, la degradación ambiental y el desarrollo urbano descontrolado, que amenazan la integridad de sitios y tradiciones culturales en toda la región.

Otro tipo de inconveniente en el entorno digital está dado por la gestión de los derechos de autor y la remuneración justa para los creadores culturales, ya que, si bien la tecnología ha facilitado la distribución y difusión de sus obras, también ha dado lugar a prácticas de piratería y violación de *copyright* que afectan negativamente a los artistas y creadores. Establecer marcos legales y mecanismos de protección de derechos de autor adaptados al entorno digital es una tarea ineludible de los Estados para garantizar la sostenibilidad y la equidad en la industria cultural.

La innovación tecnológica está dando lugar a nuevas formas de expresión cultural y artística. Desde la realidad virtual y la realidad aumentada hasta la inteligencia artificial y el arte generativo, una multiplicidad de artistas está explorando estas

nuevas herramientas y técnicas para crear obras innovadoras y estimulantes. Dichas expresiones no solo enriquecen el panorama cultural de la región, sino que también ofrecen nuevas oportunidades para el diálogo intercultural y la colaboración creativa entre países y comunidades.

Por otra parte, para comprender de manera más completa la región y apreciar y respetar su diversidad cultural, es importante documentar y preservar las culturas ancestrales, que representan la rica herencia de los pueblos indígenas y afro que han contribuido al entramado social, histórico y artístico. Así, se promueve el respeto y la protección de los derechos de estos pueblos, que enfrentan desafíos como la marginación y la discriminación. En este sentido, la documentación y preservación de culturas ancestrales pueden fomentar nuevas formas de diálogo intercultural y favorecer la comprensión y cooperación entre distintas comunidades y países.

Por último, la alfabetización digital permite aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología para la integración cultural. Promover las habilidades digitales y educar en su uso responsable es fundamental para garantizar que todas las personas puedan participar activamente en la vida cultural y beneficiarse al máximo de los recursos y oportunidades disponibles. La educación cultural y el fomento del pensamiento crítico son dos instrumentos que impulsan la comprensión y el respeto hacia la diversidad cultural en la era digital.

Geopolítica de la diversidad cultural

La diversidad cultural no es solo un fenómeno sociológico o antropológico, sino también un aspecto geopolítico que influye en las relaciones entre Estados, la identidad nacional y la soberanía de los pueblos. Para profundizar esta cuestión, es necesario adentrarse en la relación entre la valoración y la protección de la diversidad cultural, y la identidad y la so-

beranía de los pueblos, ejemplos concretos de la geopolítica de la diversidad cultural en la región como factor clave en la diplomacia cultural y las relaciones internacionales.

La diversidad cultural se manifiesta de manera diferente en cada país y región; su valoración y protección tienen implicaciones geopolíticas significativas en un mundo cada vez más interconectado, donde se convierte en un activo estratégico que incide en la posición y la influencia de un país en la escena internacional. La capacidad de un país para valorar, proteger y promover su diversidad cultural afecta su imagen y reputación en el ámbito mundial, así como su capacidad para construir alianzas y relaciones diplomáticas con otros Estados.

En relación con lo expuesto, la diversidad cultural representa un recurso que puede ser valioso para la región, ya que promueve el progreso económico, social y político, al mismo tiempo que fomenta la inclusión, la innovación y la cohesión social. Por ejemplo, una de las industrias o sectores relacionados es el del turismo: los turistas que estén interesados en experimentar las diversas costumbres, festivales y tradiciones autóctonas de la zona pueden ser atraídos por la diversidad cultural. Además, impulsar la inclusión y el sentido de pertenencia a través del reconocimiento y la celebración de la diversidad cultural puede contribuir a la cohesión social, así como a la estabilidad política y económica. Estas iniciativas empoderan a las comunidades al brindarles la oportunidad de participar en decisiones que impactan en sus vidas y tradiciones. Por su parte, promover la diversidad cultural en la educación y la vida comunitaria ayuda a crear conciencia sobre el valor de las distintas tradiciones, idiomas y perspectivas del mundo. Finalmente, la resiliencia de las sociedades puede ser fortalecida por la diversidad cultural al facilitar una mejor adaptación a los cambios y los desafíos.

Por otro lado, la valoración y la protección de la diversidad cultural están estrechamente relacionadas con la identidad

y la soberanía de los pueblos en América Latina y el Caribe, donde, para muchos países, esta diversidad es un elemento central de su identidad nacional y un símbolo de su soberanía cultural. La protección, por tanto, se percibe como una forma de salvaguardar la integridad y la autonomía de las comunidades locales frente a influencias externas, más allá de que la promoción de su diversidad contribuye a fortalecer el tejido social y la cohesión nacional, pues actúa como un factor de unidad en sociedades culturalmente diversas.

En el continente, existen numerosos ejemplos de la geopolítica de la diversidad cultural, algunos relacionados con una cosmovisión anclada en la madre tierra o Pachamama, sostenida por pueblos originarios del continente. Para muchas comunidades, la tierra no es solo un recurso natural, sino también un ente vivo y sagrado que sustenta su identidad cultural y su forma de vida. Este hecho explica por qué la lucha por la protección de la madre tierra y los territorios indígenas se ha convertido en un tema central en la política y la diplomacia de muchos países de la región y ha generado tensiones y conflictos con intereses económicos y extractivistas. Incluso estas visiones han sido incorporadas en los casos boliviano y ecuatoriano, en sus últimas reformas constitucionales.

La diversidad de culturas desempeña un papel cada vez más importante en la llamada diplomacia cultural y en las relaciones internacionales; esta situación se aprecia en el hecho de que los Estados de la región utilizan la diversidad como una herramienta para proyectar su imagen hacia el mundo, construir puentes con otros países, y fortalecer la cooperación y el entendimiento mutuo. La diplomacia cultural se ha convertido en un instrumento interesante y necesario para promover la diversidad cultural como un valor compartido en la comunidad internacional y para abordar desafíos globales: racismo, discriminación e intolerancia. Por esto, la práctica que utiliza elementos como el arte, la música, el cine, la literatura y otras expresiones artísticas es entendida como medio para

impulsar los intereses de un país en el ámbito internacional, y para fomentar el entendimiento mutuo, la cooperación y el diálogo entre naciones y culturas. A través de intercambios culturales, exposiciones, festivales, programas educativos y otros eventos, se busca crear vínculos emocionales y fortalecer las relaciones, trascendiendo las barreras lingüísticas y políticas. Se trata entonces de una herramienta para construir puentes entre diferentes sociedades y mejorar la imagen y la influencia de un país en el escenario mundial.

La globalización ha traído consigo una mayor interconexión entre sociedades y culturas, pero también ha generado preocupaciones sobre la homogeneización cultural y la pérdida de diversidad. En América Latina y el Caribe, muchos países han adoptado políticas de protección y promoción de su diversidad cultural como respuesta a las presiones homogeneizadoras de la globalización, entre las que se incluyen el fomento de las lenguas indígenas, la preservación de tradiciones ancestrales y la promoción de expresiones culturales locales. Así se resguarda la identidad y la autonomía cultural de los pueblos frente a la uniformidad impuesta por las fuerzas globales del mercado y la tecnología.

A medida que los países de la región buscan potenciar la cooperación y la integración económica y política, la diversidad cultural se convierte en un factor clave para promover el entendimiento mutuo y la solidaridad entre naciones. La celebración de festivales culturales regionales, la creación de redes de intercambio cultural y la promoción de la diversidad lingüística y étnica son formas en que los países de la región pueden fortalecer sus lazos y construir una identidad regional basada en la diversidad y la inclusión. De este modo, la integración se convierte en un vehículo para favorecer y apoyar la diversidad cultural.

Desde las raíces más ancestrales hasta las influencias más contemporáneas, esta región es un crisol de culturas que se

entrelazan para formar un mosaico único y vibrante. A medida que se avanza hacia una integración más profunda, el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural se vuelve un activo común que enriquece el patrimonio colectivo. Con un enfoque inclusivo y respetuoso, se puede construir un futuro donde la diversidad sea celebrada y protegida, y así fortalecer el tejido social y cultural de América Latina y el Caribe para las generaciones venideras.

Figura 27

Tabla con algunas de las principales culturas ancestrales existentes en América Latina y el Caribe, las lenguas originarias reconocidas y la extraterritorialidad de los pueblos

Cultura ancestral	Países de presencia	Lenguas originarias reconocidas	Extraterritorialidad de los pueblos
Inca	Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina.	Quechua, aymara, otras lenguas andinas.	Comunidades en países vecinos, como Chile y Argentina.
Maya	México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador.	Maya (varias variantes).	Emigración a otros países de América Central y Estados Unidos.
Azteca	México.	Náhuatl, otras lenguas indígenas de México.	Pueblos indígenas en todo México, algunos en Estados Unidos.
Táino	Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica.	Varias lenguas taínas.	Influencia cultural en todo el Caribe, comunidades en la diáspora.

Mapuche	Chile, Argentina.	Mapudungun.	Comunidades en el sur de Chile y Argentina, presencia en ciudades.
Zapoteca	México.	Zapoteco.	Comunidades en Oaxaca, México, emigración a Estados Unidos.
Mixteca	México.	Mixteco.	Comunidades en Oaxaca y Guerrero en México, emigración a Estados Unidos.
Garífuna	Honduras, Guatemala, Belice, Nicaragua.	Garífuna.	Comunidades costeras, emigración a Estados Unidos.
Guaraní	Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia.	Guaraní.	Comunidades en todo Paraguay y en países vecinos.
Wayúu	Colombia, Venezuela.	Wayuunaiki.	Comunidades en La Guajira, Colombia y Venezuela.

Nota: Elaboración propia.

Figura 28*Dimensiones de la diversidad cultural*

Dimensión	Descripción
Penetración de internet	La cantidad de población con acceso a internet refleja la capacidad de las personas para participar en la cultura digital.
Uso de redes sociales	La frecuencia y alcance del uso de redes sociales contribuye a la difusión de la cultura regional.
Preservación del patrimonio cultural	Son medidas adoptadas para la documentación, conservación y difusión del patrimonio cultural que incluyen archivos históricos y modelos tridimensionales.
Protección de territorios indígenas	Son las políticas y acciones destinadas a proteger los territorios indígenas y su cosmovisión, y reflejan la diversidad cultural y la soberanía de los pueblos originarios.
Participación en festivales y eventos culturales	Muestra la cantidad y diversidad de festivales y eventos culturales que celebran la diversidad étnica, lingüística y cultural de la región.
Promoción de lenguas indígenas	Se trata de iniciativas para promover y preservar las lenguas indígenas, reconociendo su importancia en la diversidad cultural y la identidad nacional.
Colaboración en proyectos de integración cultural	La participación en proyectos de integración cultural regional fomenta la cooperación y el entendimiento mutuo entre países.
Protección de derechos de los creadores culturales	Son medidas para proteger los derechos de autor y garantizar la remuneración justa para los creadores culturales, promoviendo la diversidad en la producción cultural.

Nota: elaboración propia.

Tejiendo alianzas: estrategias regionales de integración

En un mundo cada vez más interconectado, marcado por la creciente complejidad de los desafíos globales y las oportunidades emergentes, la integración regional es un instrumento para fomentar la estabilidad, la prosperidad y la cooperación entre naciones. Teniendo en cuenta que la interdependencia económica y política es la norma, las estrategias regionales de integración adquieren una relevancia indiscutible, pues ofrecen a los países la posibilidad de potenciar sus fortalezas individuales y abordar conjuntamente problemas compartidos.

La historia brinda numerosos ejemplos de cómo la integración regional ha sido un catalizador para el crecimiento económico y el desarrollo social en diferentes partes del mundo. Desde la UE hasta la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los esfuerzos por fortalecer la cooperación y la integración entre países han demostrado su capacidad para generar beneficios tangibles, tanto en la expansión del comercio como en la mejora de la infraestructura y la promoción de la paz y la estabilidad.

En América Latina y el Caribe, la búsqueda de la integración regional ha sido una constante a lo largo de la historia, impulsada por la necesidad de superar las barreras geográficas y aprovechar al máximo el potencial económico y humano de la

región. Desde los esfuerzos iniciales liderados por los libertadores hasta los tratados y acuerdos más recientes, los países latinoamericanos y caribeños han explorado diversas formas de colaboración y cooperación para fortalecer sus lazos económicos y políticos. Sin embargo, a pesar de los avances logrados, persisten obstáculos significativos que requieren una acción conjunta y coordinada: por ejemplo, la disparidad en los niveles de desarrollo, las diferencias ideológicas y las tensiones geopolíticas. En este contexto, para superar las dificultades, es necesario trabajar sobre la integración y la convergencia, identificar sus éxitos y limitaciones, y explorar nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación y el desarrollo conjunto.

Modelos de integración y organismos internacionales

Como explica Malamud (2006, 2011), la diferencia fundamental entre cooperación e integración regional radica en que esta última implica compartir o combinar cierto nivel de soberanía, lo que resulta en la interconexión de competencias y recursos más allá de la voluntad individual de las partes involucradas. En el contexto de la integración regional, identifica cuatro etapas en el proceso evolutivo, que se detallan a continuación.

- La primera corresponde a una zona de libre comercio (ZLC), donde no hay barreras aduaneras, y los productos circulan entre los países sin aranceles. En estas ZLC, se eliminan aranceles y cuotas comerciales entre los países miembros, pero se mantienen políticas comerciales individuales frente a terceros países.
- La segunda se trata de una unión aduanera, donde se establecen aranceles comunes para los productos de terceros países, lo que crea una entidad comercial conjunta. En este punto, son importantes los acuerdos de libre comercio (ALC), los cuales se centran en la eliminación o reducción de aranceles y barreras comerciales entre los países miembros para promover la

eficiencia económica y la competitividad, y la creación de un arancel externo común.

- La tercera etapa implica la formación de un mercado común caracterizado por la libre circulación de bienes, capital, trabajo y servicios, junto con una política comercial unificada y legislación armonizada entre los Estados miembros.
- La etapa culminante es la unión económica, que conlleva la adopción de una moneda única y una política monetaria común (Malamud, 2006).

En este punto, Schmitter (2011) enfatiza la importancia de considerar las reglas de toma de decisiones, los costos y beneficios de la membresía en distintos organismos que forman parte de estas etapas, y los actores involucrados en las organizaciones regionales transnacionales para diferenciar entre cooperación e integración regional.

Por su parte, en América Latina y el Caribe, se han desarrollado diversos bloques y organismos de integración regional a lo largo del tiempo (ver Figura 3 en el capítulo 1) con el objetivo de promover la cooperación económica, política y social. Estos esfuerzos se remontan al siglo XIX y han evolucionado hasta la actualidad; reflejan la diversidad y la complejidad de la integración en esta área geográfica.

El SELA (2023) ha desempeñado un papel crucial en la promoción de la cooperación e integración económica entre los países latinoamericanos y caribeños, así como en el trazado de políticas regionales para abordar los desafíos económicos compartidos. Por otro lado, este organismo ha realizado investigaciones y foros de debate donde se comparten experiencias de políticas orientadas a fortalecer la integración económica y social en la región; cabe destacar la importancia de la cooperación intrarregional y los acuerdos comerciales para impulsar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. En conjunto, estas contribucio-

nes han enriquecido el debate sobre la integración regional y han proporcionado orientación para futuras iniciativas de cooperación y desarrollo.

Profundizando en el desarrollo de diversos modelos de integración regional a lo largo del tiempo en este continente, cada uno tiene sus propias características, funciones, alcances, éxitos y dificultades. Estos modelos se han clasificado en diferentes etapas del proceso de integración, que van desde ZLC hasta uniones económicas, como parcialmente puede ser la Unión Europea. Uno de los primeros modelos de integración adoptados en la región fue la creación de una ZLC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC; actualmente es la Asociación Latinoamericana de Integración [ALADI]), fundada en 1960; fue creada con el objetivo de fomentar el comercio y la cooperación económica. Aunque logró promover el comercio intrarregional y la eliminación de aranceles y barreras comerciales, enfrentó dificultades para avanzar hacia etapas más avanzadas de integración debido a la reticencia de algunos países miembros.

Posteriormente, surgieron uniones aduaneras como la CAN, fundada en 1969, en búsqueda de ser un mercado común con procedimientos, normas y aranceles para sus importaciones, exportaciones y tránsito de mercancías. Los países miembros de este tipo de integración comparten políticas comerciales y de competencia gracias a una legislación aduanera armonizada. Sin embargo, la CAN no ha llegado, a lo largo de estos años, a consolidarse como una unión aduanera.

Como se ha dicho, la siguiente etapa de integración es la formación de un mercado común. El Mercosur, por ejemplo, fundado en 1991, buscó promover la integración económica y fortalecer la cooperación política entre los países miembros mediante el establecimiento de un arancel externo común. Aunque logró avanzar en la implementación de políticas económicas comunes, enfrentó desafíos en la coordinación de

políticas macroeconómicas y discutió sin éxito la adopción de una moneda única, por lo que hoy en día podría ser calificada —según mi visión— como una unión aduanera imperfecta, con excepciones, debido a la diferencia en tamaño de los países y las asimetrías.

La etapa culminante de integración es la unión económica, que conlleva la adopción de una moneda única y una política monetaria común. En América Latina y el Caribe, no se encuentran aún ejemplos de esta etapa de integración, puesto que, a pesar de que el Mercosur logró avanzar en la implementación de políticas económicas comunes, no ha construido una estructura institucional acorde a las exigencias del caso (Malamud, 2011), ni ha avanzado en la adopción de una moneda única. Por otro lado, la UNASUR ha fomentado la integración regional y la cooperación en las áreas económica, de infraestructura y de seguridad. No obstante, si bien logró mediar en los conflictos regionales e impulsar la cooperación en áreas estratégicas —y llegó a ser, en mi opinión, la expresión más profunda de integración en la región con un sentido práctico—, enfrentó dificultades para implementar políticas comunes y coordinar acciones entre los países miembros. Por lo tanto, tampoco se puede considerar que se haya consolidado como una unión económica o política, como se pretendía de acuerdo con el espíritu de su creación.

Figura 29

Tabla comparativa de las cuatro etapas de integración regional

Etapas	Características
Zona de Libre Comercio (ZLC)	Eliminación de barreras arancelarias entre países miembros. Mantiene políticas comerciales individuales frente a terceros países.
Unión Aduanera	Establecimiento de aranceles comunes para productos de terceros países. Eliminación de barreras comerciales internas entre los países participantes. Adopción de una política comercial común frente a terceros países.
Mercado Común	Libre circulación de bienes, capital, trabajo y servicios. Política comercial unificada. Legislación armonizada entre Estados miembros.
Unión Económica	Adopción de una moneda única. Política monetaria común.

Nota: elaboración propia.

Fomentando la integración sectorial para el desarrollo regional

La integración sectorial implica la unión o combinación de diferentes sectores para lograr una mayor eficiencia, cooperación y sinergia entre ellos; su importancia radica en el fortalecimiento de los lazos entre los países de una región, ya que permite que colaboren más estrechamente en áreas estratégicas que van más allá del comercio y la economía. Es un tipo de integración que puede ocurrir a nivel nacional o internacio-

nal y, generalmente, implica la colaboración entre empresas, instituciones y actores relevantes en esos sectores.

Puede adoptar diversas formas, como la cooperación en infraestructura y conectividad, la integración energética y el aprovechamiento de recursos naturales, y el papel de la colaboración en ciencia, tecnología e innovación, que serán abordados en las páginas siguientes.

En primer lugar, la cooperación en infraestructura y conectividad facilita el comercio y la movilidad dentro de una región, ya que construir y mejorar carreteras, puertos, aeropuertos y sistemas de transporte facilita el flujo de bienes, servicios y personas entre los países involucrados. Esta cooperación no solo reduce los costos logísticos y aumenta la eficiencia del comercio, sino que también promueve la integración económica y social.

En América Latina y el Caribe, se han llevado a cabo diversos proyectos de infraestructura regional, como la construcción de corredores viales y ferroviarios que conectan diferentes países; la mejora de puertos y aeropuertos para facilitar el comercio marítimo y aéreo; y la implementación de sistemas de transporte multimodal que agilizan la distribución de mercancías en toda la región.

Uno de los ejemplos más importantes en América del Sur es el Corredor Bioceánico Central, que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red de carreteras y ferrocarriles que atraviesan varios países, incluidos Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la conectividad regional y facilitar el transporte de mercancías entre los Estados involucrados. Sin embargo, aún persisten importantes dificultades en términos de financiamiento, coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura a nivel regional a causa de la falta de inversión adecuada, los obstáculos regulatorios y la burocracia.

Más allá de la infraestructura física, como carreteras y puertos, la infraestructura digital es otro pilar para el desarrollo económico y social en la era moderna. La expansión de la conectividad de banda ancha y el acceso a internet de alta velocidad son elementos clave para impulsar la innovación, mejorar la educación y facilitar el comercio electrónico. En este sentido, se necesita de iniciativas que promuevan la cobertura de redes de telecomunicaciones y la reducción de la brecha digital para garantizar que todos los países de la región puedan beneficiarse de las oportunidades que ofrece la economía digital.

En segundo lugar, en lo referente a la integración energética y al aprovechamiento de recursos naturales, la región cuenta con una amplia variedad de este tipo de recursos, incluidos petróleo, gas, minerales y energías renovables, que pueden ser aprovechados de manera más eficiente a través de la cooperación y la integración regional. La interconexión de redes eléctricas, la implementación de proyectos de energía renovable compartidos y el desarrollo de infraestructura para la exploración y producción de recursos naturales son algunas de las iniciativas que pueden promover la integración energética en la región. El Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) es un ejemplo de esto y consiste en la construcción de una red de transmisión eléctrica que conecta varios países de América Central, lo cual permite el intercambio de energía entre ellos y mejora la seguridad y la eficiencia del suministro. Se trata de acciones que no solo abastecen de forma más segura y sostenible, sino que también fomentan la diversificación de su matriz y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, esta cooperación también puede generar nuevas dependencias geopolíticas, ya que los países se vuelven más interdependientes en su suministro eléctrico. Para evitar conflictos, las naciones deben trabajar juntas para gestionar de manera equitativa y transparente estas interconexiones,

y garantizar la confiabilidad y eficiencia del suministro para todos los participantes. Otros obstáculos tienen que ver con la falta de marcos regulatorios armonizados, la divergencia en las políticas energéticas nacionales y las preocupaciones sobre la soberanía y la seguridad energéticas. La vía para sortearlos está en alcanzar compromisos renovados y una mayor cooperación entre los países de la región.

Respecto de estas cuestiones, la transición hacia fuentes de energías renovables, por ejemplo solar, eólica e hidroeléctrica, no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también contribuye a mitigar el cambio climático y promueve la seguridad energética a nivel regional. Además, es importante garantizar que la explotación de recursos naturales, como minerales y bosques, se realice de manera responsable, respetando los derechos de las comunidades locales y protegiendo la biodiversidad. La cooperación regional en materia de energía y medio ambiente puede facilitar la armonización de políticas y regulaciones, así como el intercambio de mejores prácticas y tecnologías innovadoras; un ejemplo de ello es el proyecto del Gasoducto del Sur, que busca transportar gas natural desde los yacimientos de gas en el sur de Bolivia hasta los mercados de consumo en Argentina y Brasil.

Como ya se ha mencionado y se profundizará en el último capítulo, América Latina es un importante productor de litio, especialmente los países del llamado *triángulo del litio*: Bolivia, Chile y Argentina. Esta región alberga grandes reservas de este mineral, que es un componente clave para baterías de vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. A medida que la demanda de tecnologías limpias aumenta a nivel mundial, los países con reservas de litio se enfrentan a presiones geopolíticas para asegurar la sostenibilidad de su explotación y su control sobre este recurso estratégico. Los países deben manejar cuidadosamente sus relaciones internacionales y aprovechar el litio como una oportunidad de desarrollo económico sin comprometer la protección ambiental y los derechos de las comunidades locales.

En lo que respecta a la producción de petróleo, países como Venezuela, Brasil y México han sido actores importantes en el mercado internacional, pero, mientras el mundo avanza hacia fuentes de energía más limpias, estos países enfrentan desafíos para mantener su influencia en este mercado. La diversificación económica se vuelve necesaria para evitar la dependencia excesiva del petróleo y mitigar los riesgos asociados con la transición energética. Además, se deben abordar presiones políticas y regulatorias para adaptarse a las demandas globales de reducción de emisiones de carbono y estándares ambientales más rigurosos.

Por otro lado, la región cuenta con un gran potencial para el desarrollo de energías renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. Como se ha mencionado anteriormente, la transición a fuentes de energía más limpias puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles, fomentar el desarrollo sostenible y mitigar el cambio climático. Sin embargo, esta transición también puede alterar el equilibrio de poder energético tanto a nivel regional como internacional, por lo que es crucial manejar estas transformaciones con una perspectiva que asegure la soberanía energética y la estabilidad política. En este sentido, vale la pena destacar el Amazonas, que es un ecosistema crítico tanto para la biodiversidad mundial como para la regulación del clima. La expansión de infraestructuras energéticas en la región, como proyectos hidroeléctricos, puede poner en peligro esta rica biodiversidad y provocar deforestación; por tanto, se debe equilibrar el desarrollo de fuentes de energía limpia con la protección del Amazonas y de otros ecosistemas, adoptando enfoques sostenibles y respetando los derechos de las comunidades locales.

Finalmente, en lo que respecta a la colaboración regional en ciencia, tecnología e innovación, hay que poner el acento en la transferencia de conocimientos, la cooperación en investigación y desarrollo, y en la promoción de la innovación, que son los aspectos que pueden generar importantes beneficios,

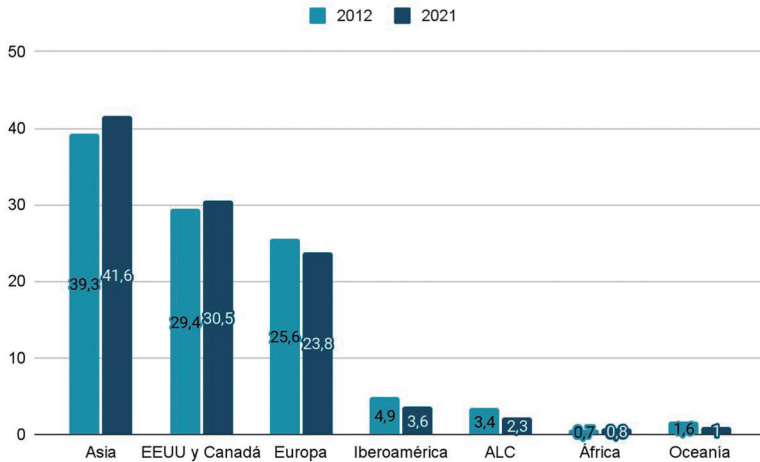
incluidos la creación de empleo, el fortalecimiento de la competitividad y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Muchos países ya han establecido diversos mecanismos, como redes de centros de investigación, programas de intercambio académico y fondos de financiamiento para proyectos conjuntos, iniciativas que promueven la colaboración entre instituciones académicas, empresas y Gobiernos, y contribuyen a la generación de conocimiento y la transferencia de tecnología en áreas prioritarias como la salud, la agricultura, la biotecnología y las energías renovables. Por ejemplo, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) facilita la cooperación intercontinental entre los países en áreas como la investigación científica, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades.

Sin embargo, más allá de los avances, aún es necesario que se invierta más en investigación y desarrollo, que se coordinen más efectivamente políticas a nivel regional y que el sector privado participe en mayor medida para fomentar la innovación y el emprendimiento. En este sentido, es prioridad promover la inclusión y la equidad de género en el acceso a oportunidades de formación y empleo en el campo de la ciencia y la tecnología.

Los proyectos de investigación y desarrollo colaborativos pueden abordar problemas compartidos, como la salud pública, la seguridad alimentaria y el cambio climático, y generar soluciones innovadoras con un impacto positivo en toda la región. Para que esto sea una realidad, los ecosistemas de innovación que se promuevan tienen que ser inclusivos y fomentar la participación de grupos relegados, como mujeres y comunidades indígenas, y garantizar que los beneficios de la innovación lleguen a todos los sectores de la sociedad. Las redes de colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas privadas estimulan la transferencia de conocimientos y la comercialización de tecnologías, lo que impulsa la competitividad y el crecimiento económico en la región.

Figura 30

Distribución de la inversión mundial en I+D por bloques geográficos (dólares PPC), 2012 y 2021



Nota: El estado de la ciencia: Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos (p. 17), de Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2023, OEI y UNESCO.

Relaciones con otros bloques regionales y colaboración extrarregional

La integración regional en América Latina y el Caribe no solo se limita a los esfuerzos internos, sino que también implica relaciones y colaboraciones con otros bloques regionales y países extrarregionales. Son relaciones que amplían las oportunidades comerciales, fortalecen la cooperación en áreas estratégicas y abordan desafíos globales de forma conjunta. En estas relaciones, los acuerdos de asociación han facilitado el intercambio comercial y el trabajo conjunto en áreas como la educación, la cultura y la ciencia. La UE, por ejemplo, ha sido un socio importante en términos de comercio, cooperación y diálogo político. A pesar de ello, se ha evidenciado en los últimos años que aún queda camino por recorrer en lo

que respecta a posibles acuerdos entre dicho organismo y sus homólogos regionales, como el Mercosur.

La colaboración entre la UE y América Latina y el Caribe se ha materializado en una serie de proyectos y programas conjuntos que abarcan diversas áreas. Por ejemplo, el programa EUROsociAL, implementado por la Comisión Europea en colaboración con países latinoamericanos, tiene como objetivo promover la cohesión social y la reducción de las desigualdades en la región a través del intercambio de buenas prácticas y la cooperación técnica. Asimismo, el programa AL-INVEST 5.0, financiado por la UE, busca fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en América Latina mediante el apoyo a la internacionalización, la innovación y la mejora de la productividad. En el ámbito de la investigación y la innovación, el programa Horizonte 2020 de la UE ha financiado numerosos proyectos de colaboración con instituciones latinoamericanas en áreas como la salud, la energía renovable y el cambio climático. Otro de los ejemplos más destacados es el Programa EUROCLIMA+, una iniciativa financiada por la UE que tiene como objetivo apoyar a los países latinoamericanos en la implementación de políticas y acciones para adaptarse al cambio climático y mitigarlo. A través de este programa, se han llevado a cabo proyectos para fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables frente a los efectos del cambio climático, promover la adopción de energías renovables y mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales en la región. También es importante la Iniciativa de Cooperación entre Europa y América Latina para Redes Avanzadas (ALICE2), que busca fortalecer la colaboración en investigación y desarrollo de infraestructuras de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Mediante esta iniciativa se han establecido redes avanzadas de comunicación que facilitan la colaboración científica y académica entre instituciones de Europa y América Latina, lo cual promueve el intercambio de conocimientos y la innovación tecnológica.

Además de la UE, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) también es un actor relevante en el escenario internacional. Aunque geográficamente distantes, los países de América Latina y el Caribe han explorado oportunidades de colaboración con la ASEAN en áreas como el comercio, el turismo y la gestión de desastres naturales. La cooperación en infraestructura digital, comercio electrónico y turismo sostenible podría ofrecer beneficios mutuos y promover un mayor intercambio entre las regiones. Asimismo, la colaboración en la gestión de desastres naturales y la adaptación al cambio climático podría ser una prioridad compartida entre los países de América Latina y el Caribe y los del sudeste asiático.

Como muestra el trabajo del SELA (2016), la colaboración entre la ASEAN y América Latina y el Caribe comenzó en la década de 1960 con la creación de organismos de cooperación, cuando iniciativas como el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) y las Conferencias de Comercio y Desarrollo del Pacífico (PAFTAD) sentaron las bases para la colaboración entre las regiones. Posteriormente, en 1980, se estableció el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC), seguido por la creación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 1989. En 1999, se fundó el Foro de Cooperación de América Latina-Asia del Este (FOCALAE) con el propósito de incrementar la colaboración entre ambas regiones y, ya en el nuevo siglo, en 2006, se firmó el Acuerdo Estratégico TransPacífico de Asociación Económica (TPP), un tratado de libre comercio multilateral entre sus miembros. Respecto de los acuerdos bilaterales, todos los miembros de la ASEAN tienen relaciones económicas con América Latina y el Caribe, excepto Myanmar y Laos, mientras que solo el 33 % de los países latinoamericanos y caribeños tienen relaciones con la ASEAN (SELA, 2016). Es importante señalar que estos acercamientos económicos se han dado entre países, no entre mecanismos de integración.

Figura 31

Tratados de libre comercio firmados entre países de América Latina y el Caribe y la ASEAN (hasta el año 2016)

Países	Bru- néi	Mala- sia	Indo- nesia	Singa- pur	Tailan- dia	Vietnam
Chile	2005- 2006	2010- 2012	2014- n.d.**	2005- 2006	2011- 2013*	2011- 2014
Costa Rica				2010- 2013		
México				2000- n.d.**		
Panamá				2006- 2006		
Perú				2008- 2009	2006- 2011	

*El acuerdo fue firmado, pero no se encuentra vigente.

**No Determinado. No se ha concretado la firma del acuerdo, sigue en negociación.

Nota: El primer año indica cuando se comenzó el proceso de negociación del TLC y el segundo el año en que entró en vigencia el acuerdo.

Nota: Análisis de las relaciones económicas de América Latina y el Caribe con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (p. 29), de Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2016, SELA.

Partiendo de lo expuesto, la colaboración entre la ASEAN y esta región no ha sido tan extensa como en otras áreas, pero ha habido algunos programas y proyectos concretos que han marcado el inicio de una relación más estrecha entre ambas. Uno de estos ejemplos es el Foro Asia-América Latina (FEALAC, por su sigla en inglés), una iniciativa diseñada para fortalecer el diálogo y la cooperación en una amplia gama de áreas (comercio, inversión, cultura y educación). A través del FEALAC, se han llevado a cabo reuniones ministeriales y de alto nivel con el fin de discutir temas de in-

terés común y explorar oportunidades de colaboración. Otro proyecto relevante es el APDIM (“Centro de Cooperación Asia-Pacífico para la Gestión de Desastres”), establecido por las Naciones Unidas en Teherán, Irán, en cooperación con la ASEAN y otras organizaciones, que tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los países de Asia y el Pacífico para prepararse y responder a desastres naturales. Aunque no es exclusivamente un programa de colaboración entre la ASEAN y América Latina y el Caribe, el APDIM puede ofrecer un marco para la cooperación en la gestión de desastres naturales entre ambas regiones.

Por otro lado, la colaboración con países extrarregionales, especialmente con potencias mundiales como Estados Unidos, China y Rusia, ha sido objeto de atención en la región. En el primer caso, una de las iniciativas más significativas de colaboración ha sido el Plan Colombia, lanzado en el año 2000. Este programa es una estrategia integral de cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, fortalecer las instituciones estatales y promover el desarrollo económico y social en Colombia, a través del cual Estados Unidos proporciona asistencia económica, militar y técnica para apoyar los esfuerzos del Gobierno latinoamericano en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla. Además, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) también es un importante acuerdo de promoción de la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, y beneficia a las economías latinoamericanas que mantienen relaciones comerciales con estos países.

Por su parte, China ha desempeñado un papel cada vez más significativo en América Latina y el Caribe, especialmente a través de inversiones en infraestructura y proyectos de desarrollo; entre ellas, se encuentran obras como la construcción de puertos, carreteras, ferrocarriles y proyectos de energía. Un ejemplo destacado es la iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta por China en 2013, que busca fortalecer las conexiones comerciales y de infraestructura entre Asia, Europa y

África, pero también ha despertado interés en América Latina y el Caribe. Esta iniciativa ofrece oportunidades de colaboración en proyectos de desarrollo y comercio que pueden beneficiar a ambas regiones.

En lo que respecta a Rusia, si bien su colaboración con la región ha sido menos visible y más limitada que la de otros actores internacionales, ha habido ciertos ámbitos de cooperación, especialmente en energía y defensa, así como en el ámbito energético, donde ha explorado oportunidades en varios países, especialmente en el sector petrolero y de gas.

A medida que el panorama geopolítico y económico continúa evolucionando, es importante mantenerse atento a las oportunidades emergentes y a los nuevos desafíos en el ámbito de la colaboración extrarregional. La diversificación de las relaciones internacionales y el fortalecimiento de los lazos con una variedad de socios contribuyen a la resiliencia y el desarrollo sostenible de la región en un mundo cada vez más interconectado.

Complejidades internas y externas en el camino hacia una integración sólida

La integración regional en América Latina y el Caribe enfrenta un panorama con escenarios que requieren atención y acciones coordinadas por parte de los países que la componen, tanto en el ámbito interno como en relación con otros bloques de integración extrarregionales.

Internamente, precisa de mayor coordinación y coherencia porque la región enfrenta el desafío de lograr una coordinación efectiva entre sus países para implementar estrategias de integración coherentes. La presencia de Gobiernos con agendas políticas y económicas diversas suele dificultar la coordinación y la adopción de políticas comunes en un marco

en el que las diferencias en términos de modelos económicos, regulaciones y prioridades pueden afectar la cohesión regional. También se debe prestar atención a las marcadas desigualdades socioeconómicas entre los países y abordar estas disparidades para lograr una integración que beneficie a todos de manera equitativa y sostenible, considerando que las brechas sociales por las diferencias en niveles de desarrollo, ingresos y acceso a servicios básicos crean tensiones en la implementación de políticas integradoras.

Por otro lado, no se debe dejar de atender a sus problemas de gobernanza, en el sentido de que la eficacia de las instituciones encargadas de la integración puede verse afectada por problemas de gobernabilidad, corrupción y burocracia. Entonces, la salida comienza por mejorar la transparencia y la eficiencia institucional. Finalmente, hay que responder a la falta de recursos financieros y a la dependencia de la financiación externa, hechos que limitan la implementación de proyectos clave para la integración (como la infraestructura regional y los programas de cooperación). Por consiguiente, la movilización de recursos y la búsqueda de fuentes de financiamiento sostenibles son las tareas que América Latina y el Caribe tiene por delante en los próximos años.

En términos de desafíos extrarregionales, hay que mencionar las relaciones con otros bloques con los que se presentan tensiones comerciales, competencia y conflictos de intereses entre sus objetivos, como la Unión Europea, Asia-Pacífico, y Estados Unidos y Canadá. Estas competencias y tensiones comerciales se expresan en diferencias político-económicas, aranceles y regulaciones, conflictos que pueden afectar la posición de América Latina y el Caribe en el escenario global. Otro tipo de dificultad en el ámbito extrarregional se ocasiona con los acuerdos comerciales desiguales, donde la región debe lidiar con negociaciones signadas por una asimetría económica que dificulta lograr acuerdos equitativos.

Además de lo mencionado, no se debe quitar el ojo a la dependencia de la exportación de materias primas, que limita la diversificación económica y la capacidad de la región para competir en mercados internacionales. Dependencia que expone a la región a fluctuaciones en los precios globales y limita la capacidad de diversificación económica, lo cual afecta la resiliencia ante crisis económicas y muestra el nivel de vulnerabilidad económica que persiste. El impacto de las crisis económicas mundiales señala los efectos significativos en la estabilidad económica de la región, que necesita desarrollar una capacidad de recuperación ante tales eventos a fin de mantener el impulso de la integración. Por último, se presentan retos en términos de coordinación en asuntos globales, ya que desafíos como el cambio climático y la pandemia de COVID-19 expusieron la necesidad de contar con una coordinación efectiva entre los países de América Latina y el Caribe y otros bloques para abordarlos de manera conjunta.

Enfrentar estas dificultades implica un compromiso continuo hacia la promoción de políticas que fomenten una integración regional robusta y sostenible, donde la cohesión interna, la mejora de la gobernabilidad, la diversificación económica y la promoción de acuerdos comerciales equitativos y sostenibles a nivel internacional sea el consenso alcanzado. Ello implica, a su vez, fortalecer las instituciones regionales y fomentar la participación ciudadana para superar estos obstáculos.

Conexiones estratégicas: dinámicas de encadenamientos productivos en América Latina y el Caribe

En la búsqueda constante de estrategias que impulsen el crecimiento económico sostenible y la competitividad regional, América Latina y el Caribe se encuentra inmersa en un proceso de reevaluación y fortalecimiento de sus encadenamientos productivos. Estas conexiones estratégicas entre diversos sectores productivos no solo impactan en optimizar la producción y el valor agregado, sino que también su desarrollo allana el camino de la integración económica y la resiliencia frente a desafíos globales. El dinamismo económico actual involucra empresas, sectores y países en una red interconectada donde estos encadenamientos son como su columna vertebral: impulsan la competitividad regional y delimitan los contornos de la especialización productiva.

La concatenación productiva, entendida como la interconexión de empresas y sectores a lo largo de la cadena de valor, ofrece una vía prometedora para la diversificación económica, la especialización competitiva y la generación de empleo en la región. La interrelación entre empresas, sectores y países no solo define la dinámica productiva, sino que también influye en la capacidad de la región para enfrentar los retos globales y capitalizar las oportunidades emergentes. Desde la agricultura hasta la tecnología, las empresas se entrelazan en una serie de relaciones complejas de suministro

y demanda; influyen la eficiencia productiva y, por ende, la capacidad de la región para insertarse favorablemente en la economía global.

Desde 2021, he estado promoviendo proyectos relacionados con cadenas de valor en mi cargo como Secretario Permanente del SELA desde una posición estratégica de liderazgo y coordinación regional. El SELA es una organización que impulsa la integración económica y la cooperación entre sus Estados miembros, y, desde esta perspectiva, trabajamos para fomentar y coordinar proyectos que fortalezcan las cadenas productivas en la región. También brindamos apoyo técnico a los países miembros con el objeto de desarrollar e implementar políticas y estrategias en relación con las cadenas de valor, así como mejorar la logística y la infraestructura portuaria; fomentamos la colaboración entre el sector público y privado para estimular la innovación, la inversión y la transferencia de tecnología en proyectos de cadenas de valor. Además, estamos constantemente monitoreando los proyectos y evaluando su impacto para asegurar que las iniciativas de la cadena de valor sean efectivas y sostenibles. La colaboración entre los países de la región y otros actores es importante a fin de lograr el éxito de dichos proyectos y establecer un futuro más próspero.

El impacto de estas interconexiones va más allá de los balances económicos y se proyecta en la vida cotidiana de las comunidades locales, donde se sienten con mayor fuerza la distribución del ingreso y la generación de empleo. A medida que los encadenamientos productivos se expanden, se presentan nuevas posibilidades para la innovación, la transferencia de tecnología y la creación de empleo de calidad.

Encadenamientos productivos y cadena de valor público

El concepto de encadenamientos productivos permite comprender la interconexión de diversas etapas de producción en

una economía, desde la utilización de materia prima hasta el producto final. Es un proceso que no solo abarca las relaciones entre empresas dentro de un mismo sector, sino también las conexiones entre sectores diferentes que participan en la creación y la transformación de bienes y servicios, y permiten visualizar cómo las actividades económicas se articulan y complementan entre sí, lo cual genera sinergias que impulsan la eficiencia y la competitividad.

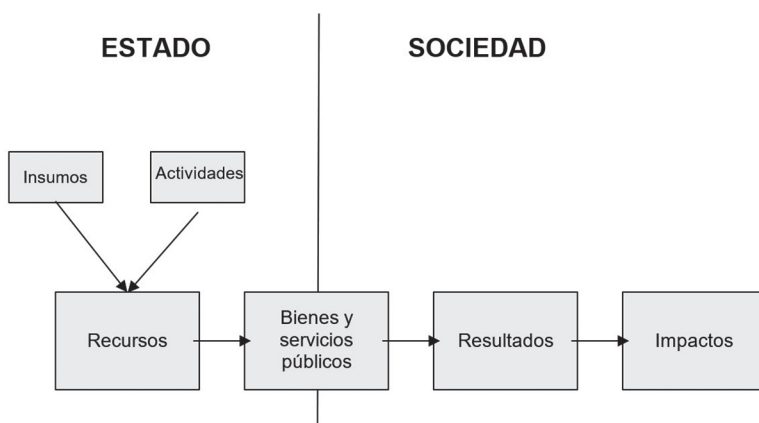
Una de las herramientas clave para analizar los encadenamientos productivos es la cadena de valor público, la cual se enfoca en identificar y promover la integración de proveedores locales en sectores estratégicos para el desarrollo económico. Una cadena de valor público, como explica Campos Ríos (2023), es un modelo conceptual que describe el proceso mediante el cual el Estado crea valor para la sociedad a través de la provisión de bienes y servicios públicos. Es un proceso productivo que ocurre en el interior de la gestión pública y comprende una serie de etapas interconectadas que van desde la asignación de recursos hasta la entrega de productos y servicios a la sociedad, de manera que los recursos son transformados en productos que los ciudadanos consideran que tienen valor y que responden a sus necesidades y demandas.

Se trata de una cadena porque los recursos actúan como insumos, ya sean de índole financieros, humanos o tecnológicos, necesarios para llevar a cabo las actividades del Estado. Estas actividades, según la conceptualización de Campos Ríos (2023), engloban todas las acciones y procesos que el Estado realiza para transformar los recursos en productos y servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de la ciudadanía, productos que pueden ser tanto tangibles (por ejemplo, la infraestructura pública) como intangibles (por ejemplo, los servicios educativos o de salud). Es importante destacar que estos productos no son meros resultados de la gestión pública, sino que representan la materialización del valor que el Estado busca generar para la comunidad (Campos Ríos,

2023). Los resultados se refieren a los efectos inmediatos o directos que los productos y servicios públicos tienen en la sociedad, mientras que los impactos son los efectos a largo plazo o indirectos que contribuyen al bienestar y desarrollo de la comunidad en su conjunto. Esta perspectiva busca maximizar el valor agregado en la producción nacional y fortalecer las capacidades productivas de las empresas locales; así se contribuye a reducir la dependencia de importaciones y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

Figura 32

Cadena de valor público



Nota: Cadenas de valor público y ecosistema digital (p. 34), de M. Campos Ríos, 2023, SELA.

El fomento de los encadenamientos productivos requiere una estrecha colaboración entre el sector público y el privado porque la coordinación efectiva entre ambos actores ayuda a identificar oportunidades de integración en la cadena de valor, así como a implementar políticas y programas que promuevan la participación de los proveedores locales en los procesos productivos. Esta sinergia es de primer orden para superar los desafíos que puedan surgir, como la

falta de infraestructura adecuada o la limitada capacidad de los proveedores locales, puesto que el diálogo constante y la colaboración estratégica entre el Gobierno, las empresas y otros actores relevantes son la clave para crear un entorno propicio para el desarrollo de encadenamientos productivos sólidos y sostenibles.

Por un lado, la adopción de tecnologías avanzadas, como la IA, el IoT y la automatización, mejora la eficiencia de los procesos productivos, reduce los costos y aumenta la calidad de los productos y servicios, de manera que la innovación en productos y procesos abre nuevas oportunidades de mercado y permite a las empresas diferenciarse en un entorno cada vez más competitivo. Por lo tanto, invertir en investigación y desarrollo, así como en la adquisición y aplicación de tecnología de vanguardia, es fundamental para fortalecer la competitividad de los encadenamientos productivos y promover un crecimiento económico sostenible en la región.

Por otro lado, la participación en distintos organismos permite compartir experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas en el ámbito de la integración regional y el desarrollo económico. Esto ayuda a generar consenso sobre los pasos que seguir y a establecer una dirección clara para el grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a la evaluación. Las distintas exposiciones pueden inspirar nuevas iniciativas y enfoques innovadores para abordar los desafíos identificados, lo que contribuye a enriquecer el proceso de integración regional. La necesidad de ensamblar y articular las diversas iniciativas regionales para avanzar hacia cadenas regionales de valor se debe a que la integración efectiva requiere una coordinación estratégica y una colaboración estrecha entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo económico y comercial. Las iniciativas dispersas y fragmentadas pueden limitar el impacto y la eficacia de los esfuerzos en esa trayectoria, ya que generan duplicación de esfuerzos, solapamiento de recursos y falta de coherencia en las políticas y estrategias implementadas.

En contraste, al ensamblar y articular estas iniciativas, se crea un marco más coherente y holístico para promover el desarrollo de cadenas regionales de valor, pues se aprovechan las sinergias entre los diferentes programas y proyectos. Esto facilita la movilización de recursos, la identificación de áreas de colaboración prioritarias y el establecimiento de vínculos más sólidos entre los distintos sectores económicos y agentes regionales; de esta manera, se contribuye a fortalecer la integración económica y promover un crecimiento más inclusivo y sostenible en la región.

Identificación y desarrollo de nichos productivos

La identificación y explotación de nichos productivos es uno de los aspectos más importantes del desarrollo económico de las naciones, como lo señalan los trabajos del SELA en la materia (SELA, 2023c). Estos nichos productivos, considerados como bienes, servicios o sectores con la capacidad distintiva de ser aprovechados, permiten utilizar las ventajas comparativas y las complementariedades entre sectores económicos. Para facilitar su estudio y análisis, el SELA ha desarrollado una metodología propia para identificarlos (SELA, 2023c); así, se ha logrado, bajo mi gestión, ampliar este estudio a más de quince países de la región. Según Del Villar (2016), se necesita construir una articulación productiva entre diferentes sectores de la economía dentro de un país para generar crecimiento económico a través de la propagación del cambio tecnológico y la mejora de la productividad y la competitividad.

Una vez identificados, el desarrollo de estos nichos productivos requiere la implementación de políticas y estrategias específicas, abanico de acciones que van desde incentivos fiscales y financieros para fomentar la inversión en sectores estratégicos hasta programas de capacitación y desarrollo

de habilidades para mejorar la calidad y la productividad de la fuerza laboral (SELA, 2023c). También se necesita fomentar la inversión en investigación y desarrollo a fin de impulsar la innovación y la mejora continua en los productos y procesos para que los países mantengan su ventaja competitiva a largo plazo.

La colaboración público-privada es otro de los factores que tener en cuenta en el desarrollo de nichos productivos, pues permite una distribución eficiente de recursos y conocimientos. Los Gobiernos desempeñan un papel facilitador al proporcionar un entorno regulatorio favorable, infraestructura adecuada y acceso a financiamiento, mientras que las empresas aportan experiencia sectorial, capital humano y capacidad de inversión; ello constituye una asociación estratégica que crea un ecosistema propicio para la innovación y el crecimiento empresarial, lo que impulsa el desarrollo de nichos productivos.

Para la recuperación y el crecimiento económico de los países, se deben trabajar la integración y la articulación productiva en la región; con el objeto de lograrlo, se propone una metodología que se centra en dos enfoques complementarios: el análisis del empleo y el análisis de las exportaciones (SELA, 2023c).

Por un lado, el enfoque del empleo permite identificar industrias relevantes en unidades subnacionales de un país, considerando su complejidad y su potencial para generar puestos de trabajo. Se aplica a diferentes divisiones políticas, lo que brinda flexibilidad para evaluar capacidades productivas en sectores como agricultura, ganadería y manufactura. Por otro lado, el enfoque de las exportaciones busca reconocer oportunidades para bienes específicos, teniendo en cuenta las capacidades productivas regionales e identificando bienes y sectores con ventajas comparativas para integrar la cesta exportadora.

Ambos enfoques utilizan una metodología con variables de complejidad económica, calculan el margen intensivo y el margen extensivo, y determinan la densidad espacioproducto para medir ventajas comparativas implícitas. El margen intensivo examina la relación entre el crecimiento del empleo industrial y la densidad, mientras que el extensivo analiza la probabilidad de aparición y desaparición de productos según las capacidades de los países vecinos. Esta metodología identifica y evalúa nichos productivos para fomentar la integración y la articulación regional, proporciona una visión holística de las capacidades productivas y la competitividad, y facilita el desarrollo de alianzas estratégicas, hecho que robustece los encadenamientos productivos. Para realizar este análisis, se requiere información estadística detallada sobre producción, exportaciones y empleo por región e industria, que enriquece las estimaciones y fortalece la identificación de nichos productivos potenciales.

Una vez identificados, el desarrollo de estos nichos requiere la implementación de estrategias específicas: por ejemplo, incluir la promoción de clústeres industriales que reúnan empresas relacionadas en una misma área geográfica para fomentar la colaboración y la innovación, o crear parques tecnológicos que faciliten la concentración de empresas de alta tecnología a fin de promover la investigación y el desarrollo. La colaboración público-privada, como se aprecia, puede ayudar a superar barreras y proporcionar recursos adicionales.

La especialización en nichos productivos aporta una mayor eficiencia en la producción y la posibilidad de posicionarse como líder o experto en un área específica. A la vez, permite la concentración de recursos en sectores donde se tiene una ventaja competitiva clara y la colaboración dentro de comunidades o redes especializadas (SELA, 2023c). Según Huerta (2011), esta estrategia contribuye al incremento de la productividad y de las ventajas competitivas, lo cual impulsa el desarrollo de las regiones económicas.

No obstante lo expuesto, la explotación de nichos productivos también presenta situaciones conflictivas que hay que resolver. La competencia limitada en un nicho específico puede hacer que una empresa sea más vulnerable a los cambios en el mercado, mientras que la especialización excesiva tiende al riesgo de obsolescencia frente a avances tecnológicos rápidos (SELA, 2023c). Además, gestionar nichos estacionales y adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado requiere una planificación cuidadosa y una inversión continua en investigación y desarrollo (SELA, 2023c).

La estrategia debe pasar, entonces, por desarrollar nichos de manera sostenible, considerando aspectos ambientales, sociales y económicos a largo plazo. Esto implica adoptar prácticas de producción limpia que minimicen el impacto ambiental, así como impulsar el empleo decente e incluir a grupos marginados en la cadena de valor. Un enfoque holístico que equilibre el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y el bienestar social es determinante para garantizar la viabilidad a largo plazo. Asimismo, se debe considerar que la falta de financiamiento, la escasez de habilidades especializadas y las barreras comerciales pueden dificultar el proceso, por lo que superar estos desafíos requiere un compromiso firme por parte de los Gobiernos, así como la colaboración entre el sector público y privado para identificar soluciones efectivas.

Con el objeto de llevar a cabo un correcto desarrollo en el mapeo y la explotación de estos nichos, es importante realizar evaluaciones periódicas del impacto de las políticas y estrategias implementadas. Estas evaluaciones permiten a los países ajustar sus enfoques según sea necesario y maximizar los resultados positivos en vista de que su tarea es proporcionar información valiosa para futuras iniciativas de desarrollo económico y contribuir a la creación de políticas más efectivas y centradas en los resultados.

Por último, también se debe poner el foco en el diseño de políticas públicas adecuadas para fomentar el desarrollo de nichos productivos, así como evaluar constantemente su efectividad y realizar ajustes según sea necesario (SELA, 2023c). Desde mi lugar como Secretario Permanente, he buscado la colaboración entre empresas, instituciones educativas y organizaciones relevantes en la industria, ya que ello facilita la transferencia de conocimientos y recursos.

Figura 33

Resumen de la metodología propuesta por el SELA para el mapeo de nichos productivos

Enfoques	Centrado en el empleo como variable determinante que parte del número de empleados activos del área geográfica como objeto de estudio, clasificados por industria, región y tiempo.	Centrado en el valor de las exportaciones del área geográfica bajo estudio y sus principales socios comerciales, clasificadas por tipo de producto o industria, durante el período de estudio.
Pasos	<p>Generación de las variables de complejidad económica, principalmente aquellas que se derivan de la obtención de las ventajas comparativas reveladas, la matriz de presencia-ausencia y la matriz de proximidad tecnológica, y forman parte del cálculo del Índice de Complejidad Económica.</p> <p>Cálculo del margen intensivo que tiene como propósito medir la relación entre el crecimiento del empleo industrial y la densidad, utilizando una regresión lineal de tipo logarítmica.</p> <p>Cálculo del margen extensivo que implica un análisis dinámico que estudia el papel de los vecinos en la capacidad de los países para agregar un producto particular a su canasta de exportación o para expandir su ventaja comparativa.</p>	

Nota: Mapeo de Nichos Productivos en América Latina y el Caribe: Experiencias y Lecciones Aprendidas (p. 46), de Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2023, SELA.

Integración logística y de puertos

La integración de puertos favorece el comercio internacional y la eficiencia de la cadena de suministro en América Latina y el Caribe; esto se logra mediante la coordinación y conexión de puertos marítimos, fluviales y terrestres para optimizar el movimiento de mercancías y reducir los costos logísticos. Los puertos son nodos clave en la cadena de suministro global, ya que sirven como puntos de entrada y salida para las mercancías que se mueven a través de las redes comerciales internacionales. Por tanto, su integración allana la transferencia fluida de carga entre diferentes modos de transporte, como barcos, trenes y camiones, lo que permite más eficiencia y rapidez en la entrega de productos.

Una mayor conectividad portuaria reduce significativamente los costos logísticos al minimizar los tiempos de espera, los retrasos en el transporte y los costos de almacenamiento; a su vez, mejora la eficiencia operativa al permitir la consolidación de cargas, la coordinación de horarios y el uso de tecnologías avanzadas de gestión portuaria. Por otra parte, aumenta la competitividad de las exportaciones al reducir los tiempos de tránsito y los costos de transporte, lo cual ocasiona que los productos sean más atractivos en los mercados internacionales y permite abrir nuevas oportunidades comerciales para los productores locales. Una logística más eficiente ayuda a las empresas a cumplir con los plazos de entrega y a mejorar su reputación en el mercado global.

En América Latina y el Caribe, se han implementado varias iniciativas para promover la integración logística y de puertos, entre ellas los corredores logísticos que conectan puertos marítimos con centros de producción y zonas de almacenamiento. Asimismo, se han desarrollado proyectos de infraestructura de transporte, como carreteras y ferrocarriles, para mejorar la accesibilidad a los puertos y agilizar el transporte de carga. También se han llevado adelante iniciativas de integración logística que han tenido un impacto significativo en

el comercio y la economía local gracias a un aumento en el volumen de comercio internacional, así como una mayor diversificación de las exportaciones. La mejora de la eficiencia logística ha contribuido al crecimiento económico, pues reduce los costos de producción y aumenta la competitividad de las empresas en el mercado global.

En este sentido, el proyecto Red Puertos Digitales y Colaborativos emerge como una propuesta destinada a actuar sobre la infraestructura portuaria y la logística en América Latina y el Caribe. Su objetivo principal es modernizar las operaciones portuarias mediante la implementación de TIC encaminadas hacia la creación de una red de *puertos inteligentes*. Esta visión busca no solo optimizar los procesos internos de los puertos, sino también promover una mayor eficiencia en la cadena de suministro regional para impulsar la competitividad del comercio exterior en la región. Desde sus inicios, el proyecto se ha centrado en eliminar los obstáculos tradicionales de los procesos basados en papel y en adoptar soluciones digitales que agilicen las operaciones portuarias. Este enfoque se alinea con las tendencias globales de digitalización y responde a la necesidad imperante de mejorar la conectividad y la eficiencia logística.

La transición hacia *puertos inteligentes* implica, por un lado, implementar tecnologías avanzadas y, por otro, crear una red colaborativa que permita la interoperabilidad entre los diferentes puertos de la región. Respaldado por el SELA y con el apoyo de instituciones financieras, como el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el proyecto ha logrado un progreso significativo desde su concepción; actualmente, cuenta con la participación de doce países y veintiocho comunidades logísticas en toda la región, lo que demuestra un compromiso compartido con la modernización y la mejora continua de la infraestructura portuaria. Este esfuerzo colaborativo busca mejorar la eficiencia operativa de los puertos, a la vez que sienta las bases para una mayor integración económica y una cooperación regional

más estrecha en un contexto donde la digitalización y la conectividad son fundamentales para el crecimiento económico y la competitividad global. La Red representa un paso significativo hacia el futuro de la logística regional.

Resiliencia y recuperación económica

Durante situaciones de crisis, como epidemias o desastres naturales, los encadenamientos productivos permiten construir resiliencia económica, sobre todo en los países de América Latina y el Caribe. Estos encadenamientos se refieren a las interconexiones entre distintos sectores económicos, lo que significa que una interrupción en un sector puede tener efectos significativos en toda la cadena de producción y suministro.

Su influencia en la resiliencia económica va de la mano de una estructura productiva diversificada y conectada; el fin es ayudar a mitigar los impactos negativos de una crisis al permitir que las empresas cambien rápidamente su enfoque de producción hacia sectores menos afectados. Una dependencia excesiva de ciertos proveedores o mercados, por su parte, aumenta la vulnerabilidad ante eventos adversos. Para fortalecer esta resiliencia, se necesita implementar estrategias que promuevan la diversificación y la flexibilidad en los encadenamientos productivos, incluidas la diversificación de mercados y proveedores, la inversión en infraestructura que resista y se recupere rápidamente de desastres naturales, y la promoción de la innovación tecnológica para mejorar la eficiencia y la adaptabilidad de las empresas.

La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba las economías de una manera sin precedentes. La interrupción de las cadenas globales de suministro, las restricciones comerciales y la caída en la demanda ocurridas como efecto de las medidas tomadas por los Gobiernos para contener el avance del virus han afectado significativamente diversos sectores

económicos en la región. Sin embargo, aquellos países con una estructura productiva más diversificada y conectada han demostrado una mayor capacidad para resistir y adaptarse a los impactos de la pandemia. De esta manera, queda en evidencia la importancia de fortalecer la resiliencia económica durante una crisis sanitaria a través de la promoción de encadenamientos productivos más robustos y flexibles, así como de la inversión en infraestructura de salud y tecnología digital para facilitar la continuidad de las operaciones comerciales.

También es importante señalar que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha suscitado preocupaciones respecto de la estabilidad económica y la capacidad de recuperación en la región. Esto ha dado como resultado un aumento en los precios de los hidrocarburos, que ha beneficiado a los exportadores y ha perjudicado a los importadores netos, como es el caso de los países agrícolas. El impacto varía según la situación específica de cada nación: si bien algunos países fueron favorecidos al experimentar una suba considerable de los precios de los productos que exportan debido a la reducción en las exportaciones de Ucrania, aquellos que dependen en gran medida de la importación de energía no se beneficiaron en la misma medida; de esta forma, los “beneficios” obtenidos podrían verse compensados por un déficit energético. Además, los países cuya base económica se sustenta en la exportación de minerales fueron especialmente afectados, dado que, si bien los precios de estos productos se mantuvieron relativamente estables, el aumento significativo en las importaciones de productos agrícolas y energía contribuyó a un deterioro en su balanza comercial. En este contexto, la diversificación de socios comerciales y la búsqueda de oportunidades de cooperación económica intrarregional pueden hacer la diferencia en la mitigación de los riesgos asociados con eventos geopolíticos externos; así se fortalece la resiliencia de las economías locales.

Cooperación financiera y remesas

La cooperación financiera internacional fortalece los encadenamientos productivos en América Latina y el Caribe a través del financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo empresarial, ya que los flujos de capital provenientes de organismos multilaterales, bancos de desarrollo y otras instituciones financieras internacionales tienen la capacidad de catalizar la creación y expansión de cadenas de valor locales. Este apoyo financiero no solo proporciona recursos para mejorar la capacidad productiva y competitiva de las empresas regionales, sino que también fomenta la integración económica y comercial entre países, lo que facilita la articulación de encadenamientos productivos transfronterizos.

Por otro lado, en muchos países, las remesas representan una parte considerable del ingreso nacional, ya que, cuando se invierten de manera efectiva, permiten financiar la creación o expansión de pequeñas y medianas empresas, estimular el emprendimiento y promover la innovación en sectores estratégicos; y todo ello impacta en la economía regional.

Es importante destacar que existen programas e iniciativas específicas destinadas a promover la inversión de remesas en proyectos productivos, como los fondos de inversión que han implementado algunos países o líneas de crédito especiales dirigidas a emprendedores y microempresas financiadas con remesas. Mientras estos programas proporcionan acceso a capital para iniciativas y ofrecen capacitación y asistencia técnica para mejorar las habilidades empresariales y la gestión financiera, el efecto multiplicador de las inversiones de remesas tiene un impacto significativo en la economía local: genera empleo, aumenta la productividad y estimula el crecimiento económico de manera sostenible.

Ahora bien, la cooperación financiera internacional, además, fortalece las instituciones locales y el desarrollo de este sector en general: a través de programas de asistencia técnica

y capacitación, los bancos locales mejoran sus capacidades para otorgar préstamos a pequeñas y medianas empresas, de manera que se facilita el acceso al crédito y se estimula la inversión en actividades productivas. Del mismo modo, la promoción de marcos regulatorios sólidos y transparentes crea un entorno propicio para la inversión extranjera y el desarrollo del mercado de capitales, lo que, a su vez, contribuye al crecimiento económico y al fortalecimiento de los encadenamientos productivos.

En cuanto a las remesas, su impacto va más allá de la mera transferencia de fondos. Algunos programas gubernamentales y organizaciones no gubernamentales han implementado iniciativas para aprovechar el potencial de estas transferencias como instrumento de desarrollo y han establecido fondos de garantía o líneas de crédito respaldadas para facilitar que grupos vulnerables accedan al crédito, como mujeres emprendedoras o comunidades rurales. Se trata de acciones que promueven la inclusión financiera y fortalecen los lazos entre la diáspora y sus comunidades de origen; así se fomenta un mayor compromiso y contribución al desarrollo local.

Por último, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y otros eventos globales disruptivos, el papel de las remesas en la estabilidad económica y la resiliencia ha ganado mayor relevancia. Durante momentos de crisis, las remesas actúan como un amortiguador y proporcionan un flujo constante de ingresos que ayuda a mitigar los impactos negativos en las familias y comunidades receptoras. Sin embargo, también se deben reconocer los desafíos que enfrentan los trabajadores migrantes en tiempos de crisis, como la pérdida de empleo o la reducción de salarios, lo que puede afectar negativamente la cantidad y el valor de las remesas enviadas.

Figura 34*Cooperación financiera internacional y remesas*

Aspecto	Cooperación financiera internacional	Remesas
Origen de los fondos	Organismos multilaterales, bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales.	Enviadas por trabajadores migrantes a sus países de origen.
Destino de los fondos	Financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo empresarial, fortalecimiento de instituciones financieras locales.	Inversión en pequeñas y medianas empresas, emprendimiento, estimulación de la innovación.
Programas e iniciativas	Fondos de inversión, líneas de crédito especiales, asistencia técnica y capacitación.	Fondos de garantía, líneas de crédito respaldadas por remesas, programas de inclusión financiera.
Impacto económico	Generación de empleo, aumento de la productividad, estimulación del crecimiento económico.	Estímulo al emprendimiento, crecimiento sostenible, contribución al desarrollo local.
Resiliencia y estabilidad	Fortalecimiento de encadenamientos productivos, integración económica y comercial.	Amortiguador en tiempos de crisis, mitigación de impactos negativos en las comunidades receptoras.
Desafíos y consideraciones	Necesidad de asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos, garantizar la sostenibilidad de los proyectos.	Vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a eventos adversos, impacto en las remesas ante crisis económicas globales.

Nota: elaboración propia.

Ciberdiplomacia: la diplomacia en la era digital

La diplomacia ha experimentado una evolución significativa en el contexto digital, donde las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han transformado la manera en que los Estados interactúan y colaboran. América Latina y el Caribe no ha sido la excepción, dado el potencial de las TIC para superar barreras geográficas y facilitar el intercambio de información y recursos. En este escenario, la ciberdiplomacia surgió como una herramienta que permitió a los países adaptarse a las demandas de un mundo digital y promover la convergencia de la región al aprovechar las tecnologías digitales; ello hizo posible que los Estados fortalecieran la cooperación regional, mejoraran la eficiencia en la gestión de asuntos internacionales y construyeran una identidad común basada en valores compartidos y objetivos comunes.

La ciberdiplomacia se enfoca en la regulación del ciberespacio, la ciberseguridad y la gobernanza digital (Barrinha y Renard, 2017; Riordan, 2019); su objetivo principal es proteger los intereses nacionales en el ámbito digital y abordar desafíos como la seguridad cibernética. Es preciso distinguir entre la ciberdiplomacia y la e-diplomacia: la primera incluye la regulación del ciberespacio, la lucha contra delitos cibernéticos y la cooperación internacional en ciberseguridad; la segunda, además de tener las mismas incumbencias que la ciberdiplomacia, abarca el intercambio de información, la gestión de datos, la colaboración en línea, y busca adaptarse a las

transformaciones tecnológicas para facilitar la colaboración transnacional. Las aplicaciones de la e-diplomacia incluyen el intercambio de información entre Estados, la gestión de datos y la colaboración en línea en diversos ámbitos. En cuanto a la diplomacia digital, se distingue de la ciberdiplomacia y de la ediplomacia en que se centra en el uso de plataformas digitales para promover la comunicación y la cooperación entre actores internacionales, con el propósito de modernizar prácticas diplomáticas tradicionales y mejorar la eficiencia y la transparencia en las relaciones. Sus aplicaciones incluyen el uso de redes sociales y plataformas en línea para promover el diálogo diplomático y fomentar la participación ciudadana.

Figura 35

Tabla comparativa entre ciberdiplomacia, e-diplomacia y diplomacia digital

Aspecto	Ciberdiplomacia	E-diplomacia	Diplomacia digital
Características distintivas	Se enfoca en la regulación del ciberespacio, ciberseguridad y gobernanza digital.	Engloba intercambio de información, gestión de datos y colaboración <i>online</i> .	Usa plataformas digitales para promover la comunicación y cooperación entre actores internacionales.
Objetivos	Proteger intereses nacionales en el ciberespacio, abordar la ciberseguridad y la gobernanza.	Adaptarse a las transformaciones tecnológicas, facilitar la colaboración transnacional.	Modernizar prácticas diplomáticas tradicionales, mejorar la eficiencia y transparencia.

Aplicaciones	Regulación del ciberespacio, lucha contra delitos cibernéticos, cooperación internacional en ciberseguridad.	Intercambio de información entre Estados, gestión de datos, colaboración <i>online</i> .	Uso de redes sociales, plataformas en línea para promover diálogo diplomático, participación ciudadana.
---------------------	--	--	---

Nota: Manual de Ciberdiplomacia para la Convergencia Regional, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2024, SELA.

Al impulsar valores compartidos y objetivos comunes entre los países latinoamericanos y caribeños, la ciberdiplomacia también aporta a la construcción de una identidad común en la región. Cuando los Estados aprovechan las herramientas digitales, fortalecen la cohesión regional y enfrentan desafíos comunes, como la seguridad cibernética, la gobernanza y la protección de los derechos humanos en el ciberespacio.

La relevancia de la ciberdiplomacia en el siglo XXI y su contribución a la integración regional

Las nuevas tecnologías y el internet han transformado el panorama diplomático global al facilitar la colaboración y el intercambio de información entre los países de la región. En este sentido, la ciberdiplomacia surgió con el objetivo de, entre otras cuestiones, fortalecer la cooperación y la integración regional, aprovechando las ventajas que ofrece el entorno digital para lograr una mejor y más adecuada regulación del ciberespacio. Los países latinoamericanos y caribeños han reconocido la importancia de trabajar de manera conjunta para enfrentar amenazas transnacionales como los ciberataques y la ciberdelincuencia, situación que promueve la integración regional a partir de la coordinación en materia de seguridad

cibernética. A través de iniciativas de ciberdiplomacia, como la colaboración en el intercambio de inteligencia y el desarrollo de normas comunes en seguridad, han logrado fortalecer su capacidad de respuesta y defensa, lo cual ha hecho que la región sea más segura (Vega, 2023; SELA, 2024).

En tal sentido, es importante destacar cómo estas herramientas han facilitado la participación ciudadana y la diplomacia pública en la era de la información, en la que los ciudadanos tienen fácil acceso a plataformas en línea y redes sociales, y la capacidad de participar en los asuntos internacionales a través de ellas. La ciberdiplomacia ha permitido a los países de la región involucrar de manera más activa a la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones diplomáticas; así se consigue más transparencia, legitimidad y representatividad en la formulación de políticas regionales.

Cabe resaltar además que la ciberdiplomacia puede contribuir a la construcción de una identidad común en América Latina y el Caribe a través del intercambio de experiencias, valores y conocimientos en el ámbito digital. Gracias a ello, los países de la región han fortalecido sus lazos de cooperación y solidaridad, lo que implica una mayor unidad y cohesión en la búsqueda de objetivos compartidos relacionados con el entorno digital. La ciberdiplomacia no solo ha facilitado la convergencia en temas como la ciberseguridad y la gobernanza digital, sino que también promueve la difusión de la cultura, la historia y las tradiciones de la región en el escenario internacional; como consecuencia, se reafirma la identidad latinoamericana y caribeña en la web, cuestión fundamental en el proceso de integración regional.

El interés y el compromiso por abordar la ciberdiplomacia y la ciberseguridad fueron en aumento, aunque la región aún se encuentra en proceso de desarrollo en términos de regulaciones y programas específicos en este ámbito. Tanto a nivel regional como nacional, se han observado progresos interesantes, por ejemplo, con la OEA y su rol en el trata-

miento de temas relacionados con la ciberseguridad y la gobernanza del ciberespacio. A través de diversas iniciativas, conferencias y programas de capacitación, este organismo ha buscado fortalecer la cooperación entre los Estados miembros en áreas como la protección de infraestructuras críticas y la respuesta coordinada a amenazas cibernéticas transnacionales (Vega, 2023).

A diferencia de la postura de la OEA, que prioriza un enfoque orientado a la seguridad en sus acciones relacionadas con el ciberespacio, diversas instituciones regionales como el Mercosur, la Alianza del Pacífico, en Sudamérica, y el SICA, en Centroamérica, se centran en aspectos económicos y comerciales (Vega, 2023). Recientemente, estos principales bloques de integración regional han establecido iniciativas dedicadas al ciberespacio, incluso como parte de sus respectivas agendas digitales institucionales, que se enfocan en una perspectiva económica y privada, dirigida a aprovechar las TIC y la transformación digital para impulsar la gestión pública y empresarial (Vega, 2023). Asimismo, el SELA ha estado activamente involucrado en la capacitación de actores clave sobre la ciberdiplomacia en colaboración con el Instituto Europeo de Estudios Internacionales (IEEI) y la Universidad Pontificia de Salamanca (España), lo que lo posiciona como una de las figuras principales en esta área en la región (SELA, 2024). A nivel nacional, varios países han establecido estrategias y entidades especializadas en ciberseguridad para fortalecer la protección de infraestructuras críticas y promover la concienciación en este ámbito, a la vez que se han firmado acuerdos para facilitar la colaboración en la lucha contra el ciberdelito y compartir información relevante.

Sin embargo, a pesar de estos avances, la región enfrenta la necesidad de desarrollar capacidades técnicas y humanas especializadas en ciberseguridad y fortalecer la cooperación regional para hacer frente a las nuevas amenazas y desafíos del ciberespacio. Además, la armonización de marcos normativos y la protección de derechos fundamentales en el

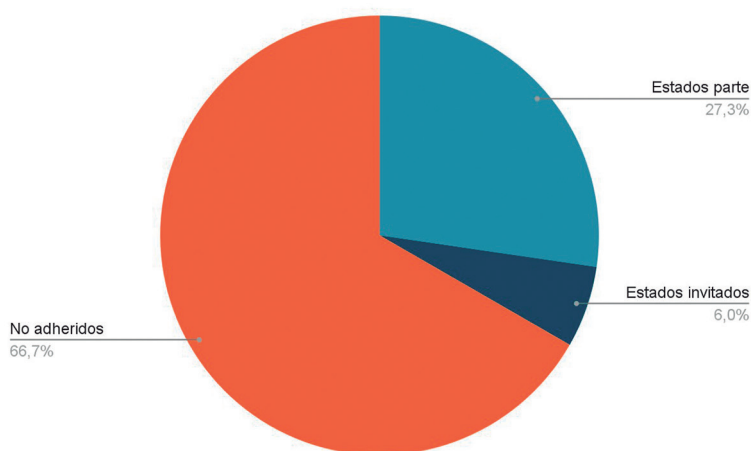
entorno digital continúan siendo áreas que requieren atención y debate profundo.

Desarrollo de normas y regulaciones en el ciberespacio y su impacto en la integración regional

Como docente de pregrado y posgrado en Derecho Internacional, he apreciado cómo la ciberdiplomacia y la diplomacia digital han avanzado en los últimos años, y se ha explicitado la necesidad de regulaciones sobre la web. Los esfuerzos internacionales para establecer normas y regulaciones en el ciberespacio han sido fundamentales en el contexto de la creciente interconexión global y la omnipresencia de la tecnología. La adopción de estándares internacionales, como el Convenio de Budapest de 2004 sobre delitos cibernéticos, al cual han adherido algunos países de la región, representa un paso importante hacia la armonización de políticas y leyes en América Latina y el Caribe.

Figura 36

Porcentaje de países de la región adheridos o invitados a la Convención de Budapest



Nota: Manual de Ciberdiplomacia para la Convergencia Regional, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2024, SELA.

El aporte de los países de la región en estos esfuerzos contribuye a la convergencia regional y al desarrollo de políticas cohesivas en materia de ciberseguridad y gobernanza digital. Si bien algunos Gobiernos adoptaron un enfoque proactivo, participando en la formulación de estándares, otros han optado por un enfoque más reactivo, ajustándose a las normas propuestas por los organismos internacionales. Es necesario que todos los países de la región se involucren en este proceso para garantizar que las normas sean adaptadas a las realidades regionales y que se fortalezca la cooperación en la lucha contra las amenazas cibernéticas compartidas.

También es importante destacar el papel de los diálogos multilaterales y las conferencias regionales en la armonización de políticas y leyes en el ciberespacio. Estos espacios ofrecen oportunidades para intercambiar experiencias e identificar áreas de cooperación, lo que facilita la convergencia de enfoques y la construcción de consensos. Uno de los principales desafíos para fortalecer la integración regional en materia de ciberseguridad y gobernanza digital radica en la diversidad de realidades socioeconómicas y tecnológicas; esto vuelve la mirada sobre la brecha digital y la falta de capacidades técnicas especializadas, lo que representa obstáculos significativos que deben ser abordados mediante la colaboración y el intercambio de mejores prácticas entre los países.

A pesar de estos desafíos, existen oportunidades para fortalecer la integración regional a través de acuerdos y compromisos en materia de ciberseguridad y gobernanza digital que deben enfocarse en la creación de grupos de trabajo y mecanismos de coordinación, como las agendas digitales de algunos organismos, que permiten promover la cooperación y el intercambio de información. Además, iniciativas como SICA Digital y el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe, del BID y la OEA, contribuyen a mejorar las capacidades técnicas y la coordinación en la región, poniendo el foco en la necesidad de regulación del ciberespacio y las normativas vigentes en los distintos países para tal fin

La ciberseguridad y su importancia para la integración regional

Las amenazas cibernéticas y los ataques informáticos representan desafíos significativos en el contexto de la integración regional en América Latina y el Caribe. Como señala el manual del SELA (2024), estas amenazas pueden afectar a múltiples países y sectores, ya que los ataques dirigidos a infraestructuras críticas, como sistemas de energía y servicios financieros, así como las campañas de desinformación y difusión de *fake news*, ponen en peligro la estabilidad y la confianza en la región.

En este sentido, la cooperación entre los países se vuelve imperativa para proteger sus sistemas de información y fortalecer la resiliencia cibernética. Como menciona Vega (2023), iniciativas como el programa de la OEA y los grupos de trabajo regionales facilitan el intercambio de información, la capacitación y la colaboración en respuesta a incidentes cibernéticos. Tales mecanismos de cooperación permiten a los países compartir mejores prácticas, identificar vulnerabilidades comunes y desarrollar estrategias conjuntas para hacer frente a las amenazas emergentes.

No obstante, la protección contra las amenazas cibernéticas no solo implica la colaboración entre los países, sino también la cooperación con empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, pues estas tienen la capacidad de detectar y mitigar ataques cibernéticos, además de difundir buenas prácticas de ciberseguridad. Por lo tanto, la integración de estos actores en los esfuerzos regionales de ciberseguridad es esencial para fortalecer la protección de los sistemas de información y garantizar la seguridad digital; ello, sumado a la cooperación técnica y financiera, fomenta la construcción de una comunidad de confianza cibernética regional que tiende hacia la transparencia y la confianza mutua.

Al trabajar juntos para abordar las amenazas cibernéticas compartidas, los países desarrollan relaciones de colaboración y solidaridad que se extienden a otros aspectos de la integración regional, como el comercio, la inversión y la cooperación económica. La confianza resultante de la colaboración en ciberseguridad sirve como base para la construcción de alianzas estratégicas en áreas clave; de esta manera, es posible impulsar el desarrollo sostenible y la prosperidad en toda la región.

Figura 37

Tipos de amenazas cibernéticas en América Latina y el Caribe

Tipo de amenaza	Descripción	Ejemplos específicos	Impacto potencial
Ciberataques	Acciones maliciosas dirigidas a comprometer sistemas o datos.	Ataques a infraestructuras críticas: energía, finanzas, salud.	Interrupción de servicios, pérdida económica, daño reputacional.
Ciberespionaje	Obtención de información confidencial a través de actividades encubiertas.	Espionaje industrial, robo de información gubernamental.	Pérdida de propiedad intelectual, compromiso de seguridad nacional.
Desinformación	Distribución de información falsa o engañosa para influir en opiniones o decisiones.	Campañas de desinformación durante procesos electorales, difusión de <i>fake news</i> .	Desconfianza pública, polarización social, afectación de la democracia.
<i>Ransomware</i>	Software malicioso que bloquea el acceso a datos y exige un rescate para su liberación.	Ataques a empresas, entidades gubernamentales: cifrado de datos y demanda de pago.	Pérdida económica, interrupción de operaciones, daño reputacional.

Nota: Manual de Ciberdiplomacia para la Convergencia Regional, del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 2024, SELA.

Protección de datos y derechos humanos en el ciberespacio

En el contexto de la integración regional, las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos son cuestiones sobre las cuales debe versar el intercambio de información entre países. Este asunto se sitúa en el corazón de los derechos humanos, en particular en el resguardo de la autonomía, la dignidad y las libertades fundamentales de las personas en el entorno digital (SELA, 2024). El intercambio de información entre países implica inevitablemente la transferencia de datos personales y sensibles. Se resalta, así, la importancia de la privacidad en línea como un derecho humano básico que debe ser protegido en todo momento, en el contexto donde la información que los usuarios vierten en distintas plataformas y redes es utilizada con fines comerciales por las empresas involucradas en esas redes.

La falta de garantías adecuadas de privacidad y protección de datos puede socavar la confianza entre los países y obstaculizar la cooperación en diversos ámbitos. Esto acarrea un daño, dado que la cooperación internacional y regional es esencial para fortalecer la protección de la privacidad en el ciberespacio; esto se logra gracias a la promoción de estándares comunes y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la implementación efectiva de los derechos humanos y del derecho internacional en general en todas las actividades y operaciones en el mundo digital (SELA, 2024).

Por lo tanto, para promover una integración regional efectiva y sostenible, se necesita que los países trabajen juntos a fin de establecer marcos normativos y regulatorios sólidos que armonicen la ciberseguridad con el respeto a la privacidad y la protección de datos personales. En ese sentido, es pertinente desarrollar espacios donde representantes de los Estados compartan distintas experiencias y casos de éxito, e intercambien información sobre buenas prácticas; entre ellas, adoptar leyes de protección de datos robustas e impulsar la cooperación internacional y regional en materia de cibersegu-

ridad y protección de información. Solo mediante un enfoque colaborativo y centrado en los derechos humanos, se podrán abordar de manera adecuada las preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos en el contexto de la integración regional.

Proteger los derechos humanos en el ciberespacio es un consenso que difícilmente encuentre objetores. Dada esta necesidad, la ciberdiplomacia se presenta como un mecanismo para armonizar, a través de normas y principios comunes, la innovación y el desarrollo en el área tecnológica con los derechos humanos en el mundo digital (SELA, 2024). En el contexto regional, la falta de salvaguardias adecuadas podría minar la estabilidad y la seguridad en línea, y afectar la integración regional en otros ámbitos, motivo que lleva a la necesidad de promover enfoques que formulen políticas y estrategias en el ciberespacio, y se basen en los derechos humanos. Esto implica no solo establecer normas y regulaciones que protejan la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en línea, sino también impulsar una cultura de ciberseguridad que respete la dignidad y la autonomía de los individuos. Además, es ineludible trabajar en el fomento de la cooperación internacional y regional en materia de protección de derechos humanos en el ciberespacio, y promover el intercambio de mejores prácticas, capacidades técnicas y recursos para abordar desafíos transnacionales de manera efectiva y colaborativa.

Las redes sociales en la diplomacia digital

Las redes sociales han redefinido la práctica diplomática al permitir una comunicación directa y fluida entre países de la región. Plataformas como X y Facebook se han convertido en espacios donde se promueve el diálogo y se construyen alianzas a nivel regional. Son herramientas que ofrecen oportunidades sin precedentes para interactuar con ciudadanos y

actores internacionales, lo que facilita la coordinación y colaboración en temas de interés común. Los líderes políticos y las instituciones utilizan activamente las redes sociales para impulsar la integración regional y construir una identidad común en la región; Barbados, por ejemplo, firmó un acuerdo con la plataforma Decentraland que demuestra cómo la vida digital puede aprovecharse para fomentar la participación pública y privada en la construcción de un nuevo paradigma de relaciones internacionales en la era digital (SELA, 2024).

Además del uso por parte de líderes políticos e instituciones, las redes sociales también tienen un impacto significativo en la ciudadanía y la sociedad civil, ya que mediante ellas los ciudadanos participan activamente en el debate público sobre temas regionales, expresan sus opiniones y contribuyen a la construcción de una identidad regional. Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil utilizan estas redes para movilizar a la población, promover la participación ciudadana y presionar a los Gobiernos para que tomen medidas en áreas como la protección del medio ambiente, los derechos humanos y la igualdad de género.

Gobernanza de datos y su impacto en la integración regional

En la era digital contemporánea, la gobernanza de datos emerge como un tema ineludible en la integración en América Latina y el Caribe; refiere a las políticas, normativas y prácticas que regulan la recopilación, almacenamiento, procesamiento y uso de datos en el ciberespacio, y es un aspecto fundamental, dado el crecimiento exponencial de la economía digital y la importancia cada vez mayor de los datos como activo estratégico en diversos sectores.

Existen diferentes enfoques hacia la gobernanza de datos que van desde modelos centralizados hasta otros más descentra-

lizados. Algunos países optan por un enfoque más restrictivo que prioriza la protección de la privacidad y la seguridad de los datos, mientras que otros adoptan un enfoque más liberal que fomenta la innovación y el flujo de datos transfronterizos. Estas diferencias pueden afectar significativamente la integración regional al influir en la interoperabilidad de los sistemas de datos entre países y en la confianza mutua necesaria para compartir información.

Uno de los principales problemas que presenta la gobernanza de datos es la falta de armonización de normativas y estándares entre países, que dificulta la cooperación regional y la interoperabilidad de los sistemas de datos; a ello se le suman la brecha digital y la falta de infraestructura tecnológica en algunas áreas, lo cual puede limitar el acceso equitativo a los beneficios de la economía digital y profundizar las divisiones dentro de la región. Sin embargo, también existen oportunidades para la colaboración público-privada y la integración regional, por ejemplo, mediante marcos regulatorios comunes y estándares internacionales para facilitar el intercambio de datos entre países y promover la cooperación en áreas como la seguridad cibernética, el comercio electrónico y la innovación tecnológica. El fortalecimiento de la transparencia en el acceso a la información en el ciberespacio empodera a la ciudadanía y fomenta la participación en la vida política y social de la región.

El rol de la ciudadanía es una de las claves en la gobernanza de datos. A fin de que esté consciente de sus derechos y responsabilidades respecto de sus datos personales, y de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la información en línea, se requiere que los Estados trabajen en la alfabetización digital. Esta educación sirve para empoderar a los ciudadanos, ya que, al aceptar los términos y condiciones que implican el uso de diversas plataformas, necesitan estar informados de lo que eso mismo implica.

A medida que aumenta la cantidad y la sensibilidad de los datos recopilados y procesados en el ciberespacio, también lo hace la necesidad de salvaguardar esta información contra amenazas cibernéticas y abusos. Además de desarrollar marcos regulatorios sólidos que garanticen su protección y la seguridad de las infraestructuras digitales, los países latinoamericanos y caribeños precisan de la cooperación regional en este ámbito para prevenir y mitigar ataques cibernéticos transfronterizos, y proteger la integridad de los datos. Una de las primeras acciones debe encaminarse al desarrollo de espacios donde sus representantes puedan contar sus prácticas y experiencias, además de capacitar a los funcionarios interesados en la cuestión.

La colaboración entre el sector público y el privado, otro elemento de la gobernanza de datos, parte del reconocimiento de que las empresas privadas son importantes actores en la economía digital y poseen una gran cantidad de información que puede contribuir al desarrollo económico y social de la región. Por este motivo, la colaboración debe basarse en los principios de transparencia, responsabilidad y respeto de los derechos humanos; también se debe evitar la concentración excesiva de poder en manos de algunas empresas y garantizar la equidad en el acceso y el uso de los datos.

Además de los desafíos relacionados con la protección de datos y la seguridad cibernética, la gobernanza de datos debe promover la innovación y el desarrollo tecnológico en la región, creando un entorno propicio para la inversión en investigación y desarrollo en áreas como la IA, el IoT y computación en la nube. Fomentar la innovación tecnológica mejora la competitividad en la economía digital global y genera nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico para los ciudadanos de la región.

Todo lo mencionado muestra que la gobernanza de datos es un elemento de primer orden para la integración regional en

la era digital, ya que, al ocuparse de la protección de datos, la seguridad cibernética y la promoción de la colaboración público-privada, la región puede aprovechar al máximo el potencial de la economía digital y avanzar hacia una mayor integración y desarrollo regional. Para ello se requerirá un compromiso continuo por parte de los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en el desarrollo de marcos regulatorios sólidos, el impulso de la innovación tecnológica y la garantía de respeto de los derechos humanos en el ciberespacio. Con el enfoque adecuado, la región puede convertirse en pionera en la gobernanza de datos y contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible y equitativo.

Integración física en América Latina y el Caribe

En la búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo, América Latina y el Caribe ha reconocido la integración física regional como un pilar clave para el progreso económico, social y ambiental en la región. Esta abarca una amplia gama de aspectos, desde la conexión de infraestructuras de transporte y energía hasta la coordinación de políticas comerciales y de desarrollo territorial. De acuerdo con la CEPAL, se trata de lo siguiente:

... la interconexión de las infraestructuras económicas, entre las que se cuentan las de transporte, energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, permiten generar transacciones dentro de un espacio geográfico y económico más amplio que lo nacional, posibilitando la integración del sistema económico y territorial a un nivel subregional y el surgimiento de cadenas regionales de valor. (CEPAL, s. f.)

Por ello es importante el avance en esta materia, ya que, si la calidad de la infraestructura de los países es deficiente, es difícil obtener efectos deseados en los procesos de integración y reducción de barreras comerciales (Carciofi y Gayá, 2016). Ahora bien, queda claro entonces que la integración física implica el trabajo sobre diferentes cuestiones. En el ámbito de la integración energética, se observa un creciente interés en di-

versificar fuentes y en incorporar redes eléctricas regionales, que se tradujo en proyectos de infraestructura de gran escala, como gasoductos y oleoductos transnacionales, así como en promover energías renovables, como la solar y la eólica, que aprovechan el potencial natural abundante de la región.

Asimismo, lo que podría denominarse *geoestrategia del litio y de la electricidad* emerge como un tema de interés particular debido a la creciente demanda mundial de baterías de litio para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. América Latina y el Caribe posee importantes reservas de este mineral, lo que representa una oportunidad para el desarrollo económico y la inserción en cadenas de valor globales, pero también plantea desafíos en términos de desarrollo sostenible y distribución equitativa de beneficios.

Con respecto a la mejora de la conectividad vial y portuaria, se observan esfuerzos significativos para modernizar y ampliar la infraestructura de transporte terrestre y marítimo en la región. Esto incluye la construcción de nuevas carreteras y autopistas, la expansión de puertos y terminales marítimas, y la implementación de tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia logística y reducir los costos.

Integración energética: potenciando la cooperación regional

La integración energética en América Latina y el Caribe es una respuesta estratégica ante los desafíos y las oportunidades que presenta el panorama energético regional y global. En este sentido, la cooperación en materia de energía optimiza los recursos disponibles y promueve la seguridad en la producción energética en la región; ello muestra que no solo responde a motivaciones económicas y financieras, como la creación de economías de escala y la eficiencia en las redes, sino que también aborda aspectos geopolíticos y políticos relacionados con el fortalecimiento de la integración regional.

Uno de los principales motores de la integración energética es identificar, de forma conjunta, los avances y los desafíos en el ámbito energético. Comprender el panorama permite trazar líneas de acción convergentes orientadas a superar los obstáculos y a maximizar las oportunidades. Aquí los organismos internacionales fomentan el diálogo entre las áreas pertinentes de los distintos países para que compartan experiencias y buenas prácticas en la gestión. Esto sucede en un escenario que reconoce también la necesidad de establecer mecanismos de colaboración efectivos que impulsen la coordinación entre los países y la armonización de la normativa regulatoria en el sector.

La región no está exenta de problemas en cuanto a la energía, desde la diversificación de la matriz energética hasta la garantía de un suministro seguro y sostenible, motivo que lleva a que la integración sea la vía para abordar estos desafíos al facilitar la complementariedad de recursos y la creación de mercados energéticos más eficientes y competitivos. Más allá de las diferencias en la coordinación de políticas, la armonización regulatoria y la financiación de proyectos de infraestructura a largo plazo, las oportunidades que trae la integración energética pueden conducir a una mayor resiliencia frente a choques externos, al tiempo que fomentan la inversión en energías renovables y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acorde con el desarrollo sostenible propuesto. La interconexión eléctrica y gasífera permite generar beneficios económicos significativos al facilitar el acceso a mercados más amplios y la optimización de la infraestructura existente.

En este contexto, la cooperación regional facilita el desarrollo de proyectos de infraestructura energética. La interconexión eléctrica y gasífera entre países es una iniciativa estratégica para aprovechar de manera óptima los recursos energéticos disponibles y garantizar un suministro confiable y sostenible. Algunos proyectos exitosos han demostrado los beneficios

económicos y sociales de una mayor integración en el ámbito energético, lo cual refleja el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países de la región.

Ejemplos destacados incluyen el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), proyecto que ha mejorado la seguridad energética de la región y ha contribuido al desarrollo económico y social de las comunidades involucradas. También es pertinente referirse a la central hidroeléctrica Itaipú, ubicada en la frontera entre Brasil y Paraguay, una obra conjunta entre ambos países fundamental para la generación de una gran cantidad de energía limpia y renovable, lo que ha contribuido significativamente al abastecimiento eléctrico de ambas naciones y a la integración energética en la región. Por último, la iniciativa de interconexión eléctrica andina-SINEA, que incluye a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, busca facilitar el intercambio de energía y promover el desarrollo de fuentes renovables en la región de los Andes. A través de la construcción de nuevas líneas de transmisión y la mejora de la infraestructura existente, esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la integración energética y la seguridad eléctrica en los países andinos.

La cooperación regional y la colaboración entre países contribuyen al éxito de la integración energética, con organismos multilaterales, como la CEPAL y el BID, que facilitan el diálogo político, movilizan recursos financieros y brindan asistencia técnica a los países miembros. Además, iniciativas como el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) y la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA, por sus siglas en inglés) promueven la cooperación regional en materia de energía y medio ambiente, lo que impulsa la agenda de integración energética.

La integración física en América Latina fue impulsada por diversas propuestas y proyectos que buscan fortalecer la conectividad y el desarrollo regional (Carciofi y Gayá, 2016).

Uno de los ejemplos más destacados es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), que se estableció en el año 2000 con el objetivo de coordinar proyectos en transporte, energía y comunicaciones entre los países sudamericanos. Desde su creación, la IIRSA ha promovido una agenda común de desarrollo que abarca la construcción de rutas, puertos, aeropuertos y proyectos energéticos de gran envergadura, y en 2011 fue incorporada al Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), de la UNASUR (Carciofi y Gayá, 2016). Bajo este marco, la iniciativa centró sus esfuerzos en la planificación y ejecución de proyectos de transporte, así como en el avance de la conectividad de banda ancha en la región. Esto ha permitido una mayor coordinación entre los países sudamericanos y ha contribuido a mejorar la infraestructura de transporte y comunicaciones; como consecuencia, el comercio y el intercambio de bienes y servicios se ha simplificado en la región.

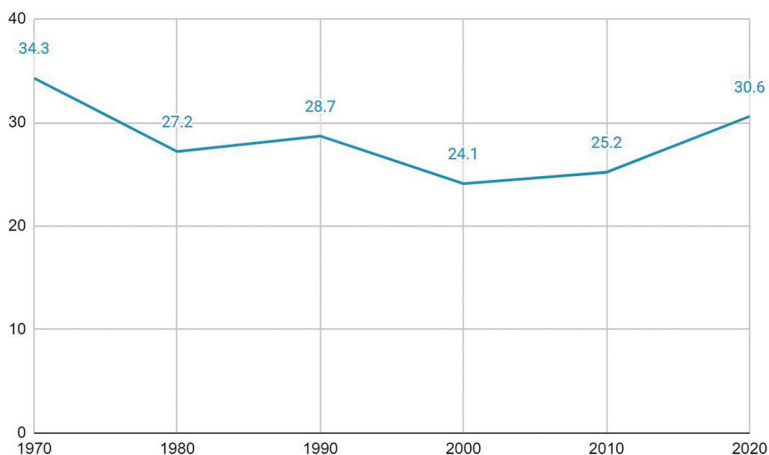
Otra experiencia significativa es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), establecido en 2006 con el propósito de financiar proyectos destinados a reducir las asimetrías de desarrollo territorial entre los países miembros del bloque (Carciofi y Gayá, 2016). A través del FOCEM, se financiaron proyectos de infraestructura en áreas como transporte, energía, comunicaciones y desarrollo urbano, lo cual ha contribuido al desarrollo equitativo de la región y a la reducción de las disparidades económicas entre los países del Mercosur.

Por su parte, el Proyecto Mesoamérica (PM) es una iniciativa de integración física en América Central (Carciofi y Gayá, 2016); fue lanzado en 2008 y tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social en diez países de la subregión a través de la implementación de propuestas de infraestructura. Entre los proyectos más importantes del PM, se encuentra el mencionado SIEPAC, que ha permitido la formación de un

mercado eléctrico subregional y ha contribuido a mejorar la seguridad energética (Carciofi y Gayá, 2016).

Figura 38

Proporción renovable de la oferta energética total de América Latina y el Caribe (porcentaje), 1970-2020



Nota: Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas, de CEPALSTAT, 2023, CEPAL (<https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html>).

Geoestrategia del litio y la electricidad: perspectivas para un futuro sostenible en la región

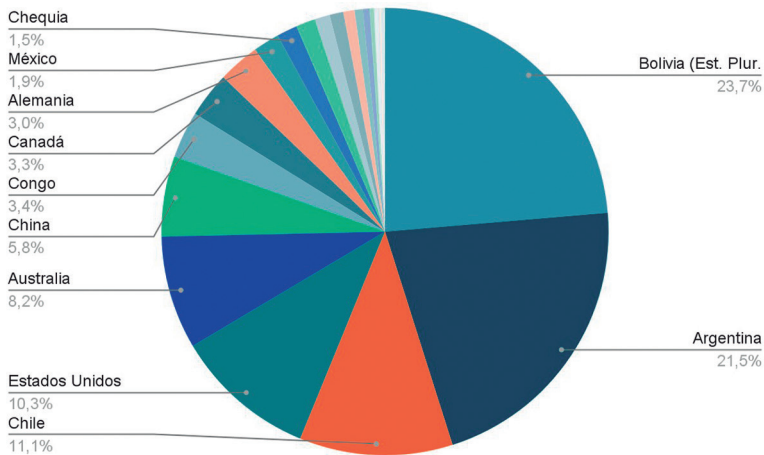
El litio se ha convertido en un recurso estratégico relevante debido a su creciente demanda en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. América Latina y el Caribe posee importantes reservas de este mineral, especialmente en países como Bolivia, Chile y Argentina; esto les otorga una posición privilegiada en el mercado mundial, ya que la explotación y el desarrollo sostenible de estas reservas tienen un impacto significativo en la economía regional: generan empleo, atraen inversiones y promueven la innovación tecnológica. El *triángulo del*

litio, conformado por esos tres países, sobresale como una región estratégica (SELA, 2023c), dado que cuenta con el 56 % del total mundial y, considerando al resto de los países de América Latina, la región entera concentra casi el 60 % de los recursos (CEPAL, 2023b).

El requerimiento internacional de litio ha convertido a estas reservas en un centro de atención en la geoestrategia global de los recursos minerales. Las decisiones y las políticas adoptadas por estos países en relación con la explotación de este mineral tienen un impacto significativo en los mercados de todo el mundo, así como en el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental y social de la región. De hecho, aún queda mucho potencial en el aprovechamiento de este recurso, ya que solo Chile, Argentina y Brasil explotan litio a gran escala comercial en la región (CEPAL, 2023b).

Figura 39

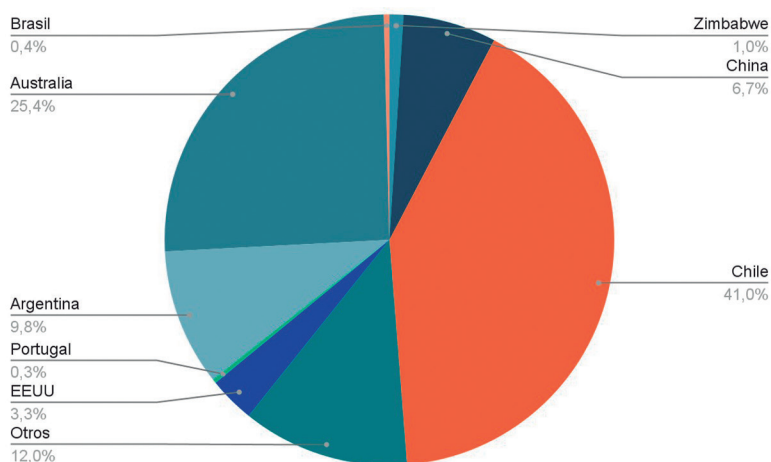
Participación mundial en recursos de litio, por país, 2021 (en porcentajes)



Nota: Extracción e industrialización del litio. Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe (p.14), de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023, CEPAL.

Figura 40

Participación mundial en reservas de litio, por país, 2021 (en porcentajes)



Nota: Extracción e industrialización del litio. Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe (p.14), de Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2023, CEPAL.

Para aprovechar el potencial del litio, se deben implementar iniciativas para el desarrollo de la cadena de valor, que incluye su extracción y procesamiento, y la fabricación de baterías y productos finales. Estas iniciativas buscan agregar valor a los recursos naturales, promover la transferencia de tecnologías limpias y diversificar las economías de la región. En ese sentido, vale la pena destacar el caso chileno, que, teniendo menos recursos de litio que los otros dos países que componen el triángulo, lo explota en mayor porcentaje.

En este proceso, la promoción de la cadena de valor del litio también implica diversificar productos e integrar verticalmente la industria. Además de las baterías para vehículos eléctricos, se están explorando aplicaciones en sectores como la electrónica, la energía estacionaria y la industria química.

Esto no solo amplía el mercado para el litio, sino que también crea oportunidades para el desarrollo de industrias manufactureras y de servicios relacionados.

La gestión del litio varía en la región debido a diferentes regímenes de gobernanza, lo que subraya la importancia de directrices de política para aprovechar este recurso de manera sostenible y eficiente (CEPAL, 2023b). Se destacan tres aspectos claves: en primer lugar, la sostenibilidad ambiental y social requiere ajustar las regulaciones vigentes para garantizar la participación local en el control y la gestión del impacto socioambiental de los proyectos mineros; asimismo, mejorar la gobernanza ambiental y social permite cumplir con las exigencias crecientes de los consumidores y países respecto a los productos finales que contienen litio. Esto implica implementar prácticas para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía, monitorear los salares, establecer tasas de extracción sostenibles y compensar la pérdida de biodiversidad.

En segundo lugar, en términos de ingresos fiscales e inversión pública y privada, se busca captar una mayor parte de las rentas económicas generadas por la explotación del litio de manera transparente y progresiva, además de mejorar la distribución y el uso de estas rentas para apoyar un cambio estructural hacia actividades más intensivas en conocimiento y tecnología. Esto requiere incentivos para atraer inversión extranjera, promover asociaciones público-privadas y fomentar la economía circular para valorizar los residuos mineros.

Finalmente, la cooperación, coordinación e integración regionales presentan un potencial significativo para mejorar normas y prácticas, fortalecer la posición regional frente a la demanda global y evitar competencias desleales. La colaboración regional impulsa el desarrollo de cadenas de valor regionales en torno al litio y otros minerales estratégicos, especialmente en tecnologías para la transición energética y electromovilidad (CEPAL, 2023b).

La generación y distribución de electricidad proveniente de fuentes renovables, como la solar, eólica e hidroeléctrica, permite avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible. Dentro de un marco de cooperación regional, esto cobra especial relevancia, ya que permite aprovechar los recursos naturales disponibles de manera más eficiente y promover la interconexión eléctrica entre países. Los proyectos conjuntos de generación de energía renovable y las redes de transmisión eléctrica interconectadas contribuyen a garantizar un suministro de energía confiable, resiliente y sostenible en toda la región.

La integración energética en la región está avanzando con varios proyectos que refuerzan la cooperación y posibilitan una transición hacia fuentes de energía más limpias. Uno de los proyectos destacados es la Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá (ICP), que se está reactivando con la construcción de una línea de 500 km. Esta infraestructura, que conectará las subestaciones Cerro Matoso, en Colombia, y Panamá II, en Panamá, es un caso para diversificar la matriz energética y facilitar la transición hacia energías renovables. La colaboración entre los Gobiernos de Colombia y Panamá busca garantizar tarifas justas, mejorar la oferta energética y afrontar los desafíos climáticos mediante la generación de mercados eléctricos eficientes y sostenibles. Este proyecto también tiene el potencial de promover el hidrógeno verde como una fuente de energía alternativa en la región.

Otro proyecto relevante es la rehabilitación de la línea de transmisión InterAndes entre Chile y Argentina, que tiene una longitud de 409 km. La recuperación de esta línea contribuirá a reducir los costos sistémicos, evitar vertimientos de energía renovable y mejorar la flexibilidad del sistema eléctrico. La inversión en este proyecto forma parte del esfuerzo para descarbonizar los portafolios energéticos de ambos países y avanzar en el uso de soluciones innovadoras, como el hidrógeno verde y el almacenamiento de energía.

En el ámbito centroamericano, el Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética (SICREEE) es una iniciativa para promover la sostenibilidad energética en los países del SICA. Desde su inicio, en 2015, el SICREEE ha trabajado en la evaluación de necesidades y en la formulación de proyectos que buscan mejorar la eficiencia energética y fomentar el uso de energías renovables en Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Este proyecto se centra en coordinar esfuerzos y apoyar la transición energética en la región.

Por su parte, la CAN y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) han firmado un convenio para fortalecer la integración energética regional. Este acuerdo permitirá desarrollar estudios y proyectos en áreas como infraestructura, comercio energético y eficiencia, además de promover la cooperación en la implementación de políticas y normativas. La integración energética es una prioridad para la CAN, y este convenio busca mejorar la seguridad y la sostenibilidad del suministro eléctrico en la región andina.

En relación con lo expuesto, para fortalecer esta geoestrategia energética, es necesario avanzar en la integración de los proyectos de explotación del litio con el desarrollo de una infraestructura energética sostenible. Esto incluye no solo la producción de litio para baterías, sino también el impulso de las energías renovables que alimentarán la próxima generación de tecnologías limpias. La electrificación de los sistemas de transporte y la transición hacia fuentes de energía renovable permiten reducir las emisiones de carbono y cumplir con los objetivos climáticos globales.

La cooperación regional en el ámbito energético puede acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. La región, con su abundancia de recursos renovables, está en una posición privilegiada para liderar el cambio hacia una matriz energética más verde. La inversión en proyectos conjuntos

de energía solar, eólica e hidroeléctrica, junto con la modernización de las redes de distribución eléctrica, puede mejorar la seguridad energética y fomentar el desarrollo sostenible.

Por otro lado, la integración de tecnologías de almacenamiento de energía, como las baterías de litio, en el sistema energético regional permitirá una mayor flexibilidad y estabilidad en el suministro de electricidad. Esto es particularmente importante para mitigar los desafíos asociados con la intermitencia de las fuentes renovables y para garantizar un suministro de energía ininterrumpido y confiable.

Es imperativo que las políticas energéticas consideren el potencial de cooperar con otros países y regiones para desarrollar una infraestructura energética robusta y resiliente. Esta colaboración, donde se intercambian conocimientos y tecnologías avanzadas, puede potenciar el desarrollo de capacidades locales y asegurar que los beneficios de la transición energética se distribuyan equitativamente.

Una geoestrategia energética que combine la explotación responsable del litio con el desarrollo de energías renovables no solo contribuirá a la sostenibilidad ambiental, sino que también fortalecerá la posición de América Latina y el Caribe como un actor relevante en la economía global del futuro. La promoción de políticas integradas que impulsen tanto la producción de litio como la generación de electricidad renovable posibilitan la creación de un entorno económico y social más resiliente y sostenible.

Integración vial y portuaria: conectando a la región

La inversión en infraestructura vial y portuaria es una variable que considerar para el incentivo del comercio intrarregional y la integración económica en América Latina y el Caribe, donde se están llevando a cabo una serie de proyectos para me-

jorar la conectividad y facilitar el transporte de mercancías. Esto incluye la construcción y ampliación de rutas, puentes y túneles, así como la modernización y expansión de puertos marítimos. Entre estos últimos proyectos, se encuentran dos que cabe mencionar: uno que parte de Santos y otro que parte de Paranaguá. Ambos forman parte del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, una iniciativa ferroviaria que se desarrollará en Brasil, Bolivia y Perú, y que se conectará por hidrovía y vía férrea con Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile.

La mejora de la infraestructura vial y portuaria conlleva una serie de beneficios económicos y sociales para la región, como el hecho de que una mejor conectividad reduce los costos de transporte y logística, aumenta la competitividad de las empresas y facilita el acceso a nuevos mercados; además, favorece la creación de empleo en sectores relacionados con la construcción, el transporte y la distribución de mercancías.

Desde una perspectiva social, una infraestructura de transporte eficiente mejora el acceso a servicios básicos, como educación y salud, y facilita la movilidad de las personas, lo cual promueve la inclusión social y la cohesión territorial. Sumado a los avances en materia de infraestructura vial y portuaria, la región tiene oportunidades para fortalecer aún más la cooperación regional y abordar los desafíos que puedan surgir de manera conjunta; entre estas oportunidades, se encuentran la creación de mecanismos de financiamiento y cooperación multilateral, la promoción de asociaciones público-privadas y la implementación de políticas de desarrollo sostenible e inclusivo que garanticen la equidad y la participación de todas las regiones.

En línea con los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los proyectos de infraestructura vial y portuaria en la región deben estar orientados hacia la sostenibilidad y la mitigación de impactos ambientales; asimismo, se deben considerar medidas para reducir la huella de carbono de di-

cha infraestructura, como adoptar tecnologías más limpias en el transporte y la logística, usar materiales ecológicos en la construcción y promover de la movilidad urbana sostenible. Estas acciones no solo contribuyen a la protección del medio ambiente, sino que también generan oportunidades para el desarrollo de industrias verdes y la creación de empleo en sectores relacionados con la economía circular y la eficiencia energética.

La mejora de la infraestructura vial y portuaria también impulsa la integración fronteriza y el desarrollo territorial en áreas de difícil acceso, lo que facilita el intercambio comercial y cultural entre países vecinos, a la vez que promueve la cooperación y la paz en zonas históricamente conflictivas. Si bien estas mejoras fomentan el desarrollo económico y social en regiones periféricas, creando oportunidades de empleo y mejorando la calidad de vida de las comunidades locales, es fundamental garantizar que los proyectos se lleven a cabo de manera inclusiva y respetuosa con los derechos de las poblaciones indígenas y otras comunidades tradicionales a fin de evitar la explotación y el desplazamiento injusto de personas.

En relación con lo expuesto, la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, impulsada por el SELA en colaboración con el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, tiene como objetivo principal mejorar la competitividad del comercio exterior en la región mediante prácticas colaborativas e institucionales en las comunidades logísticas portuarias. Con la participación de una amplia gama de actores, por ejemplo, autoridades nacionales y locales, instituciones privadas y académicas, así como organismos multilaterales como la CEPAL, la Red busca promover el intercambio de ideas y experiencias para abordar los desafíos comunes en el desarrollo de las comunidades logísticas portuarias, lo cual consolida redes de apoyo a nivel nacional y regional.

Referencias

Banco Mundial (2024). *Gasto público en educación, total (% del PIB)*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>

Barrinha, A. y Renard, T. (2017). Cyber-diplomacy: the making of an international society in the digital age. *Global Affairs*, 3(4-5), 353-364.

Becerra, M. (2023). El progreso inconcluso de inclusión digital en América Latina. *Telos*, Área de Conocimiento y Cultura de la Fundación Telefónica. <https://telos.fundaciontelefonica.com/el-progreso-inconcluso-de-inclusion-digital-en-america-latina/>

Becerra, M. y Mastrini, G. (2017). *La concentración infocomunicacional en América Latina (2000-2015): nuevos medios y tecnologías, menos actores*. Universidad Nacional de Quilmes y Observacom.

Beylis, G., Maloney, W., Vuletin, G. y Zambrano Riveros, J. (2023). *Conectados: Tecnologías Digitales para la Inclusión y el Crecimiento. Informe Económico América Latina y el Caribe (Octubre 2023)*. Banco Mundial.

Bianchi, M y Lara, I. (2021). *Gobernanza regional 3M: hacia una convergencia del multilateralismo en América Latina en tiempos pandémicos*. Asuntos del Sur.

Bouzas, R. (2017). El regionalismo en América Latina y el Caribe: ¿qué hay de nuevo? *Estudios Internacionales*, 49, 65-88.

Campos Ríos, M. (2023). *Cadenas de valor público y ecosistema digital*. SELA.

Carciofi, R. y Gayá, R. (2016). Integración física en América Latina: Una revisión de la experiencia reciente y lecciones de política. *Boletín Informativo Techint*, 351, 13-54.

Castells, M. (2009). *Comunicación y Poder*. Alianza.

Ceballos, L., Maisonnave, M. y Britto Londoño, C. (2020). Soberanía tecnológica digital en Latinoamérica. *Revista Propuestas para el Desarrollo*, 4(4), 151-167.

CEPALSTAT (11 de enero de 2023). *Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas*. CEPAL. <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (s.f.). *Economics of climate change in Latin America and the Caribbean*. https://www.cepal.org/sites/default/files/infographic/files/infographic_economics_of_climate_change.pdf.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (s.f.). *Integración física regional*. <https://www.cepal.org/es/subtemas/integracion-fisica-regional>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021). Datos y hechos sobre la transformación digital. *Documentos de proyectos* (LC/TS.2021/20), CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023a). *América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: avances y propuestas de aceleración*. CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023b). *Extracción e industrialización del litio Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe*. CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023c). *Estudio Económico de América Latina y el Caribe*. CEPAL.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2024). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2023* (LC/PUB.2023/25-P). CEPAL.

Cornejo, R. (2018). Estrategias y mecanismos para la convergencia de los acuerdos comerciales en América Latina. *Resumen de políticas del BID*, 270.

Del Villar, T. (2016). La articulación productiva como elemento clave para el desarrollo económico: la experiencia de España, Corea del Sur y México frente al proceso de internacionalización de la producción, 1980-2000. [Tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid]. Docta Complutense - Universidad Complutense de Madrid.

Dini, M. y Stumpo, G. (2020). Mipymes en América Latina: un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento. *Documentos de Proyectos (LC/TS.2018/75/ Rev.1)*. CEPAL.

Domínguez Bascoy, J. (2014). La ciberseguridad: aspectos jurídicos internacionales. *Revista Cursos de derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz - Vitoria-Gasteizko nazioarteko zuzenbide eta nazioarteko herremanen ikastaroak*, 1, 161-224.

Ember (s.f.). *Latin America and Caribbean electricity generation by source*. <https://ember-climate.org/countries-and-regions/regions/latin-america-and-caribbean/>

Fondo Monetario Internacional (2024). *Actualización de perspectivas de la economía mundial: La moderación de la inflación y el crecimiento firme desbrozan el terreno para un aterrizaje suave*. Editorial FMI.

Gallego Gómez, C. (2022). Internet de las cosas: La tecnología como aliada de la sostenibilidad. EAE Business School.

García Zaballos, A., Iglesias Rodríguez, E., Puig Gabarró, P. y Dalió, M. (2023). *Informe anual del Índice de Desarrollo de la Banda Ancha: Brecha digital en América Latina y el Caribe*. Banco Interamericano de Desarrollo.

Giacalone, R. (2016). Conceptualización y marco analítico explicativo del multilateralismo latinoamericano. *Oasis*, 24, 7-25.

Gómez-Mera, L. (2015). La complejidad del régimen internacional y

la gobernanza regional: evidencia de latinoamérica. *Foro Internacional* 220, 55(2), 503-539.

González Palacios, M. (2022). ¿Hacia dónde va el multilateralismo en América Latina? En M. González Palacios, D. Sánchez y F. Badia i Dalmases (eds.), *Tejiendo lazos: El futuro del multilateralismo en América Latina* (pp. 54-56). democraciaAbierta.

Guadarrama, P. (2013). Papel de la educación superior en la superación de las barreras para la integración latinoamericana. *Revista Aportes para la Integración Latinoamericana*, 19(29), 1-30.

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (2018). *Desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: desafíos y ejes de política pública*. UNSDG.

Huerta, J. J. (2011). Articulación productiva para la innovación en las pequeñas empresas acuícolas de la región occidente de México. *Revista El Ágora USB*, 11(2), 403-422.

Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación*. Paidós.

Malamud, A. (2006). Estado. En L. Aznar y M. De Luca (comps.), *Política. Cuestiones y problemas* (pp. 83-106). Ariel.

Malamud, A. (2011). Conceptos, teorías y debates sobre la integración regional. *Norteamérica*, 6(2), 219-249.

Merino, G., Morgenfeld, L. y Ramírez, M. (2021). *Hacia una estrategia autónoma de inserción internacional de América Latina frente a la crisis de la hegemonía estadounidense y del multilateralismo "globalista"*. CLACSO.

Muñoz-Pogossian, B., Botero, A., González Bengoa, C. y Meneses, S. (2023). *Gobernanza Migratoria Regional en las Américas*. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (15 de septiembre de 2015). *La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo*

llo Sostenible. ONU <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/#>

Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe (2020). *Ciberseguridad: riesgos, avances y el camino a seguir en América Latina y el Caribe. Reporte Ciberseguridad 2020*. BID y OEA.

Ojeda Medina, T. (2019). Introducción. En T. Ojeda Medina y E. Echart Muñoz (comps.), *La cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe: balance de una década (2008-2018)* (pp. 15-40). CLACSO.

Organización de las Naciones Unidas (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. ONU.

Organización Internacional para las Migraciones (31 de enero de 2014). *Personas migrantes en tránsito por las Américas*. <https://rosanjose.iom.int/es/tablero-interactivo-personas-migrantes-en-transito-por-las-americas>

Organización Mundial del Comercio (20 de febrero de 2024). *Acuerdos Comerciales Regionales. Base de Datos*. <https://rtais.wto.org/UI/charts.aspx>

Parthenay, K. (2022). Los multilateralismos en América Latina. ¿Relanzamiento o recomposición? *Les Etudes du CERI*, 264-265, 19-23.

Pastor, C. y Serebrisky, T. (28 de enero de 2020). *La inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe no despega*. BID. <https://blogs.iadb.org/agua/es/infralatam-inversion-en-infraestructura-en-america-latina/>

Perrotta, D. (2013). La integración regional como objeto de estudio. De las teorías tradicionales a los enfoques actuales. En E. Llenderozas (coord.), *Relaciones Internacionales: teorías y debates*. Eudeba.

Ramos, H. (2018). Modelos de integración en América Latina: objetivos, mecanismos y actores. *Cuadernos de Política Exterior Argentina (Nueva Época)*, 127, 25-41.

Red Argentina para la Cooperación Internacional (2023). *Tendencias de la cooperación internacional en América Latina y el Caribe*. RACI e Innovación para el Cambio.

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2023). *El estado de la ciencia: Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos*. OEI y UNESCO.

Riordan, S. (2019). *Cyberdiplomacy: Managing Security and Governance Online*. Polity Press.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). "En defensa de mi hipótesis sobre el mestizaje colonial andino". En *Violencias (re)encubiertas en Bolivia*. La Mirada Salvaje.

Rivera Cusicanqui, S. (2014). "Chi'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores". En *Chi'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón.

Rodríguez Benavides, D., Mendoza, M. y Perrotini, I. (2015). Análisis no-lineal de la convergencia regional en América Latina, 1950-2010: un modelo panel tar. *Revista Problemas del Desarrollo*, 46 (182), 119-141.

Rodríguez, I. y Govea, H. (2006). El discurso del desarrollo sustentable en América Latina. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 12(2), 37-63.

Schmitter, P. (2011). Los conceptos de cooperación e integración regional. *Puente@Europa*, 9(1), 8-11.

Secretaría General Iberoamericana (2023). Informe de la Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica 2022. SEGIB.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2016). *Análisis de las relaciones económicas de América Latina y el Caribe con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)*. SELA.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2023a). *Revista Convergencia*, 1(3). SELA.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2023b). *Seminario CELAC–SELA: hacia una política migratoria integral en la región. Informe de relatoría*. SELA.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe y Sistema para la Integración Centroamericana (2023a). *Seminario SELA-SICA: “Integración energética regional”. Informe de relatoría*. SELA.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2023b). *América Latina y el Caribe frente a los desafíos de la integración del Siglo XXI*. SELA.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2023c). *Mapeo de Nichos Productivos en América Latina y el Caribe: Experiencias y Lecciones Aprendidas*. SELA.

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (2024). *Manual de Ciberdiplomacia para la Convergencia Regional*. SELA.

Statista (2024). *Número de usuarios de internet por país en América Latina en enero de 2023 (en millones)*. <https://es.statista.com/estadisticas/1073677/usuarios-internet-pais-america-latina/>

Vaca Trigo, I. y Valenzuela, M. E. (2022). *Digitalización de las mujeres en América Latina y el Caribe: acción urgente para una recuperación transformadora y con igualdad*, Documentos de Proyectos, CEPAL.

Van Klaveren, A. (2020). La crisis del multilateralismo y América Latina. *Análisis Carolina* 10/2020.

Vega, J. M. (2023). Ciberdiplomacia en América Latina: niveles, enfoques y velocidades. *Real Instituto Elcano ARI*, 38, 1-7.

Vigil, J. y Fernández, V. (2012). Gobernanza y regiones en perspectiva crítica: un abordaje para la construcción de políticas públicas. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, 53, 21-60.

Weck, W. y Marten, T. (2020). Multilateralismo: perspectivas latinoamericanas. En W. Weck (ed.) y T. Marten (coord.), *Multila*

teralismo: perspectivas latinoamericanas (pp. 11-25). Fundación Konrad Adenauer.

Wilson, M. (2019). MERCOSUR: la cultura en el proceso de integración. *Perspectivas, Revista de Ciencias Sociales*, 4(8), 139-149.

ISBN: 978-980-6458-30-7



9 789806 458307